





VOCES DIGNAS

La COLECCIÓN VOCES DIGNAS es un proyecto de FICA encaminado a rescatar otros puntos de vista de carácter histórico sobre la realidad colombiana, desde la óptica de los protagonistas que se sitúan en el lado opuesto de la versión oficial. La Fundación considera que el rigor científico que exige la investigación histórica obliga a no omitir fuente alguna que pueda aportar claridad sobre los hechos que impactan y transforman la sociedad. Asimismo, dentro de la filosofía del presente proyecto, considera necesario también dar cabida en él a otras voces en el contexto indoamericano y en otros en los que la huella de la realidad haya cedido a la censura de los sectores oficiales.

Las obras que pretendemos difundir provienen de autores que se destacan o se destacaron en la lucha por la defensa de los derechos de las colectividades a las que pertenecen o pertenecieron, y cuya participación social no ofrece duda alguna acerca de la coherencia de sus principios y la calidad de sus virtudes. Son, ante todo, ciudadanos de primer orden, inmersos en un espíritu altruista y carentes por completo de actitudes mezquinas, ambiciones materiales y ansias de poder.

Título de Colección

COLECCIÓN VOCES DIGNAS

Título de la obra


SALVO LA ILUSIÓN TODO ES EL PODER

Autor: Alberto Pinzón Sánchez

Primera Edición. FICA 2012

ISBN de la Obra: 978-958-8239-32-3

Edición:

©  Fundación para la
Investigación y la Cultura
Cali - Bucaramanga - Bogotá
Correo: fundafica@gmail.com
www.cronicon.net/fica/index.html

Director

Gerardo Rivas Moreno

Coordinación editorial

Miguel Eduardo Cárdenas Rivera

Composición editorial/diseño de carátula

Juan Sebastián Rivas Agudelo

Fotografía

Alberto Pinzón Sánchez y otras fuentes

Impresión:

Xpress Estudio Gráfico y Digital S. A.

Hecho en Colombia

Bogotá 2012

**SALVO LA ILUSIÓN
TODO ES EL PODER**

Por

Alberto Pinzón Sánchez



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	9
DESDE MI VENTANA	25
NUEVE DE ABRIL	27
LA BÚSQUEDA DE LA PAZ	33
NIÑEZ	51
CÓNDOR TRES	57
ADOLESCENCIA	61
EL VÓMITO DE SARAMAGO	75
MAYORÍA DE EDAD	83
MI EXPERIENCIA DEL CAGUÁN	87
LA LEPRA	97
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA	109
LA METAMORFOSIS	115
LA RAÍZ FRANCESA	121
TRES DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES NEOLIBERALES	127
VAUPÉS	131
LA RAÍZ DEL BANANO	137
MANIZALES DEL ALMA	143
GEO-ESTRATEGIA	147
ROJO	155



PRESENTACIÓN

El narrador

Divagar sobre la experiencia personal al tiempo que se rinde un testimonio acerca de los eventos que rodean al individuo escinde en dos planos el intento discursivo. Por un lado, la recreación vivencial, sometida al dominio de las tensiones emocionales, que por más que deriven de una realidad vivida, no pueden ser traducidas al lenguaje reflexivo y se impone como necesidad el acto de creación, o sea, arribar al dominio de la poesía, a la ficción. A esta altura, el compromiso ético exige sólo un ámbito de sinceridad. En cambio, en el otro nivel se impone el discurso reflexivo. Impera el distanciamiento, la independencia del sujeto respecto del objeto asumido.

Tal es la naturaleza y el reto del texto presente. Memorias de vida, crónicas de viaje, narraciones biográficas, cuadros de costumbres, etc. , constituyen un aparte especial en el campo de la narración o el relato. Son discursos que dan cabida a dinámicas reflexivas de diverso valor, aunque simulen surgir y permanecer como objetos estéticos ajenos a la especulación científica. La carga documental que exponen distorsiona la intención estética en beneficio del acopio informativo. Con ello, más que conmover al interlocutor se le entera, se le ilustra; no de los efectos vivenciales de la experiencia sino de los elementos contingenciales de la misma.

Sin embargo, la obra de Alberto Pinzón Sánchez se revela como un documento que se ocupa de ambos terrenos y los labra con eficiencia para conmover al interlocutor al revelar, con sinceridad incuestionable, los momentos de alegría y tristeza, las decepciones y los asombros de personajes sometidos a las tensiones dramáticas que los constriñen desde sus entornos íntimos o mediatos, al tiempo que denuncia sin piedad y con

la fidelidad del científico social, los pormenores de un acaecer social y político que, debido a la mordaza que impone el juego de las ambiciones humanas, permanecen escondidos para la mayoría de los sujetos que son afectados por estos eventos.

Este último insumo le da a la narración de Pinzón Sánchez un valor inestimable. Testigo de primera mano de la historia reciente del país, se resiste a claudicar ante la inercia falsificadora de la 'verdad' oficial y descubre con un valor insoslayable, en un territorio en el que la dignidad sucumbe ante el embate de la corrupción o de la violencia, la naturaleza mendaz y abyecta de las clases dirigentes locales y los hilos ominosos que controlan el devenir de las sociedades desde los centros de poder imperial. Documento importante por provenir de un hombre que ha brindado su talento y su esfuerzo al servicio de fines altruistas y de quien nadie puede predicar intención mezquina o interés turbio. Escribir la Historia requiere de testimonios de este carácter: testigos presenciales, independientes y llenos de probidad.

El libro

Al leer el libro que FICA publica disfrutará el atento lector de un buen discurso literario, la forma como el autor construye el relato, la sutileza como lleva la imaginación a ver los colores del paisaje, sentir los olores de las flores, percatar el perfil sicológico de los personajes, pulsar la tensión social que sirve de marco para explicar la forma cómo el autor madura y sale como una larva de su capullo, sin dejar la exigente solidez histórica cuando aborda el tema de la violencia y la guerra, etcétera. Los cortes del relato para ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y evitar la mecánica del 1, 2, 3, propia de la secuencia cronológica usual, y librarse del cartesianismo estéril y alienante propio de la racionalidad con la que la cultura burguesa nos entorpece, nos aclimata en su pérfida estolidez y nos hace creer que somos humanos.

El libro de Alberto Pinzón devela un problema presente en la *psiquis* de un individuo cuando asume un compromiso y enfrenta enhiesto su propia lucha contra la gris existencia que impone el capitalismo. Es cierto que la capacidad de aprendizaje viene mediatizada por la *cultura*, dado que –como lo explica Marx– el hombre es un ser social y ese ser social determina su conciencia; pero, a la vez, la conciencia –como en el ejemplar caso de Pinzón– determina dialécticamente su existencia de luchador por una revolución, en una fase crítica de la historia cuando muchos desertaron y unos pocos se radicalizaron. Hay

todavía quienes en América Latina esperan esperanzados la justicia. Pero Colombia y su remedo de democracia permite que perdure la regla oligárquica impuesta en el Caribe por el célebre dictador que retrató Vargas Llosa: “Para mi familia y mis amigos todo. Para mis enemigos la Ley”. ¡Qué tristeza!

El relato histórico alcanza la actualidad

Como zaga o *continuum* de la obra presente introducimos aquí parte de un sesudo análisis titulado “Colombia tinto con final claro” que Alberto Pinzón publicó el 8 de febrero de 2012, en el que anota:

En Colombia dentro del partido conservador también ha existido tradicionalmente una división burocrática entre los ‘principistas’ y los ‘moderados’, que llegó a su máxima expresión en los años 30 del siglo XX, con la división entre los seguidores del nacional-catolicismo de Laureano Gómez y los social-conservadores o colaboracionistas con los liberales de Ospina Pérez. Por esa razón cuando a mediados del 2001, se inició la ofensiva política de los enemigos ocultos y abiertos (mano negra) del presidente social conservador Andrés Pastrana, a los diálogos de paz del Caguán; el hijo predilecto de Laureano, Enrique Gómez Hurtado, calificó la mesa de diálogos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, como un ‘tintiadero sangriento donde unos delegados del gobierno y unos jefes guerrilleros se reúnen a tomar tinto y echar carreta, mientras por fuera corre la sangre de los colombianos’. Pastrana había impuesto la opinión militarista de adelantar los diálogos de paz, en medio de la guerra.

Sin proponérselo el jefe falangista colombiano había desnudado las tres principales fallas que habrían de dar al traste con el intento de buscar una solución política al histórico conflicto social armado colombiano y que actualmente constituyen una experiencia irrepetible e inolvidable.

1º La división insalvable en el seno de la clase dominante y su aparato militar, en torno a las reformas (de todo tipo) que se habían firmado oficialmente por ambas partes en la Agenda Común de La Machaca en 1999, enriquecida con los 2.553 documentos de las Audiencias Temáticas y que constituyen un tratado legal y legítimo entre partes contendientes.

2º La improvisación de no saber a dónde llegar al final (tomar tinto y echar carreta) o como lo expresó uno de los delegados estatales (tan cercanos al mundo rural) citando el dicho arriero de que ‘por el camino se arreglan las cargas’; impracticable en un asunto tan serio y complejo como hallar la solución política a tan enmarañado problema social y continental.

3º Negociar en medio de la guerra (mientras por fuera corre la sangre) que demostró su manipulación cuando el presidente Pastrana lo usó como justificación para finalizar el proceso del Caguán.

Hoy, desconociendo estas tres fallas, algunos crédulos o ingenuos hablan de la posibilidad de unos nuevos diálogos de paz entre la insurgencia de las Farc y el gobierno de las locomotoras de Santos, que carece de locomotora (o programa) para la paz y, está empeñado en adelantar a como de lugar su reelección presidencial, sobre la base del éxito de su plan

de gobierno neoliberal de entrega a las multinacionales, soslayando la profunda división política que se debate en el seno de la clase dominante y dirigente y, que desde ya apuesta al fracaso de un proceso de diálogo para la paz, para montar sobre esa nueva frustración, la reelección de su máximo representante Uribe Vélez.

Ante la carencia de un partido político 'legal' de la izquierda, que oriente y articule en la práctica al creciente y dinámico movimiento social colombiano, y conduzca más allá de lo electoral, la movilización del pueblo trabajador con el fin de que se apodere de la 'llave de la paz' y la exhiba en sus combativas movilizaciones por calles, plazas, y veredas de Colombia; la red que agrupa a las diversas expresiones del movimiento social ha tenido que llenar este vacío político y ha tomado la iniciativa de convocar a todo el pueblo y mediante la movilización de masas, a imponer al gobernante de turno la solución política al conflicto armado y conseguir la anhelada paz democrática avanzada, con justicia social y soberanía. Eso es lo que se llamaría, un tinto colombiano con final claro.

Si bien lo que plantea Pinzón es coherente se puede anotar un punto –a más de los tres que con tino señala– sobre el 'fracaso' de 2002: cuando la oligarquía (lo que los amigos de las falacias llaman el 'establecimiento') percató la capacidad y vocación de gobierno demostrada por las Farc y sus voceros en las Mesas Temáticas, en especial cuando el 19 de mayo de 2001 Iván Ríos hizo su propuesta de manejo de la crisis social, hubo un repliegue estratégico en el 'diálogo' que luego –como bien lo explica Pinzón– colapsó: la naturaleza de la guerra en Colombia es que es una guerra contra el pueblo que legitima el negocio y la corrupción del generalato y los contratistas de pertrechos, etc.; así, mantener la guerra es mantener sus privilegios...

Sobre el concepto de movimiento social puede de manera más precisa usarse la categoría movimiento social 'de resistencia' y no apegarse a la idea leninista de la dirección de un partido cuando, según la experiencia, el movimiento mismo puede tener su propia capacidad autónoma de dirección como se demostró a partir la Primera Internacional y lo retomó en su momento Rosa Luxemburgo. Otro aspecto de carácter fundamental es recoger y profundizar un planteamiento estratégico del ejercicio del poder en el ámbito territorial como lo propone el Congreso de los Pueblos. La izquierda reblandecida reclama al Estado burgués lo que sólo se puede lograr si se produce *de facto* la reorganización de la sociedad a través del proceso resultante del pleno ejercicio de la autonomía de las organizaciones sociales...

Viabilidad de un proceso de paz

Es preciso interrogarse acerca de la viabilidad estructural de un proceso de paz. La pobreza no es la explicación absoluta de la

PRESENTACIÓN

violencia que azota a Colombia desde hace más de seis décadas. Tampoco lo es una cierta condición cultural acompañada de una predisposición genética al uso irracional de la fuerza. Entre los dos extremos interpretativos hay un hecho irrefutable: crecimiento y concentración de la riqueza, aumento de la pobreza y mayor violencia contra las poblaciones más vulnerables socialmente, conforman el retrato de la sociedad colombiana.

En Colombia se profundiza una tendencia histórica hacia la desigualdad social. Colombia ostenta uno de los coeficientes Gini más altos de la región. Este indicador llega al 0.58 reconocido internacionalmente. Existen casos aberrantes como el del capital bursátil. El 80% de este capital está concentrado en los 20 mayores accionistas de cada empresa, el 0.2 de la totalidad de los accionistas del país. Algo similar ocurre con la propiedad agraria: 2428 propietarios públicos y privados poseen el 54% del territorio registrado catastralmente, es decir 44 millones de hectáreas, para un promedio de 18.000 hectáreas por propietario, o un territorio 6.000 veces más grande que el minifundio de 3 hectáreas en el que viven 2.2 millones de colombianos.

En los inicios de la década de 1980 el porcentaje del valor agregado apropiado por los trabajadores en el PIB era de 44%, actualmente viene cayendo de manera acelerada, en el año 2000 esta participación fue de 37% y en 2010 alcanzó su nivel más bajo, esto es, 29%. Ello significa que en las tres últimas décadas los asalariados perdieron 15 puntos en la apropiación de la riqueza anual generada por ellos mismos.

Si bien el gobierno argumenta que el promedio de crecimiento económico ha tenido efectos significativos en la reducción de la pobreza en casi 10 puntos porcentuales en lo corrido del siglo XXI (de 58% a 49%, más de dos millones de personas habrían salido de la pobreza), la verdadera causa de este descenso debe buscarse en los impactos de la guerra, esto es, en la eliminación y la desaparición física de cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría pobre y en la diáspora de cerca de 5 millones de colombianos dispersos por los diversos confines del planeta. Estos trabajadores envían a sus familias remesas por más de 4 mil millones de dólares por año, el segundo renglón en ingreso de divisas al país. Este dinero, una vez descontados los costos financieros, es utilizado para aliviar las necesidades básicas insatisfechas de sus familias.

En las zonas rurales, la población lleva la peor parte del enfrentamiento bélico. Durante el período analizado,

la población rural perdió diez puntos porcentuales en su participación en el total nacional: según el censo de 1985, la población rural representaba el 35%; en el censo de 2005 cayó a 25%. Todo esto, producto del destierro y expropiación asociado a la guerra, a la consolidación de poderes regionales-paramilitares, a la presencia directa de empresas transnacionales y la invasión de tropas estadounidenses, a la ejecución de megaproyectos en marcha y a la pérdida progresiva de ingresos de los pobres del campo. Actualmente, el destierro y la expropiación afecta a cerca de cuatro millones de personas. De la mano de esta guerra en contra de los pobres del campo, la concentración de la propiedad rural es alarmante; en efecto, el vuelco en la distribución de la tierra, según datos de las autoridades catastrales, ha sido abrumador: en el último cuarto de siglo la gran propiedad (más de 500 hectáreas) pasa de controlar 47% a 68% de la superficie catastrada, entre tanto, la pequeña propiedad cae de 15% a 9%.

Si se quisiera ver la distancia entre ricos y pobres habría que anotar que los colombianos más ricos tienen 46 veces más que los más pobres. En Japón, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, Inglaterra, Reino Unido y Alemania, esa relación es sólo de seis veces más, entre unos y otros. América Latina es la región con más alta concentración de la riqueza y el ingreso en el mundo. En ésta sobresalen Brasil y Colombia por el alto nivel de desigualdad.

En la distribución del ingreso el 38% va a los asalariados y el 62% restante son las ganancias del capital e ingresos del Estado. La acción redistributiva del gobierno, a través del gasto social, es inferior al 15% del PIB (el gobierno controla el 36% del PIB y ocupa al 10% de la fuerza laboral, o sea, 1.3 millones de empleados). La mayor parte del gasto social del gobierno colombiano corresponde a burocracia del nivel central y menos del 15% a la inversión. La estructura impositiva en Colombia es bastante regresiva (más concentrada en impuestos indirectos –IVA– que en directos a la propiedad y el ingreso), los niveles de evasión y elusión de los grandes grupos económicos alcanzan 3% del PIB. Por lo anterior, la función redistributiva del Estado es mínima y no logra afectar los altos niveles de pobreza.

La pobreza ahora presenta un perfil distinto al de hace treinta años. Es más urbana, con niveles de educación más altos y con mayores expectativas. Colombia, al igual que

PRESENTACIÓN

todas las sociedades capitalistas, genera amplias expectativas consumistas en los jóvenes y sectores populares que no pueden satisfacer debido a la injusticia social y la desigualdad en la distribución de las oportunidades, lo que se convierte en un caldo de cultivo para la violencia.

La historia colombiana enseña que el mayor gasto en guerra no soluciona la violencia. La violencia se volvió una forma de funcionamiento de la sociedad colombiana, y ha dado nacimiento a redes diversas de influencia y presión sobre la población. La violencia es parte de los negocios en el país, de los cuales participan no sólo los directamente vinculados sino empresarios, comerciantes, terratenientes y políticos. Mueve por lo menos el 8% del producto nacional (sumado el gasto público y privado) y emplea al 5% de la fuerza laboral, entre los distintos mercaderes de la guerra, profesionales de la seguridad nacional, diversidad de ejércitos y cuerpos de seguridad privada. El país tendría que preguntarse, si alcanzamos la paz, dónde ubicaría a los más de 600 mil empleados de la guerra.

Existe además un nexo entre clientelismo, corrupción y mafia, que fungen como fermentos de la violencia. La corrupción resulta ser otra relación de intercambio como el clientelismo y ambas representan una privatización de la política claramente contraria a los principios y a las reglas de la democracia, y que se constata en los fenómenos de corrupción en el alto gobierno, y en el tráfico de influencias que caracteriza, por ejemplo, el manejo de los fondos públicos destinados a obras y servicios sociales en los municipios y regiones y la red de asistencia social, que maneja un considerable presupuesto para hacer inversiones.

Más allá de la consonancia de las cifras de pobreza y de violencia y de los factores coadyuvantes arriba anotados, hay un matiz que escapa a los analistas: la pobreza es, en sí misma, violencia. Y su presencia es tan ominosa que en buena parte de nosotros actúa como freno a las iniciativas para construir un país que supere el atraso productivo, la concentración, la iniquidad y la injusticia social.

El sistema social colombiano se levanta y reproduce mediante la exclusión y un Estado patrimonial al servicio de las elites y grupos de poder. Una organización social de estas características requiere, para mantenerse, de una alta dosis de violencia y represión.

La pobreza no genera la violencia, la pobreza es en sí misma violencia. Violencia social. El violento es un sistema que excluye, oprime y reprime. El gasto militar es parte de las condiciones de producción y de reproducción. Es la esencia del ‘ambiente de los negocios’, es el instrumento para crear las condiciones y para mantener el ‘clima para la inversión’. El gasto militar no afecta sino que es condición estructural para el funcionamiento del oprobioso sistema vigente y de sostenimiento del inaceptable *statu-quo*. Por eso, mientras se habla de paz, la guerra se agudiza.

La situación actual es muy complicada. Hay más gente combatiendo y dispone de mejor equipo. Se ha derramado más sangre y hay aún más sangre en juego. El aumento de la ayuda norteamericana le ha infundido a la “Fuerza Pública” un ánimo triunfalista por primera vez en muchos años y en esas condiciones la jefatura militar y policial quisiera tener más victorias armadas que pretenden tener a su alcance con los nuevos equipos de alta tecnología y los asesores. Por otra parte, el régimen se consume en la vana ilusión según la cual el incremento de su *fuerza* obligaría a la insurgencia a reconsiderar su estrategia de poder y a optar, derrotada, por una negociación con el gobierno. Este es un cálculo errado y tropezará con la realidad que expresa la iniciativa política y el despliegue táctico de la insurgencia en la actual fase de la guerra, avizorando el fracaso de la ‘seguridad democrática’ en su fase de consolidación.

Colombia sigue siendo uno de los países que no ha sido capaz de elaborar una historia común, en lo que se refiere a los episodios violentos. No hay todavía una historia integrada por los colombianos de La Violencia de los años 50. No hubo esa capacidad de recuperar el momento del negativo, como decía Hegel, dentro de una construcción narrativa ampliamente reconocida. Lo que supone un debate sobre las responsabilidades. Frente a la violencia actual tendrá que haber un Tribunal para juzgar las responsabilidades; un Tribunal moral, pero también un Tribunal para condenar las atrocidades.

Lo que dificulta todo es que desde siempre ha existido una desconfianza profunda en el Estado. Tal desconfianza está enraizada en el legado del siglo XIX, por lo cual la Colombia política vive más a la hora del siglo XIX que a la del XX. Al mismo tiempo todos se refieren al “Estado de derecho” pero un Estado de derecho sin Estado, sin creer en su existencia.

Hay razones para tal desconfianza: desde la corrupción hasta la promoción y/o tolerancia que ha habido de parte de ciertos sectores con los paramilitares. Pero tampoco se puede olvidar que son muchos los individuos y sectores democráticos dentro del Estado. En el fondo, Colombia sigue siendo una sociedad liberal, donde la libertad se define negativamente contra el Estado. Así que la mayoría acepta ciertas formas de privatización estatal. Una vez más la tarea es desprivatizar un poco. Es decir, volver a poner al Estado en su lugar, con tal que se transforme y se democratice. Tal vez, desmontar la privatización sea el camino para, a falta de Estado, retomar los derechos humanos y conformarse en serio con un nuevo derecho internacional. El problema es volver a construir un espacio público. O tal vez construirlo simplemente, ya que se puede tener dudas sobre si ha existido.

Todos los actores con poder (territorial, financiero, armado) son de alguna manera actores políticos reconocidos como tales. Pero tampoco basta tener de hecho poder para ser plenamente un actor político en sentido democrático. En este caso también se necesita un esfuerzo de retrotraer la privatización, esto es: aprender que no se puede ser reconocido como tal en tanto se piensa tener derecho a aplicar la justicia en nombre de todos, bajo intereses ocultos y crímenes atroces.

Hay un problema de principios y también de circunstancias. No se olvide que para tener mayor peso en la negociación, el gobierno tiene que conseguir apoyo internacional, pues la opinión mundial cuenta hoy y acude más y más a la idea de un deber de intervención internacional. El caso de Kosovo, de Irak, de Afganistán y más recientemente de Túnez, Egipto, Libia y Siria —e incluso Irán y Venezuela— ha creado un precedente. Lo que no deja de influir en las márgenes de maniobra del gobierno colombiano. Lo más probable —para orientar el proceso— es que sea necesario ver cómo dejar responsabilidades políticas bajo el control de las normas democráticas de la sociedad en su conjunto.

Insistir en la paz

El ejercicio pendiente es el de un proceso de paz que supere el modelo restringido (cese al fuego y desmovilización) y se proponga un modelo abierto (que incluya junto al modelo anterior un conjunto de reformas y transformaciones); tal concepción de un proceso de paz exige un modelo de

negociación ampliada, en el que el componente militar se negocia entre gobierno y la insurgencia, y las reformas las decide el conjunto de la sociedad.

La caracterización de la fase actual muestra las dinámicas de *degradación* de la confrontación, dejando en cuestión las estrategias de posicionamiento para una negociación vía correlación de fuerzas, restringidas al campo militar. Una lectura de la estructura del conflicto armado colombiano muestra la confluencia de tres factores: los estructurales (régimen semi-represivo, iniquidad y problema agrario), los externos, (orden internacional: “guerra contra el terrorismo” y políticas de lucha antidrogas) y un factor contingente, el narcotráfico.

Una mirada a los límites de procesos de paz sucedidos en Colombia y a las características de sus acuerdos, conforma otro campo temático. Las experiencias de los procesos de paz en Colombia han sido parciales, restringidas y fragmentarias en razón de que no han significado la consolidación de una paz estable y prolongada en el tiempo, y en sus procedimientos se encuentran resultados de negociaciones de paz poco significativos respecto de los conflictos sociales y políticos que están en su base. En tales circunstancias, los acuerdos de paz a los que han llegado distintos gobiernos y grupos rebeldes se caracterizan por la poca o nula remoción del *statu quo*, la dejación de armas por parte de los grupos alzados, la amnistía y, en consecuencia, por la ausencia de repercusiones sustanciales en el conjunto de la sociedad, situación que por su parcialidad da origen a lo que se denomina postconflicto subjetivo.

Para reflexionar sobre las fuerzas sociales y una paz estable, es necesario reconocer que la participación del conjunto de la sociedad es desestimada como alternativa de consensos amplios y de legitimación hacia la transición pactada. La falta de participación social en las negociaciones de paz se constituye en un elemento de exclusión y de conservación del poder constituido. El camino de las fuerzas sociales en medio del conflicto transitaría por los siguientes retos: lograr su estructuración en actor político con autonomía frente a las partes armadas imponiendo la negociación como la vía más equilibrada y digna de solución a la guerra; promover un modelo de negociación ampliada que garantice la participación y decisión sociales, construir agendas suprasectoriales coadyuvantes para definir acuerdos nacionales no regresivos y reforzables en el tiempo y, finalmente, estructurar su fuerza política en un proyecto capaz de garantizar las reformas conducentes a la transición pactada.

El punto central sobre el objeto de la negociación parte de aceptar el carácter político del conflicto que en últimas remite al poder (entendido en una concepción relacional superando la mirada instrumentalista). Esta manera de abordar el problema lleva a una dicotomía en la resolución del conflicto: por un lado el artilugio del *contrato social* que sirve de base al constitucionalismo propio del liberalismo burgués y, por el otro, la instauración de un nuevo poder político que es la apuesta por la que opta Pinzón. Vale aclarar que en el enfoque contractualista se reconoce la clásica polaridad entre lo que podría ser un nuevo Estado y un nuevo acuerdo de poder político; no obstante, es saludable tomar distancia de esta lectura, en cuanto ella no reconoce la dinámica que implica la relación entre la sociedad y el Estado. Una mejor alternativa que se puede proponer nace de una comprensión relacional y dinámica del poder político, en el que el mismo no se sitúa sólo en la institucionalidad estatal, ni tampoco se ubica plenamente en un actor determinado, sino que se juega en un conjunto de prácticas, escenarios y regulaciones de los órdenes político-culturales y económico-sociales: transformaciones en el sistema de intercambios entre Estado y sociedad. Esta comprensión del poder reconoce el universo político como el que atraviesa el espacio de la economía, la cultura, la ecología, etcétera. De lo anterior se colige que es fundamental no sólo reformar el Estado, sino generar las garantías necesarias para el tránsito del formalismo democrático a las prácticas democráticas.

El objeto y naturaleza del conflicto armado deberían definir las agendas, sin embargo, la correlación de fuerzas de los actores armados tiende a tornarse como el mecanismo fundamental. Por ello se debe esbozar otra manera de abordar la definición de agendas que parta del conflicto armado como “crisis” (recurrente y no resuelta) que se manifiesta en la relación Estado-sociedad. La definición de paz se construye teniendo como problema central la dinámica e interacción crisis y guerra, lo cual implica, que la agenda la defina el conjunto de la sociedad y el alcance de la misma no se enmarque exclusivamente en la confrontación político-militar bilateral —correlación de fuerzas—, sino en el marco de relaciones socio-políticas multilaterales. Esta visión asume los referentes de una paz estructural articulada con una *paz cultural*.

Por último, se debería resaltar las dimensiones prioritarias de la transformación conducentes a la *solución política* del conflicto en Colombia: la naturaleza del Estado y el régimen político, el sistema de gobierno, las condiciones

económicas y los derechos humanos, estrechamente ligados con la desmilitarización de la sociedad. La naturaleza del Estado es una dimensión relevante en cuanto comprende el carácter interventor del mismo en temas relacionados con la distribución de la riqueza producida por la sociedad, regulación de mercados, etc., y que en últimas aborda los problemas de concreción material entre Estado liberal, Estado social de derecho y Estado social. Respecto del régimen político se trata de recomponer las estructuras y canales permanentes de acceso a los escenarios de decisión de repercusión general: gobierno, sistema electoral y de justicia, procedimientos de participación, fuerza pública, entre otros. La dimensión del sistema de gobierno debe preguntarse sobre los límites del presidencialismo no respecto del parlamentarismo o del semipresidencialismo, sino de si comprende el carácter incluyente y plural requerido en una eventual transición pactada en Colombia en función de no repetir los defectos de procesos anteriores y consolidar una paz estable, sin debilidades. Las condiciones económicas remiten sin ambages a la desaparición de los niveles de iniquidad que están en la génesis del conflicto, y que históricamente han ido renovando y reforzando las apariencias de la confrontación. En estrecha relación con la anterior, la dimensión de los derechos humanos es uno de los aspectos más sensibles que tocan la dignidad humana; en el caso colombiano, además de su violación estructural, se adicionan los excesos (premeditados y no intencionados) de la guerra –si es que la guerra *per se* no es ya un exceso– a manos de los grupos paraestatales, la insurgencia y las fuerzas armadas oficiales. Esta circunstancia obliga a abordar de manera rigurosa los temas de la justicia, la verdad y la reparación en la empresa de disminuir ahora y evitar luego la repetición de la tragedia humanitaria.

El conflicto militar, la guerra como proceso social y humano no termina; en Colombia la guerra no pierde sus horizontes como eventual salida del conflicto. Y a la vez hay un consenso nacional por la paz. En síntesis, se desarrolla como proceso bélico, como proceso guerrerista, y al otro lado, hay unas circunstancias concretas que permiten luchar por la paz.

Bogotá, marzo de 2012.

**SALVO LA ILUSIÓN
TODO ES EL PODER**



La vida es clara, undívaga y abierta como un mar.

Canción de la vida profunda

Porfirio Barba Jacob

(1885-1942)





El nogal. Berlín, invierno 2011

DESDE MI VENTANA

Desde mi ventana, desapacible, miro cómo cae la nieve en pequeños copos brillantes que se balancean con lentitud en un cielo cenizo y descienden hasta casi cubrir un robusto nogal situado en el patio de atrás de la casa que habito en Neu Köln. Este invierno del 2010 ha sido crudo para todos en Berlín y el frío del hielo trasportado por un viento cortante y permanente dificulta la rutina. Debajo del robusto árbol, convertido ahora en un tronco grueso y rugoso con astas secas y marrones, sin vida aparente, una bandada de cuervos, entre graznidos y revoloteos, empuja la nieve para abrir un espacio en la tierra yerma y buscar cerca de las raíces algún alimento. Es mediodía y llevan más de dos horas en su terca búsqueda. Al pasar por frente a la casa, el ruido de los autos y la sirena inconfundible de alguna ambulancia turban la calma de mis recuerdos.

En la primavera, cuando la nieve se ha retirado, el cielo sigue acuoso o nuboso y el sol se insinúa con timidez; el nogal de mi ventana va, poco a poco, aclarando y reverdeciendo el color de sus ramas. Los cuervos comienzan a emigrar y cada vez vienen en menor cantidad. Son reemplazados al poco tiempo por unas cuantas urracas y mirlos de corto vuelo que corretean desde las raíces hacia los arbustos de la cerca del patio en busca de escondite. Algunos gorriones llegan a las ramas aún desnudas, inquietos, brincan con insistencia para marcharse enseguida. Las palomas silvestres hacen un alto en su vuelo para anunciar

con canto cortado y monótono una nueva oleada de vida que llega en forma de brotes y retoños verdes.

Pero, el brote vital es de una fuerza interior tal que pronto, en cuestión de semanas, el árbol astado y yerto se convierte en un nogal frondoso, tupido de hojas grandes y verdes y diminutas florecillas que se transformarán a mediados del verano en frutos verdes que con sus nueces se desprenderán y caerán con pesadez al comenzar el otoño. Abajo, en la raíz, cuervos, urracas y mirlos buscan y rebuscan, pasan y repasan desesperadamente en busca de alimentos o vida; arriba, gorriones y palomas revolotean o descansan. Desciendo entonces de mi ventana y sobre una manta, cerca de las raíces, trato de percibir el efluvio fresco que desprenden sus hojas mientras el sol del verano que dura dieciocho horas brilla sobre el frondoso follaje.

Miro detenidamente el área sobre la que se extiende la raíz del nogal tratando de encontrar ese algo (invisible a mis ojos) que atrae con persistencia a los pájaros y les permite sobrevivir otro invierno nórdico.

“La raíz es lo que les permite sobrevivir cada inclemencia”, me respondo tratando de darme con una respuesta simple. Son las raíces subterráneas y profundas de ese tan arraigado árbol de donde brota la savia o energía renovadora de la vida en cada ciclo y que nutre también la cadena vital hasta llegar a los cuervos, urracas, mirlos, palomas y gorriones que la buscan con empeño y me hacen evocar mi desarraigo, con la nostalgia de exiliado político enfrentado al sufrimiento producido por la pérdida de sus raíces, aunque sea en este pacífico, disciplinado y austero país llamado Alemania.

Luego, a la llegada del otoño, un sol oblicuo y débil se filtra por entre un cielo opaco. Las rachas de vientos cortantes y lluvias inclementes van deshojando lentamente al nogal, dejando en el suelo un tapete de hojas marrones secas y convirtiéndolo de nuevo en un gran tronco grueso rugoso y del que brotan astas secas, preparado para recibir de nuevo la caída de la nieve.

Recibo un correo de mi hermano mayor quien se encuentra enfermo de gravedad, acicateándome con la pregunta abrumadora y difícil de cuándo y por qué mi vida tomó un rumbo tan incierto e incomprensible para la familia, invitándome además a consultar los datos enrevesados para la eternidad publicados en mi esbozo biográfico en el portal de Wikipedia. Miro nuevamente el nogal y un chubasco de viento frío agita con intensidad y mece su ramazón seca y llega hasta mis huesos.



Bogotá, 9 de abril de 1948

NUEVE DE ABRIL

—¡Mataron a Gaitán!—, entró gritando mi niñera Concepción.

Este es uno de los más originarios y persistentes recuerdos nebulosos de mi primera infancia. Estábamos sentados en el solar de nuestra casa paterna en Vélez, sobre una ruana de lana marrón asentada en un prado verde de pasto kikuyo, tomando el sol del atardecer. Se acababa de conocer la noticia de la muerte del dirigente liberal en Bogotá y, tapia de por medio, al otro lado empezaban también a oírse los gritos y el tumulto de los estudiantes en la gran casona del colegio universitario de Vélez. El colegio y nuestra casa, ambas construcciones coloniales de gruesas paredes de adobe y techos de teja roja con aleros castellanos de madera, formaban una gran ele que enmarcaba un parque cuadrangular bordeado por un seto de pinos olorosos y cuatro palmeras altísimas en las esquinas. En el centro del parque, un busto con los bigotes atusados, relamidos y con las puntas hacia arriba, da las gracias al general Santander, fundador en 1824 de esta tradicional casa de estudios secundarios en la provincia de Vélez de donde habían salido bachilleres mi padre en 1915 y mis hermanos Miguel en 1954 y Darío en 1957.

Mi madre, con su determinación característica, ordenó cerrar las puertas de nuestra casona atravesándoles por atrás el duro garrote de la tranca y alzó con todas las cosas. En aquel día yo tenía tres años, tres meses y nueve días de edad. Lo demás no lo recuerdo con tanta nitidez. Sin embargo, pude reconstruirlo con la ayuda de mi madre varios años después.

A eso de las ocho de la noche empezaron los gritos e insultos contra mi padre y su familia y los retumbos de las piedras lanzadas contra los postigos de las ventanas de la casa, los “¡Abajo los jijueputas godos! ¡Muerte a los Pinzón Murillo bizcocho!”, el continuo rastrillar de los machetes en el cemento de la calle y los golpes atronadores en el portón de entrada. En la casa contigua vivía la familia Ortega del Río, muy liberal, y doña Anadelina, la jefe de ese hogar, viendo que el bochinche callejero amenazaba a sus vecinos con quienes siempre tuvo una excelente amistad que solo separaba la barda de los solares, hizo que un mensajero cruzara furtivamente para ofrecernos refugio en su casa. Todos saltamos la barda de adobe techado y nos acogimos a su amparo las dos noches siguientes.

En aquel día, mi padre estaba en el hospital de San Vicente de Chucurí en visita profesional como jefe médico del Ministerio de Salud en la campaña anti leprosa del departamento de Santander; cargo logrado en un concurso público celebrado en Bucaramanga, poco después de su graduación como médico en la Universidad Nacional en 1924. Dirigía la campaña desde el leprocomio de Contratación, reorganizado por él como un hospital de características modernas a partir del punto de vista científico que considera a la lepra no como un castigo divino sino una enfermedad infecciosa endémica en zonas de miseria extrema. Alfonso Gómez Gómez, un naciente jefe del liberalismo en la región, tenía una excelente relación de amistad con mi padre y aquel día inolvidable impidió con energía que se le linchara por su reconocida filiación conservadora. Le bastó decir a los enardecidos y sectorizados liberales chucureños, vengadores de la muerte de Gaitán, que mi niñera Concepción era la hermana menor de Rafael Rangel Gómez y además, prima hermana de mi madre Luisa Sánchez Rangel. Esa era una prueba de la amplitud política que se vivía en la casa del godo que querían rematar. Todos estos Rangel, incluida mi madre, habían nacido y correteado su infancia treinta años atrás en la terrosa y apacible aldea de Palmas del Socorro.

Pero, mi padre que se hallaba a varios días de camino, incluso por carretera, conocía el odio manifiesto de los atrasados y sectarios dirigentes liberales de Vélez contra su familia; la mayoría de ellos eran terratenientes de los valles de Chipatá y del río Ropero, criadores en grande de mulas y caballos para el transporte hacia la sabana de Bogotá. Odiaban la familia Pinzón Murillo no tanto por su filiación conservadora que venía desde el siglo pasado cuando se constituyó este partido, tampoco por el recuerdo no lejano de la masacre liberal realizada en mayo del 1900 por el general conservador gobiernista Próspero Pinzón en el llamado combate del cerro de Palonegro, cercano a Bucaramanga, durante la cruenta y destructora Guerra de los Mil Días, sino por las denuncias y oposiciones recientes hechas por mi padre públicamente en esta capital departamental contra los continuos atropellos y despojos de tierras hechos contra los campesinos desde varias décadas atrás. De nada había servido en estas bellas y feraces comarcas la famosa Ley de Tierras del 36 expedida por el gobierno liberal de López Pumarejo, y mi padre, conocedor de todos esos rincones, por su búsqueda y visita a miserables campesinos enfermos de lepra para dejarles los paquetes de tratamiento con tabletas de sulfonas, sabía de primera mano lo que allí sucedía y lo había denunciado con ahínco.

La mejor forma de comunicación de aquel entonces era el telegrama.

Semanalmente entrecruzaba mensajes con mi madre, en un enrevesado castellano sintético como el de las adivinanzas que les servía de clave de comunicación:

“Niños bien alójome del río. Espero buenas”, le había escrito mi madre. Y él había respondido, “Gómez Gómez salvóme. Inicio viaje”.

Llegó a la semana siguiente a la casa paterna, pero una honda preocupación comenzó a atormentarlo. Aquel 9 de abril de 1948 había sacado a flote un odio acerbo y desconocido, no solo contra él sino contra toda la familia, en un pueblo aislado y casi autárquico como Vélez. Ni la casa paterna ni el poblado eran ya seguros y empezó a pensar en trasladar la familia a un lugar más seguro y menos sectario.

Mi abuelo materno, Leonidas Sánchez Uribe, había nacido en Rionegro, Antioquia, y tenía 80 años cumplidos. Era un anciano trigueño, recio, alto y delgado, con cabello blanco, que 70 años atrás había abandonado a su numerosa familia en el poblado

nativo para tomar el camino del río Magdalena hasta Puerto Berrío y nunca más regresar. Con algunas letras y nociones de aritmética trabajó con la fuerza y el brío de un adolescente, haciendo cuentas y descargando barriles de petróleo y gasolina medio procesada que eran embarcados a contracorriente desde el campamento de la compañía petrolera norteamericana Troco (Tropical Oil Company) para enviarlos hacia las nacientes zonas industriales de Medellín y Bogotá. Se había destacado entre los demás estibadores por su capacidad para llevar una contabilidad en limpio. Por lo que su jefe le fue delegando funciones hasta convertirlo en un subcontratista que recibía los barriles y los enviaba con diligencia a los lugares indicados. Ahorró algún dinero y acumuló cierto capital para comprar un lote de terreno en el barrizal del embarcadero original de la Troco y así pudo llegar a ser uno de los fundadores del actual puerto fluvial petrolero de Barrancabermeja. Montó allí una tienda de compra de mercancías extranjeras, especialmente licores finos y enlatados o conservas que llegaban río arriba desde el puerto fluvio-marítimo de Barranquilla, para distribuir las en Bucaramanga, y que atendía sin descuidar los envíos de barriles de petróleo hacia sus clientes en Bogotá y Medellín. La ampliación del negocio lo llevó a los mercados de los pueblos del altiplano comunero y, en la ciudad del Socorro, conoció a mi abuela, Tulia Rangel y Rangel, hermana del casi vitalicio cura párroco de Puente Nacional, Antonio María Rangel y Rangel. En la ciudad comunera organizó una familia y tuvo dos hijos: a Eduardo, muerto siendo aún niño a causa de un extraño y arrasador síndrome paralítico viral, y a mi madre, nacida en 1917.

La crisis financiera de 1929 golpeó duramente sus negocios. Sin embargo, pudo recuperar parte de ellos con la obtención de una hermosa finca de 16 fanegadas, recibida como parte de pago, en las afueras de la perdida ciudad sabanera de Nemocón; la que llamó Villa Tulia, en nombre de la abuela. Continuó viviendo en el Socorro en donde llegó a ser alcalde liberal en el gobierno de Olaya Herrera. La abuela murió en 1946 de una infección posquirúrgica, en un importante hospital privado de Bogotá, y el abuelo Leonidas, con la misma determinación que mostró al abandonar su tierra natal en Rionegro, se marchó entonces para siempre de las montañas comuneras para refugiarse en la feraz y suave sabana de Nemocón.

Llegamos allí a mediados del 49, después de un viaje de un día en un tren lento y jadeante tomado en la estación ferroviaria de Barbosa. Mi madre con dos hijos pequeños,

una de mis hermanas y yo. Los hermanos mayores, Miguel y Darío, fueron internados en el Colegio Salesiano de Zapatoca; y mi hermana mayor, en el colegio de las monjas de Tunja. Nos volvimos a reunir todos en la casa paterna de Vélez, pero solo durante las vacaciones estudiantiles de fines del año 50, cuando la situación del orden público evolucionó hacia una calma aparente.

Mi padre tenía, por su formación médica, una mentalidad urbana y racionalista; alejada en cierta medida de las reses, las mulas, los potreros y el atraso autárquico predominante en la provincia de Vélez. Me decía que los caballos eran como los autos; una cosa era trasportarse en ellos y otra bien distinta ser mecánico automotriz. En 1915, una vez concluidos sus estudios de bachiller en el colegio universitario de Vélez, viajó a Bogotá al Colegio del Rosario para tomar unos cursos de “ciencias físicas y metafísicas” dictados por Monseñor Carrasquilla y matricularse en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, ubicada por aquel entonces en la casona que hoy constituye la guarnición militar de la Plaza España de Bogotá. Allí pudo graduarse en 1924 con una tesis sobre el uso de la *dihidrohemetina* en el tratamiento del absceso hepático amebiano, la que años después no pude encontrar en la biblioteca de la Facultad.

Vivió de cerca las jornadas libradas por los estudiantes bogotanos contra los gobiernos venales de la llamada hegemonía conservadora del siglo XX a pesar del tradicional pertenecer de casi toda la familia Pinzón Murillo al Partido Conservador.

Pudo así formarse una idea propia sobre aquellos años de transformación que llevaron al pestilente pueblo grande de Bogotá a ser una ciudad contradictoria, pujante y más moderna.

Guardaba con gran aprecio el carné estudiantil (aún lo conservo) de la federación estudiantil colombiana, firmado con tinta roja por su representante el liberal Germán Arciniegas.

Durante la calma posterior al estallido del nueve de abril, mi padre continuó ejerciendo su trabajo de médico leprólogo; visitaba los pueblos y veredas señalados como endémicos en todo el departamento de Santander, controlaba los pacientes aquejados, dándoles el tratamiento, evaluando la incapacidad y, si era necesario, ordenando la reclusión en el leprocomio de Contratación, establecido en 1861 en una zona medio

selvática conocida tiempo atrás por la producción y compra a “contrato” para la exportación de la corteza del árbol de la quina.

Debía buscar los pacientes en sus casas, ubicadas en parajes muy remotos y dispersos en toda la región, a donde solo se podía llegar a caballo y, aunque su centro era la aldea de Contratación cuya vida giraba alrededor del leprocomio, regularmente viajaba las 13 leguas distantes de la casa paterna de Vélez por el camino de herradura de la época colonial que pasaba por Guadalupe, La Aguada, La Paz y Chipatá, para visitar a su familia y supervisar los pacientes de Vélez citados de antemano al centro de higiene municipal, y regresarse de nuevo a Contratación.

Conservo aún el colorido recuerdo infantil de una correría por el valle de Chipatá, de donde se divisaban las diferentes tonalidades y combinaciones de verdes en la hermosa mancha de la hoya del río Suárez.



Puente Nacional en el departamento de Santander

LA BÚSQUEDA DE LA PAZ

El día del trabajo del 2002, el avión que me traía aterrizó en el aeropuerto de Hamburgo después de un largo vuelo. Martina Bäurle, la encargada de la fundación de ayuda a los fugitivos políticos en la ciudad de Hamburgo estaba en la sala sonriendo, esplendorosa, con una rosa roja en la mano. No le fue difícil reconocerme ni darme albergue durante dos meses mientras se hacía mi transferencia a la fundación para la cultura del Estado de Sajonia, de la ciudad de Dresden, donde fui alojado hasta el invierno del 2004, en una casa muy antigua, reconstruida totalmente, frente al imponente edificio del teatro de Hellerau. Allí se apareció mi ángel de la guarda encarnado en el cuerpo de una hermosa y milagrosa mujer, y pude concluir la escritura de un libro sobre Simón Bolívar, editado en Bogotá en 2003 con el nombre de *Bolívar. Conductor político y militar de la guerra anticolonial*.

Un año antes de mi llegada a Alemania, el 11 de junio 2001, durante el malogrado proceso de paz del Caguán de la administración Pastrana, fui nombrado miembro de la Comisión de Personalidades (o de *Notables*), junto con Vladimiro Naranjo, Ana Mercedes Gómez y Carlos Lozano, para hacer recomendaciones a la Mesa de Diálogos sobre la disminución del conflicto y la lucha contra el paramilitarismo.

Cumplimos. La Comisión entregó un informe sucinto el 27 de septiembre del 2001, calificado por la Mesa de Diálogos como positivo y aceptado por la sociedad civil de Colombia.

Pero nos granjeamos la animadversión política del candidato presidencial de aquel entonces, Álvaro Uribe Vélez, junto con el odio paramilitar de Carlos Castaño quien no solo nos amenazó directamente en sus correos electrónicos sino que escribió en diciembre de ese mismo año en la página 312 de su famoso y tan divulgado libro *Mi confesión*:

...Lo que propuso la mal llamada 'Comisión de Notables' que de notables no tiene nada, es una estratagema de la guerrilla, pues su documento fue dictado por Alfonso Cano comandante de las Farc a través de los reconocidos comunistas Carlos Lozano y Pinzón Sánchez con la anuencia del ex magistrado pastranista doctor Vladimiro Naranjo. Contaré que hay detrás de este juego que ya cobró la primera vida sucia (la del congresista Jairo Rojas) pero vida al fin al cabo...

En mis actividades en esta Comisión conocí al embajador de Alemania en Colombia, Sr. Peter Von Jagow. Sostuvimos interesantes y diversas charlas y, en un coincidente vuelo a San Vicente del Caguán, intercambiamos opiniones sobre el tema del insólito Pacto Hitler-Stalin firmado en agosto de 1939. Al finalizar me dio su tarjeta de presentación ofreciéndome amablemente ayuda por si la llegase a necesitar. Y así fue. Las amenazas del libro de Carlos Castaño se tornaron más agresivas y creíbles y a fines de abril del 2002 se realizó un atentado en mi apartamento desde un taxi que pasó a alta velocidad. Afortunadamente estaba grabando unas entrevistas radiales y el atentado falló. En la confusión me acordé de la tarjeta del embajador Alemán, quien inmediatamente cumplió su ofrecimiento facilitando con premura mi viaje hacia este civilizado país.

Recién llegado a Hellerau recibí la llamada del periodista Peter Schumann para realizar una entrevista sobre mi experiencia en el proceso de paz del Caguán que acababa de concluir, la que fue difundida luego por la radiodifusora pública alemana. En ese mismo día Peter me hizo llegar la invitación del director del Instituto Iberoamericano de Berlín para dictar en la siguiente primavera una conferencia sobre la paz en Colombia.

El 16 de abril del 2003, en la sala Simón Bolívar de ese Instituto y ante un selecto auditorio, pude leer el siguiente texto como la raíz esencial de mi pensamiento sobre la búsqueda de paz en Colombia:

Primero que todo, quiero agradecer al Sr. Director del Instituto Iberoamericano en Berlín, Dr. Günter Maihold, por su invitación. A Peter Schumann por su moderación esta noche y a todos Uds. por venir.

Es para mí un honor estar ante tan selecto auditorio en esta sala que lleva el nombre del más formidable luchador anti colonial de Nuestra América: Simón Bolívar, ante quien me inclino con profundo respeto y admiración, para presentarles el fruto de mis reflexiones acerca de la salida política al grave conflicto que padece nuestra patria y las posibilidades de la paz en Colombia.

Deseo entonces comenzar afirmando que Colombia sufre una gran crisis política y social enraizada en lo más profundo de su desenvolvimiento histórico como nación y, mientras ello no se resuelva, las posibilidades para alcanzar la paz serán cada vez más remotas.

Y como no hay futuro sin pasado, permítanme llevarlos unos tediosos minutos por el túnel de la historia:

Para 1800 la actual Colombia era el segundo productor de oro del mundo después del Brasil, exportando el 40% del total de la producción mundial. Durante los cien años anteriores exportó, según las deficientes estadísticas de ese entonces, cerca de 12 millones y medio de patacones de oro, unidades equivalentes al dólar. Y en los 10 años anteriores a la guerra anti colonial exportó un 27% del total de los 100 años anteriores, lo que esto se reflejaba en la sociedad. La pirámide poblacional del cercano millón de habitantes de la Nueva Granada estaba dividida, según el riguroso orden colonial, en varias categorías socio-raciales impenetrables. Había unos 50 mil blancos oriundos de España; en especial, funcionarios de la burocracia colonial y curas doctrineros. Cerca de 385 mil mestizos. Unos 160 mil indígenas tributarios y aproximadamente 150 mil blancos, llamados criollos, dueños de los 50 mil esclavos extractores de oro en las minas del sur occidente colombiano, quienes eran quienes sostenían la economía del fragmentado país.

El circuito productivo era muy sencillo. Los esclavistas, quienes vivían una plácida vida en la bucólica ciudad de Popayán, poseían las minas con los esclavos, el capital comercial requerido para las exportaciones del oro, y tenían además grandes haciendas con indígenas tributarios adscritos que producían el sostén para las minas. El oro llegaba por diversos caminos al puerto amurallado de Cartagena de Indias para ser embarcado en el navío anual de la Corona hacia la torre del oro en Sevilla. Allí, en el corral cartagenero de Chambacú, se compraban los esclavos traídos de África por los comerciantes ibéricos autorizados por su majestad el rey de España con el fin de renovar el "hato" productor.

Para comprender mejor este jugoso comercio veamos estas cifras: Por ejemplo, una res valía la módica suma de 5 patacones de oro. Un caballo 9, mientras un esclavo que al decir de sus dueños producía lo de tres indígenas costaba en Cartagena 400 patacones y en Popayán o en la mina su precio subía al doble o al triple.

El historiador Jorge Palacios, especializado en estos temas, dice por ejemplo que en los 279 años comprendidos entre 1510 y 1789 entraron por Cartagena más de medio millón de esclavos que produjeron a los comerciantes europeos una rentabilidad del 700%.

Todo este oro, monopolizado según las rígidas normas coloniales, iba directamente a las arcas reales para financiar guerras y lujos. Pero, como España producía para el comercio exterior solo vinos, aceite de olivas, hidalgos de a caballo y curas doctrineros, terminó convertida, dentro del sistema colonial del naciente capitalismo mundial, en una simple e incómoda intermediaria; debía comprarlo todo y financiar así la revolución industrial en otros países europeos con la preciosa masa metálica extraída por las manos negras e indias en América.

Los datos demográficos en Venezuela eran muy similares a los de la Nueva Granada, con algunas particularidades. Al decir del barón Von Humboldt, quien visitó esta región en 1800, los cerca de 175 mil esclavistas poseedores de cerca de 145 mil esclavos habían configurado un circuito económico basado en la gran hacienda esclavista, exportadora principalmente de cacao y, en menor medida, tabaco, reses, mulas y cueros.

Un ejemplo: durante el siglo XVIII el promedio anual de exportación de cacao alcanzó a llegar a las 10 mil toneladas métricas, mientras que el tabaco fue de 60 toneladas. La compañía Guipuzcoana de navegación que ostentaba el monopolio real en la costa venezolana llegó al extremo de imponer el cacao como moneda de amplia circulación.

A esta clase, extremadamente rica de criollos esclavistas dedicados a la gran plantación para la exportación, llamada mantuana y que llegó a constituir el 19% de la población venezolana, pertenecían hombres ilustrados como Francisco Miranda, Andrés Bello o Simón Bolívar; quienes fueron educados en la Europa contraria al estorbo que constituía el parasitismo de la corona española para el comercio mundial.

Así, pues, el asunto de la esclavitud en esta región estuvo en el núcleo de la guerra anti colonial y en los desarrollos posteriores. En los primeros años de la lucha, el poder colonial recurre a utilizar el rencor de los esclavos y mestizos contra sus amos criollos con el propósito de desarrollar una verdadera guerra de exterminio etno-racial en la que murieron 90 mil mantuanos. Casi la mitad de la población criolla. Son bastante conocidas las masacres sistemáticas realizadas por el paramilitar de aquella

época llamado Tomás Boves. No hay novedad en los métodos y no me voy a detener en el asunto, solo lo menciono ahora y luego volveré sobre ello.

Bolívar, después de cuatro años de duro batallar, se percata que sin los esclavos, los mestizos y los indígenas tributarios, no podrá enfrentar el inmenso poderío colonial. Es cuando, superando los prejuicios etno-raciales de su propia clase mantuana, se declara partidario radical de la libertad de los esclavos y de la eliminación del tributo indígena. Dicta entonces varios decretos de hondo contenido social, añadiendo estas reivindicaciones generales a las de su clase que son las de liberar el comercio y el gobierno para englobarlo todo en una lucha por la libertad.

Serán los esclavos, los mestizos y los indígenas, los que formarán el grueso del ejército bolivariano que derrotará al colonialismo español, a finales de 1824, en una impecable campaña militar conducida por el mariscal Sucre en los páramos de Ayacucho.

Pero, como la historia no marcha en línea recta, los hacendados esclavistas y exportadores de Venezuela, aliados con los neogranadinos derrotaron el proyecto bolivariano. Disolvieron la república de la Gran Colombia e impusieron un curso regresivo, reforzando el latifundismo hacendatario, prolongando la esclavitud y restableciendo la tributación indígena hasta mediados del siglo XIX. Más de 20 años a partir de la muerte de Bolívar.

Rota la Gran Colombia, se separa la historia de sus territorios. En la Nueva Granada, la coalición triunfante de esclavistas mineros, hacendados y comerciantes del sur occidente, coaligados de manera inestable con los del altiplano central y los de la costa norte, entra en un largo y crónico proceso de guerras civiles provincianas para resolver por las armas el asunto de la apropiación del Estado.

Condición que se ha prolongado hasta nuestros días impidiendo el desarrollo de Colombia como una nación moderna.

Repasemos:

La primera guerra civil, de dos años de duración, es desatada en 1839 por el militar caucano José María Obando, hijo ilegítimo de un Mosquera, quien al ser llamado a juicio por el asesinato del mariscal Sucre se levanta contra el poder central establecido en Bogotá.

Diez años de calma chicha son interrumpidos por el alzamiento de otros tres esclavistas y hacendados caucanos, coaligados para tomarse a Bogotá: José Hilario López, Pedro Alcántara Herrán y quien fuera el edecán personal de Bolívar, Tomás Cipriano de Mosquera. Lo que origina dos guerras civiles más, la de 1851 y la de 1854.

La cuarta guerra civil dura tres años y es de nuevo iniciada en 1859 por Tomas Cipriano de Mosquera quien, una vez triunfante, cuatro años más tarde impone la conocida constitución federal de Rionegro; liquida al ejército moderno, tipo gran arméé, construido con tanto esfuerzo por Bolívar durante la guerra anti colonial; refuerza el latifundismo al apropiarse las tierras de los resguardos indígenas, los baldíos y las de la Iglesia Católica. Apuntala a los comerciantes exportadores, incluidos sus familiares, e instaura definitivamente el librecambio exterior como lo exigían las potencias industriales de Inglaterra, Estados Unidos y Francia.

Durante los 22 años de vigencia de esta constitución federal se presentaron 40 rebeliones locales y la quinta guerra civil en 1876.

En 1885 los opositores políticos del gobierno liberal-conservador de Núñez se levantan en la sexta guerra civil. Son derrotados y Núñez les impone la constitución centralista y autoritaria de 1886, vigente durante más de un siglo, y que será reemplazada por la de 1991.

Sin embargo, la inestabilidad política continuará y 10 años después los derrotados se vuelven a insurreccionar en la séptima guerra civil, la de 1895, que durará un año. Derrotados una vez más, vuelven después cinco años a iniciar en 1899 la octava guerra civil que se prolongará durante más de mil días. Cuando termina ésta, Colombia ha perdido 250.000 personas, un tercio de su población; está en la ruina total y el presidente de Estados Unidos Teodoro Roosevelt se apodera de la provincia de Panamá.

Alberto Lleras Camargo, presidente de Colombia en dos ocasiones, quien gobernó desde Washington entre 1947 y 1954 la Organización de Estados Americanos (OEA), valora todo este período histórico que le enseñó a los colombianos a revolver sus conflictos políticos por medio de la guerra, como si ésta fuera un juego, con estas palabras extraídas de sus memorias tituladas *Mi Gente*:

...¿Pero, cómo y dónde se incubaban estas guerras? Algunas veces se logra precisar con exactitud, el origen de la orden. En la mayor parte de los casos, el levantamiento es espontáneo, confuso y simultáneo en la nación. Claro, que siempre se requería tener detrás de la insurrección un jefe militar prestigioso, y este, al lanzarse a la acción, debía contar con treinta o cuarenta amigos, jefes menores, que no vacilarán en responder a su llamado. A su vez, estos tendrán conexiones en las Provincias, amigos en los pueblos, y capitanes resueltos en las minas, las haciendas, hatos, plantaciones de café, de tabaco, de añil, y de quina.

Eran los terratenientes, y grande su influencia y su mando sobre los campesinos de pie al suelo, macheteros naturales, para quienes la guerra dura y letal resultaba un "ejercicio alegre" que, con sus tiros y sus gritos, sus asaltos y atropellos a la propiedad o a la mujer del prójimo, rompía la sórdida rutina del trabajo, del mezquino salario, de las comidas sin sabor, de las tediosas borracheras en el ventorrillo del pueblo, y los menudos hechos de violencia, crueldad y celos. Porque al campesino aislado en

su rancho, más que al habitante de las aldeas, lo devoraban la soledad, el silencio, la oscuridad nocturna, el impenetrable rostro de su mujer, el ladrido de los perros y el llanto de sus criaturas.

Claro, Lleras Camargo describe literariamente a quienes hacían la guerra. Lo que no cuenta es para qué. *Mi Gente* como los llama, la hacía para colocar el gobierno bajo su interés particular. Y para entenderlo mejor, sigamos la pista de una de esas familias de esclavistas hacendados y comerciantes exportadores que dominó la mayor parte de la vida política y social colombiana durante más de un siglo: los Mosquera de Popayán.

A la muerte de Simón Bolívar en 1830, Joaquín Mosquera, hermano de Tomás Cipriano, aliado con Francisco de Paula Santander, ocupa la presidencia de Colombia. Un año después, otro Mosquera llamado José María Obando, autor intelectual del asesinato del Mariscal Sucre, llega a presidente y, de nuevo, en 1853, sustituye en este puesto a su pariente José Hilario López. En 1841, Pedro Alcántara Herrán, yerno de Tomás Cipriano, alcanza la presidencia de Colombia y, en 1854, al ser destituido Obando, lo sucede el traficante de esclavos y poeta lírico payanés Manuel María Mallarino. El propio Tomás Cipriano consigue la presidencia de la república en tres ocasiones: en 1845, luego en 1861, y de nuevo en 1866. Durante la segunda mitad del siglo XX, Víctor Mosquera Chaux, su descendiente directo, fue el vicepresidente perpetuo de la república liberal. Además, quienes rigieron la piadosa vida de los colombianos desde la primera autoridad religiosa del país, los arzobispos de Bogotá, fueron de la gran familia: monseñores Fernando Caicedo, hermano del presidente Domingo Caicedo y Manuel José Mosquera, hermano de Tomás Cipriano.

Pero a mediados del siglo XIX, la esclavitud se torna antieconómica en el ámbito mundial y la guerra de secesión en Estados Unidos le da el puntillazo.

En Colombia, la explotación del oro basada en trabajo esclavo es sustituida por la de pequeños lavadores de aluvión en el Chocó y Antioquia, cuya producción mantiene constante el promedio anual de exportación en 3 millones de pesos de oro durante todo el siglo. Las tierras de los resguardos indígenas, los baldíos y las 100 mil hectáreas que la Iglesia católica poseía, son subastadas por el gobierno de Tomás Cipriano Mosquera, que obtiene en la venta algo más de 12 millones de dólares.

Todas estas tierras van a reforzar a los antiguos hacendados y comerciantes agroexportadores, quienes aprovechan para expandir, indefinidamente y sin traba alguna, tierras y ganados. Para 1900, el hato ganadero del país alcanza a ser de 5 millones de reses. Y fueron dispuestas también para encontrar sucedáneos agrícolas para exportar, como el tabaco que durante su bonanza logró vender al exterior 2 millones de dólares o el Café que a comienzos del siglo XX vendía en el mercado mundial cerca de 5 millones de dólares.

Estos eran los prestigiosos capitanes descritos por Lleras Camargo, los que llevaron a sus peones y aparceros de pata al suelo, cegados por el sectarismo y el odio político, a las carnicerías llamadas líricamente “los ejercicios alegres de las guerras civiles”, y cuya obvia finalidad era la de afianzar su poderío y hegemonía como clase social para continuar lucrándose del Estado patrimonial, necesariamente opuesto a la modernidad.

Un investigador del régimen, Fernando Guillén Martínez, publica en 1980 el libro titulado *El poder político en Colombia*, en el que demuestra hasta la tesis del Estado como patrimonio de esta clase social. Anota en la página 363:

...La coalición formal de los partidos liberal y conservador, tras sangrientos períodos de violencia ínter partidaria, es un fenómeno recurrente y regular en la vida política de la nación. Un movimiento pendular lleva a los dos partidos tradicionales, de la alianza estratégica a la lucha armada, y de nuevo a la alianza, en un proceso persistentemente repetido a lo largo de la historia del país. La unión de los dos partidos en el gobierno, propiciada por Manuel María Mallarino en 1854 tras la derrota de José María Melo, fue reproducida por Rafael Núñez en 1886 tras la larga serie de guerras civiles ocurridas durante el régimen federal. Por Rafael Reyes en 1903, después de las guerras civiles del 95 y del 99. Por Enrique Olaya Herrera en 1930, tras los disturbios de la zona bananera de Santa Marta en 1928, las grandes huelgas petroleras de 1927 y los motines Bogotanos de 1929. Por Mariano Ospina Pérez en 1946, precedido por un intento igual de Alberto Lleras Camargo. Hasta la coalición del Frente Nacional en 1957, que intenta cerrar la temible era de la violencia política que azotó al país antes de 1950, y que incluyó el golpe militar de Rojas Pinilla en 1954.

Regeneración, Unión Republicana, Concentración Nacional, Unión Nacional, Frente Nacional, parecen ser denominaciones de un mismo fenómeno pendular de Violencia y Coalición, cada vez más notorio y persistente en la vida del país...

Y, como si fuera escrito hoy, en 1879 hace 124 años, el embajador de los Estados Unidos, en un informe a sus superiores en Washington sobre la situación colombiana, sin adelantar demasiado sobre sus causas, describe nuestra tragedia ciudadana de la siguiente manera:

...Hay un sentimiento o idea que prevalece aquí sobre todas las demás, bastante grande y extendida, de que la seguridad para la vida, la libertad y la propiedad, deberá depender de las garantías del Gobierno y de las Autoridades, en vez de provenir como un hecho evidente, de un sentimiento propio del Derecho y del Deber...

Una vez concluida la hecatombe de la Guerra de los Mil Días, el gran comerciante y exportador de caucho, Rafael Reyes, subido a la presidencia en nombre de la coalición bipartidista gobernante, facilita con leyes y créditos regalados el proceso, incubado principalmente en Antioquia, de conversión de los comerciantes de oro y hacendados exportadores de café enriquecidos con el aumento vertiginoso de sus exportaciones en industriales. Así,

como una prolongación del latifundio exportador van apareciendo los industriales antioqueños, quienes en adelante irán a dominar y hegemonizar en forma creciente la vida económica y política del país.

Son los grandes cafeteros como Pedro Nel Ospina, fundador de Fabricato en 1906, o Alejandro Echeverría, de Coltejer en 1908, o Alejandro Ángel, de las industrias Caldas en 1910, quienes para 1934 habrán ya establecido el conocido monopolio industrial llamado de manera confusa "sindicato antioqueño" y habrán agrupado a los latifundistas exportadores de café en la todopoderosa Federación de Cafeteros; y, para proteger sus inversiones, crearán luego el gremio nacional de industriales.

Simultáneamente, con el embarcadero fluvial de Honda en estrecha relación con el puerto marítimo de Barranquilla, para 1910 se habrá ya establecido en sociedad con el banco mercantil de Estados Unidos un verdadero trust comercial, industrial y bancario llamado el banco López, exportador del 40% del café producido en el país. Su dueño, Pedro López, desde esa posición pudo llegar a ser respectivamente padre y abuelo de los presidentes López Pumarejo en 1936 y López Michelsen en 1974.

Pero la expansión financiera de Norteamérica en Colombia no se detiene en los bancos y finanzas sino que se toma además la producción del banano y del petróleo; creando así, dentro del país, "enclaves" productivos convertidos en verdaderos focos de protesta e inestabilidad social. Ello debido a las formas primitivas de explotación a las que son sometidos sus trabajadores, a quienes el gobierno reprimirá brutalmente con el ejército nacional reestructurado por la misión militar del ejército prusiano que llegó con este fin a Bogotá al concluir la guerra de los mil días.

Los resultados no se hicieron esperar. En 1919, una manifestación de sastres que protestaban pacíficamente en el centro de Bogotá por la traída desde exterior de 8.000 uniformes para el ejército, dejó 10 muertos y 15 heridos. En las plantaciones de la United Fruit de Santa Marta, en 1928, fueron acribillados por las tropas obsesionadas en guardar el orden público más de 800 obreros (García Márquez en su novela dice que fueron más de tres mil los muertos). En el campamento de la Tropical Oil o "Troco" de Barrancabermeja, por la misma fecha, una huelga de obreros y braceros del río Magdalena fue disuelta a disparos con un saldo de quince muertos.

De ahora en adelante la salvaguarda del orden oligárquico contra cualquier intento de insubordinación social recae en el Ejército colombiano, que cumple la función de arrasar la movilización popular como lo había referido 60 años atrás el mismo embajador norteamericano.

Y Jorge Eliécer Gaitán, quien inicia su ascendente carrera política denunciando estas barbaridades de la que él llamó, con gran sentido popular, la oligarquía bipartidista, caerá asesinado por ella unos años más tarde, el 9 de abril de 1948; inaugurando entonces la sombría experiencia de crímenes impunes de Estado y el terrorífico período aún no superado denominado “la violencia bipartidista”, durante la cual más de 300 mil colombianos, principalmente campesinos y pobladores, fueron masacrados como en las guerras del siglo anterior, a causa del odio político a manos de una fuerza pública adscrita a los partidos liberal y conservador e incitada desde la presidencia de la República.

La espantosa degollina se detiene solo cuando, ante la inminencia de un derrumbe social, otra coalición bipartidista sube al poder al general Rojas Pinilla con la aureola de salvador de las instituciones y para que suspenda la carnicería con una amnistía general. Pero, cuando el general intenta privilegiar sus propios intereses, los dos partidos tradicionales pactan de nuevo su caída. Lo trasforman en un odiado dictador y en 1957 el jefe conservador falangista Laureano Gómez no tiene inconveniente en pactar en las playas de Cataluña con su acérrimo adversario liberal Alberto Lleras Camargo la reestructuración bipartidista del Estado para la repartición por mitad del presupuesto público y de los puestos en la administración oficial, encubriéndolo todo bajo el pomposo nombre de Frente Nacional.

La coalición de terratenientes agro-exportadores y ganaderos, de industriales y financistas, emergida triunfante en 1957 y agrupada en ese frente, encuentra un país tomado por el liberalismo económico y un latifundismo desbordado. Una enorme masa de campesinos expulsados a las grandes ciudades venida a abaratar la mano de obra y por ende los salarios, permite el inicio del jugoso negocio masivo de la construcción de vivienda urbana y la proliferación de todo tipo de urbanizaciones y favorece, aún más, la acumulación de capitales.

Pareciera que todas las contradicciones sociales represadas en las 4 décadas de acelerado desarrollo capitalista anterior hubieran estallado de manera súbita. Una vez más la fórmula probada durante siglos para resolver los conflictos sociales en Colombia descrita por Guillén Martínez, de coalición, violencia y nueva coalición, había sido puesta en vigencia eficazmente.

Sin embargo, nadie, ni siquiera la oligarquía colombiana (para continuar usando la denominación dada por Gaitán), puede convocar impunemente y durante todo el tiempo al Mefistófeles de la violencia política. Los campesinos y pobladores seguidores de Gaitán y los comunistas empezaron a resistir por todo el país, de manera cada vez más organizada, las razias de los cuerpos armados oficiales. Otra vez la suerte

del Estado ha entrado a depender no del consenso mayoritario de una ciudadanía inexistente, sino de los aparatos armados que empiezan a demandar más y más autonomía para su labor.

Es entonces cuando el Presidente Lleras Camargo en el famoso discurso del Teatro Patria de Usaquén en 1957, sienta las bases de otro gran pacto aún vigente entre el Poder civil y el Poder militar: Las fuerzas armadas se subordinarán al gobierno pero seguirán manejando de manera autónoma y con suficientes protecciones, llamadas fueros, el asunto del orden público.

En 1964, durante el segundo gobierno del Frente Nacional y en el contexto internacional de la Guerra Fría, los militares colombianos que como excepción en toda Latinoamérica participaron en la guerra de Corea al lado del ejército norteamericano, pasarían a ser asesorados directamente por la embajada de ese país y ejecutan el famoso plan LASO (Latin America Security Operation) tendiente a acabar con los comunistas de la región cafetera de sur del Tolima agrupados en un pequeño núcleo de resistencia armada gestado en 1948. Región previamente satanizada por el hijo del presidente Laureano Gómez en el Congreso colombiano, para efectos del ataque militar, con el mote de república comunista independiente de Marquetalia.

Cerca de 15 mil soldados inauguran en Colombia las operaciones helitransportadas y los bombardeos aéreos con el ataque contra 50 familias campesinas habitantes la región que habían resistido tenazmente el exterminio bipartidista anterior. Sus reclamos sociales posiblemente resueltos con 50 mil pesos colombianos de la época, tal y como el mismo jefe guerrillero Marulanda lo reconoció en 1999 en el Caguán, al pretender resolverlos con bombas y metralla se transformaron en la pesadilla que hoy 40 años después estamos padeciendo.

En 1965, las tropas oficiales disparan contra una marcha de obreros en Santa Bárbara, Antioquia, dejando una veintena de muertos y, para complicar la situación de inestabilidad política y social, ese año aparecen otras dos organizaciones guerrilleras: el Ejército de Liberación Nacional, en la región del Carare, del que hará parte el sacerdote católico Camilo Torres, y el Ejército Popular de Liberación en Alto Sinú.

Para comienzos de la década de los 70 surge un creciente y masivo movimiento campesino e indígena que reclama el fin del acaparamiento violento de las tierras por parte de los latifundistas hacendados y ganaderos. Pero, en lugar de ser escuchados y tramitadas sus demandas legales, es reprimido y disuelto por las armas oficiales. En ese mismo año, la coalición de clases en el poder es sorprendida con un resultado electoral adverso en las elecciones presidenciales, por lo que no dudan

en recurrir al fraude electoral y en imponer por la fuerza al presidente Pastrana Borrero para continuar con el usufructo patrimonial del Estado.

Este hecho origina el surgimiento de otro grupo guerrillero, el M-19, que toma el nombre de la fecha en la que se realizó el fraude electoral. Los colombianos, una vez más, siguiendo la tradición histórica, continuarán tratando de resolver sus contradicciones políticas y sociales por medio de las armas, desbarajustando aun más el sistema social imperante. Durante este período que estamos analizando, profuso en sangre y lodo, se obtiene una de las más fuertes rachas de acumulación de capital vividas en la historia de la economía colombiana según las cifras del Banco de la República.

Las centrales obreras protestan por las leyes laborales regresivas y las organizaciones campesinas y populares se movilizan en todo el país, en contra de la venganza latifundista pactada en Chicoral por el gobernante impuesto. Así se empieza a gestar desde 1971 el paro cívico nacional que estallará seis años después durante el gobierno de López Michelsen, como respuesta a la imposición de una política desembozada de liberalismo económico y financiero.

El paro cívico alcanzó a constituir un relativo riesgo para el gobierno dado su extensión y coordinación nacionales y es reprimido con saña y a bala, dejando centenares de muertos. La respuesta al resquebrajamiento institucional es la promulgación al año siguiente, por el presidente Turbay Ayala, del nefasto "estatuto de seguridad nacional", copiado de las dictaduras del cono sur de América. Se inaugura entonces un nuevo período de inestabilidad y brutalidad en el manejo del orden público en Colombia al legalizar la tortura, la desaparición forzada o los fusilamientos de aquellos a quienes arbitrariamente se clasifican como "enemigos internos".

Pero, "el liberalismo económico en beneficio del capital" —tal como lo describe Salomón Kalmanovitz, quien fue codirector del Banco de la República— apuntalado en las armas oficiales no se detuvo sino que, por el contrario, continuó su expansión ininterrumpida, favorecido por las bonanzas cafetera de 1978, la bonanza de las drogas de 1980 y la bonanza petrolera y minera de 1990. Al extremo que el gerente del gremio de los industriales (ANDI), Fabio Echeverri Correa, pudo hacer una fotografía de la época con la célebre frase según la cual "si al país le va mal a la economía le va bien".

A comienzos de la década de los 80, como continuación de la doctrina del *enemigo interno* establecida una década atrás, se pone en marcha plenamente la estrategia de la defensa del Estado con métodos irregulares y sin reglas; con un aparato militar conocido como paramilitarismo, en el experimento piloto de Puerto Boyacá, en torno del que se aglutinan latifundistas, ganaderos, industriales, comerciantes y narcotraficantes, apoyados en muchos casos,

como se acaba de comprobar, por gerentes locales de compañías transnacionales como Coca-Cola, Drummond o Texaco, opuestos a cualquier proceso de paz con los grupos guerrilleros que piden cambios democráticos en las estructuras del Estado.

A fines de 1985 ocurre la recuperación por parte del Ejército, a sangre y fuego, del Palacio de Justicia en el corazón de Bogotá, tomado previamente por un comando guerrillero del M-19. Junto con el edificio se destruye prácticamente el Poder Judicial. No se sabe aún cuántos testigos civiles allí presentes, además de los 50 jueces y magistrados desarmados que se encontraban trabajando, son desaparecidos de la escena.

Al comenzar los 90 habían ya desaparecido, ajusticiados por el Estado, tal y como lo comprobó con posterioridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cerca de 5.000 cuadros políticos de la agrupación de izquierda llamada Unión Patriótica, surgida de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las Farc con el gobierno de Belisario Betancur. Y cuatro candidatos presidenciales, dos de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, el comandante del M-19, Carlos Pizarro y el candidato liberal reformista Luis Carlos Galán, habrían de pasar a engrosar la larga lista de los magnicidios impunes.

Sin embargo, ante este agotamiento político precipitado por la irrupción violenta, a bombazos, de los narcotraficantes opuestos a la extradición, el presidente César Gaviria logra sortear la situación y conformar una nueva coalición política favorable al bloque de la clase dominante mediante un nuevo pacto horizontal e incluyente con las guerrillas del M-19 y otros movimientos desmovilizados. Se hace la Constitución de 1991, firmada simbólicamente por Álvaro Gómez como jefe del Partido Conservador, Horacio Serpa del Partido Liberal y Navarro Wolf por los reinsertados. Dejando cuidadosamente por fuera de ella a los demás movimientos guerrilleros como al ELN, a un sector del EPL y a las FARC, cuyo campamento central fue bombardeado el día de las elecciones de la Constituyente. Un nuevo ciclo de coalición bipartidista "ampliada" y violencia, prolongado hasta hoy, quedaba inaugurado, dando una vez más la razón a Guillén Martínez.

La nueva Constitución implanta el neoliberalismo transnacional, legalizando la especulación financiera y *lavando* capitales provenientes de la economía ilegal, fenómeno que vendría a llamarse la 'apertura económica'. El latifundismo se refuerza con los dineros del narcotráfico y más de cuatro millones de hectáreas pasan a manos de 5.000 personas, convirtiendo la tierra en la alcancía del capital. La Policía Nacional adscrita al Ministerio de Defensa se mantiene como un destacamento contraguerrilla del Ejército. Los llamados fueros militares se dejan intactos y, en consecuencia, se mantiene la impunidad para los agentes del Estado comprometidos con el paramilitarismo.

Éste, sintiéndose muy seguro, dice cínicamente por todos los medios de comunicación estar defendiendo al Estado con una motosierra, sin importarle un bledo las condenas de las Naciones Unidas, la OEA y otras instituciones internacionales.

El poder judicial incinerado en el Palacio de Justicia es suplido por una fiscalía politiquera, y politizada contra los de ruana, que le cuesta a la nación un millón de dólares diarios. Y, el ordenamiento territorial, tan prometido, jamás se realizó. En resumen, según las palabras del ex fiscal Gómez Méndez,

...la Constitución del 91 no pasó de ser un emocionado discurso veintejuliero puesto en forma de código.

Los narcotraficantes envalentonados pactan con el gobierno de Gaviria la construcción de cárceles estilo “hotel de 5 estrellas”, como la llamada catedral de Medellín, dizque para someterse a la justicia, cuando resultó lo contrario, y continuaron financiando campañas electorales como la que llevó a la presidencia a Ernesto Samper Pizano, para citar solo una de ellas. Expandieron, sin cálculo posible, su fatídico negocio; infiltrando todos los resquicios del tejido social y aumentando los efectos de la crisis al beneficiarse de la misma. Algo así como la bacteria de la gangrena que pudre los tejidos para poder nutrirse de la necrosis.

El gobierno de los Estados Unidos aprovecha la falta de legitimidad del presidente Samper para manipular la situación a su favor, adelantar su guerra contra las drogas y controlar aun más el país. Las fuerzas armadas, reabastecidas, son lanzadas a escalar el conflicto social y armado, sin ningún resultado favorable o, por el contrario, sufriendo múltiples y grandes reveses militares y agudizando la situación.

Pastrana Arango, el hijo de quien fuera el presidente impuesto por el fraude 28 años atrás, gana las elecciones de 1998 con la promesa de adelantar un proceso de paz con la insurgencia armada y recuperar la gobernabilidad elusiva. Decreta una zona desmilitarizada en el Caguán con el fin de adelantar los diálogos y en los primeros meses de la negociación logra firmar con el jefe de las Farc, Marulanda Vélez, los 12 puntos de la llamada Agenda Común para la Construcción de una Nueva Colombia.

Pero lo que parecía un gesto de risa muy rápido se torna en mueca. Los sectores de la coalición gobernante, opuestos a cualquier negociación, asustados con el compromiso firmado en la Agenda Común del 99 y de los desarrollos temáticos realizados en las audiencias públicas, presionan la ruptura del proceso de paz. La confrontación aumenta fuera de la zona desmilitarizada por la puesta en marcha, por parte del gobierno de Estados Unidos, del llamado Plan Colombia. La negociación es desacreditada hasta el extremo por los medios de comunicación y con uno cualquiera de los muchos hechos de guerra acaecidos por fuera de la zona desmilitarizada el presidente Pastrana da por terminado el proceso de diálogos y negociación.

En un ambiente pugnaz de polarización creciente y aglutinando tras de sí a los sectores de la coalición gobernante opuestos a cualquier entendimiento con la insurgencia, y con el total respaldo del gobierno de George Bush, triunfa en las elecciones presidenciales Álvaro Uribe Vélez; quien ofrece en corto plazo la derrota total de la insurgencia y el imperio de la seguridad por las armas, el mismo argumento aludido por el embajador norteamericano 124 años atrás.

Empieza su mandato remplazando el gobierno civil por uno militar en las llamadas zonas especiales de orden público. Extiende a todo el país el Plan Colombia aumentando el pie de fuerza en más de 300 mil soldados y apropiando enormes recursos fiscales, superiores al 4,5% del producto interno bruto, a unas fuerzas armadas totalmente reconstruidas y rearmadas por el gobierno norteamericano durante el desarrollo del proceso de paz de Pastrana. Además, se empeña en adelantar un extraño y contradictorio proceso de legalización de los paramilitares.

El conflicto llega a la degradación que presenciamos sin avizorarse una pronta victoria sobre la insurgencia, y sin que se le brinde la tan publicitada seguridad democrática a la población. Muy por el contrario, ante el aislamiento generalizado por el oprobio de ser el único país latinoamericano que apoya la invasión de rapiña por el petróleo de Irak y ante la falta de resultados para mostrar, crecen las voces de oposición.

Por ejemplo, un actor privilegiado de estos acontecimientos y antiguo mentor de Uribe Vélez como el ex presidente López Michelsen. Desde sus columnas periodísticas llama la atención sobre la poca voluntad del gobierno en avanzar en un acuerdo humanitario para liberar a los retenidos por causa de la guerra y supeditarlos a los triunfos militares de un ejército derrotado. Pero, además, reconoce que la actual deuda externa de 324 mil millones de dólares, que consume el 53% del producto interno bruto, se ha tornado impagable según los indicadores internacionales. Pero, no es solo eso. La fuga de capitales que en los últimos cuatro años sobrepasó los 10 mil millones de dólares ha afectado seriamente la economía colombiana, sin crecimiento desde hace cuatro años o con índices inferiores al miserable 1,5%, incidiendo, como es natural, en el desempleo, cercano al 20% a pesar del maquillaje de las cifras oficiales.

Y para más amargura, los 200 millones de barriles de petróleo del territorio indígena Uwa, con los que se pensaba cambiar las metas macro económicas del país según lo reconoció el propio ministro de minas, resultaron ser agua salada.

Sin embargo, no es solo la crisis económica que se pretende solucionar con un ajuste fiscal regresivo impuesto por el Fondo Monetario Internacional por la vía de un plebiscito político. Tampoco llega la tan anunciada seguridad para la población, para no insistir en el fracaso reconocido por los mismos medios

de comunicación de las llamadas zonas especiales de orden público, ni en la pavorosa salmodia de cifras de los muertos tanto civiles como militares de los bandos en contienda, ni en las incalculables pérdidas materiales producidas cada día la confrontación armada.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Sergio Vieira, en su 6º Informe sobre Colombia presentado en Ginebra, denuncia la alarmante impunidad de funcionarios oficiales comprometidos en crímenes horripilantes y, como si fuera poco, acoge las cifras dadas por las ONG que informan acerca de la muerte de 60 sindicalistas en los primeros 3 meses del año, la realización de 544 masacres por los paramilitares oficiales durante el año anterior (una y media por día), con un saldo de 2.447 víctimas. Además, la ejecución de 4.512 opositores políticos. Se registran 734 desapariciones forzadas y 766 personas víctimas de detenciones arbitrarias. Esto, sin contabilizar los más de dos millones de desplazados por el conflicto armado que arriban y contribuyen a degradar aún más los cinturones de miseria de las grandes ciudades, hecho catalogado sin ninguna duda por su Oficina como un "desastre humanitario".

Estos son a grandes rasgos los elementos de lo que llamo la gran crisis histórica política y social en la que se halla sumido nuestro hermoso país. Y aunque muchas veces me he preguntado si esto constituye una crisis, en todos los casos me respondo según la experiencia mundial actual: que la guerra, así sea de baja intensidad como la desarrollada en Colombia, no soluciona ningún problema de los pretendidos, sino que, por el contrario, los presenta todos de un solo golpe y a un mismo tiempo, agravando aún más la situación general.

Y esta es la reflexión en la que se basa el mundo progresista para pedir una Solución Política a la crisis histórica de Colombia. En los Foros de Sao Paulo y de Porto Alegre, así como los Gobiernos vecinos de Brasil, Venezuela y Ecuador, afectados directamente por la confrontación en Colombia, todos a una claman insistentemente el cese del dolor y la muerte en nuestro atormentado país.

Ya no es posible hablar de una negociación cerrada como las intentadas hasta ahora, tan desacreditadas por los medios de comunicación por sus reiterados fracasos, sino la realización de un Acuerdo Democrático para superar los pactos oligárquicos horizontales destinados al reparto del presupuesto oficial y la burocracia estatal, y acabar de una vez por todas con el recurrente ciclo de coalición, violencia y nueva coalición, referida ya por Guillén Martínez.

Un pacto social incluyente de todo el país y formador de una verdadera nación moderna que reconcilie a la sociedad civil con el Estado patrimonial vengativo e impune, superándolo por otro en el que impere la justicia social y el derecho civil se imponga sobre el código penal militar. Un país reflejado en una Constitución redactada

por una asamblea nacional constituyente de ambiente democrático y de amplia participación popular, en la que uno de cuyos puntos de partida sean los acuerdos ya firmados y desarrollados entre el Estado y la insurgencia en la llamada Agenda Común de 1999.

Será resultado de un amplio abanico de posibilidades, todas ellas políticas, que incluyen convenciones, acuerdos, consensos, audiencias temáticas públicas, tanto en la esfera regional como nacional y, por supuesto, pactos de grandeza. Esto es lo que se llama la salida política al conflicto de Colombia y para lo cual los convoco a todos ustedes desde ya, para evitar que la consigna nihilista de "si no hay patria para todos, no habrá patria para nadie" le marque el destino futuro a Colombia...

Muchas gracias por haber tenido la paciencia de escucharme.





Maqueta de templo de Puente Nacional

NIÑEZ

A comienzos de 1951, mientras mi padre atendía la consulta médica en el centro de higiene municipal de Vélez, un sombrero del río Roper lo amenazó soezmente de muerte. Visiblemente afectado decidió trasladar la familia a la casa cural de Puente Nacional, a donde el tío de mi madre, el sacerdote Antonio María Rangel y Rangel acababa de ser enviado por el obispo de San Gil para desempeñarse como párroco después del traumatismo causado por la expulsión a bala del anterior cura, Isaías Ardila, en 1947; a quien los liberales puentanos acusaron de haber organizado, armas en mano, a los conservadores de su parroquia para que se defendieran de las azotainas públicas y muertes efectuadas en la provincia de Vélez por los gamonales liberales al concluir la guerra de los mil días; como José del Carmen Tejeiro y en especial, en Puente Nacional, Antonio Jesús Ariza. Pero, por sobre todo, después de la terrible emboscada hecha por los liberales a los votantes conservadores en el día de las elecciones de marzo de 1946, causándole a la feligresía conservadora dos muertos y algo más de 50 heridos.

El obispo Ocampo, en respuesta a la expulsión armada del cura Ardila, ordenó el sellamiento y cierre temporal de las puertas de la Iglesia; ocasión aprovechada por dos seminaristas falsarios

de la región paisa quienes, haciéndose pasar por sacerdotes consagrados, celebraron con toda la religiosidad y pompa posibles el famoso engaño colectivo de la semana santa de 1948 en Puente Nacional. Agotada la paciencia, las autoridades eclesiásticas ordenaron el cierre definitivo del templo por tres años más.

Empacamos con prisa y a la mañana siguiente, en un pequeño bus con carrocería de madera llamado chiva, íbamos con el trasteo por una carretera, que más parecía un camino de herradura, rumbo a Puente Nacional. Realmente las raíces de las familias Pinzón y Murillo se pierden en la historia de este acogedor pueblito viejo, y no fue difícil reconstruir la parentela y las condiciones de vida. A mi padre le fue ofrecida por sus dueñas, las señoritas Bicaría, una casa grande ubicada en una esquina de la plaza principal, de dos pisos y con un inmenso solar interno sembrado de naranjos y en donde había una pileta, llamada piscina, imposible de usar porque de haberla llenado se hubiera agotado el agua del pueblo.

La casa, ubicada en diagonal a la casa cural, había sufrido un deslizamiento en sus cimientos y la reparación costaba más que la casa misma. Sin embargo, mi padre la compró, la reforzó con unos gruesos muros de contención, y allí nos trasladamos.

En el antiguo Puente Real de Vélez los conquistadores encontraron un punto de contacto e intercambio de productos, entre las tribus Chibchas del altiplano bogotano con las tribus Guanes del valle del río Saravita (Sorocotáes, Guavatáes, Agatáes, Chipatáes) y las tribus Caribes del río Muzo. Los españoles, de acuerdo con su estrategia militar de controlar los cruces de ríos importantes, establecieron allí un pontón colonial para cruzar el río y controlar militarmente la zona, así como para cobrar el pontazgo o impuesto colonial de cruce, y lo rebautizaron con el nombre de río Suárez Rendón.

Para la fecha de nuestro arribo a Puente Nacional, las contradicciones políticas generadas por la tenencia de la tierra, después de lo ocurrido en la cabecera parroquial, se encontraban en una fase de rescoldo, fácil de convertir en una llamarada. El clima embriagador de Puente Real como lo describió Antonio Nariño dos siglos atrás, no era todo. Más pronto de lo esperado empezaron a llegar, procedentes de los pueblos circunvecinos, noticias de la sempiterna y no resuelta confrontación por la tenencia de la tierra. Esta vez, entre el latifundio cafetero que se expandía a costa de las pequeñas propiedades aledañas, revestida bajo una renovada batalla bipartidista.

Los pobladores de las veredas liberales de Florián y Jesús María resistían armados los ataques de las bandas conservadoras, armadas e instigadas por el gobierno, que partían de las veredas conservadoras de Jesús María, Sucre y la Belleza para realizar incursiones de muerte y despojo.

A los pocos días de estar alojados en Puente Nacional, un pelotón de cerca de 30 policías entró marchando por la calle real del pueblo, ataviados con unas gorras cómicas de color azul llamada “chapós”, camisa y pantalón también de color azul, botines rústicos llamados “guayos” y portando un largo fusil al hombro al que le decían “grás”. Palabras nuevas para mí, cuyo significado pleno logré comprender más tarde. Con ellos llegó también su nombre sonoro: “chulavitas”. El que posteriormente, en el lenguaje popular se convirtió primero en “chulavos” para finalmente quedar fijado en “chulo”, zopilote o zamuro.

Vinieron en un camión mediano desde la población santandereana de Málaga, en donde habían sido entrenados con premura como milicia por la policía de Boyacá. Reclutados días atrás en la vereda nombrada de Chulavita, del poblado de Macaravita, donde el Partido Conservador tenía un dominio absoluto. Al llegar a la entrada de Puente Nacional, después de un viaje tan largo, se bajaron del camión, se sacudieron el polvo de la carretera y entraron marchando. Nunca había visto un desfile militar de aquella naturaleza.

Mi madre, al ver tan particular desfile, comentó rotundamente: —“No veo la necesidad de esa gente aquí”.

El pelotón se ubicó en el marco de la plaza central, en una casa inmensa donde funcionaban las oficinas judiciales y a la cárcel municipal; la convirtieron en su cuartel general y, más pronto de lo esperado, empezamos a saber a qué habían venido. Un grupo permanecía en el casco urbano mientras otro salía por la noche hacia las veredas liberales de los pueblos vecinos a realizar sus correrías e incursiones. Empezaron a aparecer en los remansos espumosos formados por el río Suárez, en las cercanías del pueblo, cadáveres yertos y pálidos; algunos ya descompuestos, provenientes de la vertiente alta de la cordillera llamada “límites con Boyacá”.

Recuerdo un domingo soleado y brillante, en una de las misas solemnes a las que todos debíamos asistir, incluidos los policías de vestido azul destacados en el pueblo, cómo

todos ellos se retiraron de la iglesia en grupo ante el llamado hecho desde el pulpito por el cura Rangel para deponer los odios y respetar la vida ajena sin importar su color político.

Luego vinieron los patrullajes y requisas minuciosas, y controles el día del mercado público, seguidos de las borracheras, gritos a la media noche del jefe político de aquella policía, don Alcibíades Camacho, contra los “cachiporros y chusmeros gaitanistas”, y los disparos al aire, respondidos en el pavor nocturno por el solitario canto de algún gallo en la lejanía.

Al comentario hecho por mi madre, mi padre le respondió que no había otro lugar a donde ir. Contaba con la garantía que constituía su antigua pertenencia familiar al Partido Conservador y la influencia del cura Rangel. Y así fue. Mi madre logró entonces comprar, con una maestra de la escuela pública municipal, todos los libros y cuadernos del primer año de estudios y encargó a un carpintero la hechura de un pupitre a mi medida, y comenzó a enseñarme las primeras letras. En cambio, mi hermana, dos años mayor, pudo continuar su preparatoria en la sección elemental de la escuela pedagógica del pueblo, regentada por las monjas de la Presentación. No llegaban periódicos ni noticias sobre lo acontecido en Bogotá o en otras partes del país. Mi padre trataba de enterarse en un radio negro de baterías marca Zenith, “Trans Oceanic”, en el resumen oficial de las 8 de la noche, transmitido por la Radiodifusora Nacional de Colombia.

Los patrullajes y acosos de la Policía el día de mercado, los gritos y disparos a media noche y las noticias de muertos que varaban río abajo, pronto se hicieron rutina; mientras el cura Rangel seguía exhortando vanamente en el sermón de los domingos a deponer los odios sectarios y a respetar a los demás. Montones de refugiados liberales empezaron a llegar obligatoriamente a Puente Nacional mientras hacían el tránsito a la estación del tren llamada la Capilla, situada loma arriba, a una legua de distancia, única vía en su huida a Bogotá. Quienes tenían menos suerte o no pudieron viajar a la Capital se establecieron en miserables chozas, permitidas por sus copartidarios liberales de la calle de la Cantarrana, en los solares interiores de sus casas.

Sin embargo, la esquina en donde desemboca la calle en la plaza principal del pueblo, estaba controlada por la casa grande de Matilde Castañeda, hija y heredera del general conservador de la Guerra de los Mil Días, Arístides Castañeda,

personaje reconocido en esa guerra por su brutal sectarismo contra los liberales y quien poco después del triunfo militar, valiéndose de su alto rango militar, se hizo asignar por el gobierno conservador de Bogotá media docena de haciendas en tres municipios de la provincia de Vélez. Una de ellas llamada el Recreo, en la vereda “Cachoévenao”, del municipio de Jesús María, limítrofe con la cuchilla de Saboyá.

Su hija Matilde, heredera también del odio sectario de su padre, desde la casa en donde habitaba a la entrada de la calle Cantarrana, no perdía ocasión para insultar a los liberales, exigiéndoles que abandonaran el pueblo. Los liberales, en respuesta, la apodaron la Cenicienta, y su verdadero papel, muy diferente del personaje de cuento de hadas, iría a quedar al descubierto en 1993 cuando el periodista Pedro Claver Téllez publicó un libro biográfico sobre Efraín González.

En 1960, siendo diputada por el Partido Conservador a la Asamblea Departamental de Santander, y apoyada por los poderosos senadores conservadores Darío Marín Vanegas, Hernando Sorzano González, Humberto Silva Valdivieso y el boyacense de Chiquinquirá Luis Torres Quintero, organizó el viaje y traída desde el departamento del Quindío hasta su hacienda el Recreo de Jesús María, del famoso “pájaro” o sicario conservador Efraín González, que siendo un niño fue llevado por su familia desde la vecindad de esta finca a la zona cafetera del Quindío en busca de fortuna.

Se supo también que en 1958, en los inicios del Gobierno de Lleras Camargo, estando González en un batallón contraguerrilla de la Policía Militar por su reconocida filiación conservadora, al ser reprimido por un oficial lo hirió de gravedad como respuesta, debiendo huir a unirse a otros desertados integrantes de la banda de sicarios y pájaros conservadores en la región del Quindío, organizados por Jair Giraldo.

Su fama de ajusticiador de liberales había llegado a oídos de sus antiguos paisanos de Jesús María y a su vereda de origen, donde la cenicienta Matilde ya había tomado posesión de la herencia de su padre. Contactado en Pijao, Quindío, por Virgilio Salinas, un allegado familiar suyo cercano a la hacienda de los Castañeda, para que regresara a la vereda de Cachoévenao, fue traído a comienzos de 1960 con sus compinches y sus armas a través de medio país hasta la hacienda para enfrentar la cuadrilla del guerrillero liberal Carlos Bernal.

Así se generó ese círculo infernal de matanzas y venganzas perdurables, como la matanza de la calle Cantarrana en septiembre de 1960, cuando murieron asesinados por Efraín González once miembros del directorio liberal de Puente Nacional y diez y nueve más fueron gravemente heridos. Matazones y contra matazones partidistas prolongadas por González hasta 1965 cuando muere acorralado por el Ejército, comandado por el entonces teniente Harold Bedoya (futuro ministro de Defensa del Gobierno Samper), en una casa cercana al Hospital San Carlos de Bogotá.

Así mismo se esclarece que la situación que se vive en Puente Nacional es parte de un plan de control militar que incluye las minas de esmeraldas de la vecina región de Muzo, plan concebido en 1950 por el gobierno conservador de Laureano Gómez y su amigo cercano Lino Mazuera Villegas, director del Banco de la República, entidad responsable de controlar el monopolio estatal de la exportación de esmeraldas, y con la finalidad estratégica de ejercer el control territorial de las provincias de Vélez, Chiquinquirá y Ubaté.

Ese rescoldo en la provincia de Vélez, en especial en Puente Nacional, se remonta a los días posteriores a la paz que sucedió a la guerra de los Mil Días, descrita por el presidente conservador Marroquín en 1902 con el socarrón apunte bogotano según el cual “se aproximaba la paz con todos sus horrores”.

El despojo y los fusilamientos masivos de prisioneros de guerra liberales realizados por los generales conservadores triunfadores Arístides Fernández, Nicolás Perdomo, Toribio Rivera y Pompilio Gutiérrez, en las provincias comuneras tan afectadas por las acciones bélicas, y en la provincia de Vélez por el general Arístides Castañeda, padre de la cenicienta Matilde, anfitriona y protectora de Efraín González en su hacienda de Jesús María, situada a escasos 30 Km. de Puente Nacional, fueron prolongación trágica de los *horrores de la paz* del presidente Marroquín.



Alberto Lleras y Laureano Gómez firman el Pacto de Sitges.
20 julio de 1957

CÓNDOR TRES

A comienzos del 2005, en pleno invierno, por razones familiares me trasladé de Dresden a Berlín. La ciudad reunificada continuaba sin pausa su acelerada y pujante transformación diaria. Encontramos por fin una casa en el abigarrado y vívido barrio Neu Köln. Al principio, el nogal me pasó inadvertido. Era, como dije, un insignificante chamizo seco y yerto en medio de la nieve del patio, pero pronto y a medida que mi adaptación con todos sus desgarros, indiferencias y nostalgia, se tornaba irreversible, el árbol fue llenándose de follaje forzando e imponiendo su presencia ante mi ventana. Su metamorfosis cíclica, vigorosa y sostenida, constituía un acicate para seguir de pie luchando o, si se quiere, para seguir viviendo.

Una mañana de la primavera del 2007, estaba frente a mi ventana escribiendo o leyendo cuando sonó el teléfono. Era César, un amigo traductor “no oficial” de la embajada de Colombia en Berlín, quien un tanto agitado me dijo con su inconfundible acento que necesitaba hablar urgentemente y en privado conmigo.

Una hora después estábamos conversando mientras caminábamos por el bulevar del Karl Marx Alleé. Un viento frío residual del pasado invierno aumentaba mi desasosiego.

El gobierno de Uribe Vélez desde Bogotá había dado inicio oficialmente a la operación Cóndor tres contra los “guerrilleros de cuello blanco exiliados en el exterior”, especialmente en Europa. La Cóndor uno la ordenó Pinochet y la dos Videla. Se sabía por rumores de los hostigamientos desde las distintas embajadas colombianas en varios países del mundo contra los exilados opuestos al régimen de Bogotá, pero no se tenía clara la orden dada por el Presidente a sus subordinados civiles y militares.

César fue claro. Había ayudado en la traducción al alemán de una solicitud formal del gobierno colombiano al gobierno alemán pidiendo mi extradición a Bogotá, sindicado de ser un guerrillero de cuello blanco exiliado, sobre la base de haber sido el portavoz de la insurgencia en la referida Comisión de Personalidades (o Notables) nombrada en el 2001 durante el proceso de paz del Caguán.

Anexaban como pruebas contundentes del delito de rebelión varios de mis artículos periodísticos de opinión y denuncia sobre el terror de Estado, tipo fascista, impuesto por el militarismo en Colombia bajo el nombre engañoso de “seguridad democrática”; artículos publicados por mí con cierta regularidad en el portal de Internet Argenpress. Info y en otros portales alternativos o libres como Rebelión.org y ANNCOL.

Regresé a la casa y llamé a Michael en Dresden, el abogado alemán especialista en estos casos, quien en su lacónico y contundente dialecto sajón me dijo que Alemania, donde se respeta profundamente la libertad de opinión, no extradita a sus ciudadanos. Había que juzgarlos y vencerlos en un juicio justo y completo de acuerdo al Ley Fundamental de Alemania, con pruebas objetivas valoradas y comprobadas por la justicia alemana, sin la posibilidad de montajes inescrupulosos. Mi zozobra aumentó, pues, por razones patrióticas, no había solicitado la nacionalidad alemana porque ello exige la renuncia inmediata a cualquier otra nacionalidad.

De repente escuché los gritos de aquel chofer de taxi de San Vicente del Caguán, tiroteado en la cabeza ante la mirada atónita de nosotros, sus pasajeros, en la vera de la carretera antes de llegar a Florencia, a finales del 2001,

por un paramilitar moreno y enjuto de espejuelos morados y otros cuatro más que detuvieron el taxi y nos obligaron a bajar para requisarnos y examinar nuestras identidades. Los gritos aterrados de aquel taxista pronto se convirtieron en un franco zumbido terebrante llamado tinitus, que desde entonces no me ha dejado en paz, como si estuviera en mis oídos, recordándome persistentemente aquella ejecución, no inolvidable sino, nunca olvidable y definitiva.

Con gran incertidumbre hice la solicitud de ciudadanía y me dispuse a preparar las pruebas de idioma, de historia, cívica y cultura alemanas exigidas. Y el día que juré ante la Constitución alemana vivir en paz bajo sus leyes avanzadas y efectivas, y dentro de su rigurosa organización social, los ojos se me nublaron por unos instantes mientras los enjugaba. Había hecho y aprobado un inusitado y enjundioso curso universitario de siete años prácticos dentro de un pueblo excepcional, que ha sabido superar con verdadero acierto y pragmatismo dos grandes guerras mundiales y sobre todo las dos más grandes calamidades políticas del siglo XX, Hitler y Stalin, y cuyo diploma era un pasaporte alemán.

Y así, la decisión tomada en un gabinete presidencial en Bogotá, comandado por Uribe Vélez, había dado a mi agitada vida un segundo e inesperado camino, alejado por lo pronto de la persecución oficial de los cóndores y demás buitres o chulos de aquel quien había dado la orden de “acabarnos en su nombre y no se preocupe mi general”, y de sus sostenedores más allá.

Pero debo también confesar que no he salido indemne del trance de fugitivo: el desasosiego y sobresalto de aquella mañana primaveral de Berlín persiste aún dentro de mí.



ADOLESCENCIA

A mediados de 1953, pocos días después del golpe militar dado por el general Rojas Pinilla, mientras almorzábamos en la casa de Puente Nacional, mi padre dijo que un nuevo ambiente político se respiraba en Vélez y hacía posible nuestro regreso a la casa paterna. En 1930, una vez graduado de ingeniero civil en los Estados Unidos, Rojas Pinilla estuvo viviendo cerca de dos años en Vélez como ingeniero militar, convirtiendo en carretables los caminos reales que conducían a Chipatá y a Puerto Berrío. Durante su estadía se había alojado en el mejor hotel del pueblo, llamado Hotel Santander, de propiedad de la señorita Sara Moya, ubicado en la acera de enfrente a la casa paterna. Era obvio que conocía a mi padre y a la parentela Pinzón Murillo, entre ellos al coronel Antonio Pinzón Villafradez, a quien recientemente había ascendido para enviarlo como intendente de la Guajira a controlar el contrabando de café que salía por aquella zona hacia Venezuela y Curazao, y además para que convirtiera el rancherío de Uribia en una “digna capital intencional”.

El general Rojas había enviado mensajes directos a los liberales y conservadores de Vélez, a quienes conocía personalmente, instándolos a no continuar con los mutuos derramamientos de sangre y las depredaciones vengativas; a asumir una actitud de concordia y, sobre todo, a apoyar su gobierno que llamó de “Paz, Justicia y Libertad”. Ese era el nuevo ambiente al que mi padre se refería.

De nuevo, un expreso en una chiva semejante a la que nos había traído, tal vez la misma, nos regresó a Vélez. Esta vez fue para mí un gran choque perceptivo aquel día de llegada. La suma de colores, dimensiones, olores, y silencios encontrados nuevamente en esa casona, olvidados ya casi o cambiados durante la estancia en Puente Nacional. El jardín situado después de cruzar la puerta de entrada, cultivado durante muchos años con esmero por la abuela paterna y sus dos hijas, continuaba florecido y

golpeaba la vista con su colorido. Lirios, novios, cayenas blancas, buganvillas moradas, claveles, rosas pequeñas de varios colores y un pequeño y delgado árbol de arrayán ubicado en el centro del patio del cual colgaban unos musgos largos y grisáceos, mecidos por un aire fresco y suave.

Luego, bordeando el jardín por un zaguán de baldosines de ladrillo cocido, se llegaba a cinco inmensas habitaciones con piso sonoro de madera, con ventanas de postigos grandes, un tanto avejentados. Y, en el extremo opuesto del patio, en un gran salón abierto, continuaba el comedor tras otro zaguán de ladrillos planos con dos habitaciones utilizadas como despensa y alacena. Al final, estaba la cocina, siempre humeante, abierta también por atrás hacia un gran solar rectangular cubierto de pasto kikuyo, siempre verde, hasta la tapia trasera que lo separaba, como dije, del colegio universitario y de la casa de los Ortega del Río, al lado. En el costado occidental del solar había una puerta de entrada lateral, con un techo de teja castellana, amplio y largo, que cubría un amplio piso empedrado y las bateas de madera usadas como pesebreras para los caballos.

Existían en Vélez tres posibilidades para continuar mi educación. Mi madre quería ingresarme a un jardín abierto recientemente por las hermanas de La Presentación. A mi padre no le agradaba la idea porque, decía, era un colegio para señoritas, sin experiencia con niños y ubicado a mucha distancia de la casa. Una segunda posibilidad, nunca considerada, era el colegio de las señoritas Valbuena, en donde se educaban los hijos de los hacendados liberales, especialmente de la vereda del río Roper. Quedaba como tercera opción la escuela pública del Centenario, a escasas dos cuadras de la casa. Se tomó una decisión intermedia. Me matricularían, como prueba, en donde las monjas de La Presentación y de mi adaptación y avances dependería mi continuidad allí.

Estuve como dos meses asistiendo con otros niños a cánticos y recitaciones religiosas, que la hermana Inés del Redentor nos hacía repetir desde bien entrada la mañana, y que complementaba luego con largas explicaciones sobre Adán y Eva, Caín y Abel y el arca de Noé. No solo recuerdo su nombre de religiosa, evoco también su armonioso rostro de rasgos árabes y piel de durazno, dejado al descubierto por unos alerones de tela blanca y almidonada; su sonrisa de dientes resplandecientes, su voz suave y sonora con un melodioso acento totalmente desconocido para mí. El resto de su alto cuerpo lo cubría con una larga túnica negra, con mangas muy anchas, por donde escasamente

se asomaban sus largos dedos. Me alzaba y sentaba sobre sus piernas mientras hacía las explicaciones. Y eso constituyó, creo yo, mi primer enamoramiento infantil.

Pero un día cualquiera, mi padre me puso una hoja del periódico para que le leyera las noticias y no lo pude hacer. Mi madre aceptó la evidencia. Al otro día estaba matriculado en la escuela pública El Centenario, establecida en 1920, cien años después de la Batalla de Boyacá que produjo la separación de la Corona española.

Esta decisión, no me cabe hoy la menor duda, cambió de un tajo mi vida.

Llegué a un mundo desconocido indescifrable por completo. Primero de primaria con una profesora de mucha experiencia, la señorita Paulina Lamos, una mujer enjuta, vestida de negro y entrada en años, peinada con una carrera por la mitad de la cabeza y el cabello hacia a los lados; seca, huesuda y horra, con voz de hojalata, exhibiendo siempre en sus manos como símbolo de su autoridad un varejón flexible de sauce que utilizaba como férula y hacía zumbar con gran facilidad contra las espaldas de los alumnos. Sin embargo, debo reconocerlo también, nunca la usó contra mí. Yo era el hijo del médico del pueblo y, como excepción entre todos, llevaba pantalón largo y zapatos de cuero, y no pantalón corto remendado ni alpargatas de tela y suela de llanta o descalzo. Tenía cuadernos y lápiz con borrador que llevaba en un maletín de cuero, no pizarra con gis en una bolsa de trapo y, además, no me regalaban las cartillas oficiales de las materias de estudio porque mi padre pagaba matrícula y podía comprar mis útiles escolares.

El aprendizaje era tan elemental como brutal: "...la letra con sangre entra y la labor con dolor", decía malévolamente. Pronto se vieron los avances del miedo. Las recitaciones no eran ya cánticos religiosos sobre los tres pastorcitos de Caba de Iría sino las tablas de multiplicar en estricto orden ascendente; la ortografía era la recitación de los versos del ex presidente Marroquín, corregidas por un varazo seco y aterrador. Y como si fuera un cuartel en pequeño con medio centenar muchachos, quienes cada día a las siete de la mañana, antes de ingresar a los salones de clase, debíamos formar en el patio de la escuela, por orden de estatura, para cantar frente a la bandera izada las primeras estrofas del Himno Nacional y gritar en coro ¡Viva Colombia! Los que habían caminado descalzos desde sus veredas para asistir a las clases, muchos de ellos en ayunas, se desmayaban a los pocos minutos iniciar de la ceremonia.

Pero no importaba, debían esperar tendidos en el suelo hasta el final antes de recibir una taza de aguapanela caliente con una mogolla. Regalo ahora de la Presidencia de la República que enviaba a las escuelas a través de la Servicio Nacional de Acción Social (SENDAS), como decía la profesora, y servía a los desmayados como comida para todo el día.

Mi madre me echaba en el maletín un pequeño paquete con pan, queso y un bocadillo de guayaba o alguna fruta, lo que llamada “las onces”, que compartía a pedazos con mis hambreados compañeros en algunas ocasiones a la hora del recreo. No podría explicarlo, pero el compartir aquellas migajas ayudó a construir una especie de amistad solidaria. Todavía recuerdo cómo, ante cualquier amago de pelea, algo presente siempre en un ambiente tan hostil y agresivo, había en un instante cuatro o cinco de mis amigos de “las onces” defendiéndome. “Lo que es con él es con amigo”, decían, y a empellones me rescataban de la situación. Hoy me pregunto si Velasco, Marcoalirio, Vanegas, Bareño, Flavio, Castañeda, Olave, Caballero o Segundo, cuyos nombres no he olvidado aún, actuaban movidos únicamente por “las onces” compartidas o si había surgido en ellos alguna amistad.

No lo sé, pero durante los cuatro años en la escuela fueron muchas las cosas que me enseñaron y que pude aprender directamente con ellos.

Una vez concluidas las clases, a eso de las dos de la tarde y antes de regresar a sus casas y veredas, la mayoría íbamos a las fábricas artesanales de bocadillo veleño ubicadas en las afueras del pueblo para recoger los cortes de sobras que allí regalaban y que todos llevaban a sus hogares probablemente para sus padres o hermanos pequeños. Jugábamos a los trompos o a las canicas o maras y, cuando el tiempo era ventoso como en agosto, elevábamos cometas construidas por nosotros mismos. Con ellos aprendí ese hablar duro y plebe de los pobladores veleños que me acompaña como una reminiscencia o, tal vez, como un resabio. Recuerdo al hijo de Segundo, el zapatero, apodado “el Pitigrillo” —sobrenombre que provenía, creo, de un escritor italiano de apellido parecido—, que sin tomar aliento soltaba una retahíla de más de cincuenta groserías o vulgaridades, de una sola o dos palabras unidas, todas castellanas, y que al recordarlas me hacen sonrojar. Él, como cosa complementaria, sabía también más de cincuenta palabras amorosas castellanas para, sin respirar, decir las a una muchacha y así “arrecharla” o incitarla al deseo.

La víctima de mis requiebros fue mi vecinita Nelly, la hija del dentista del pueblo. Una niña morenita de mi edad, regordeta, colorada y cazcorva, con falda tobillera, a quien atosigué con muchas de las palabras que me enseñó Pitigrillo, declarándole, como si fuera el más sublime amor, la atracción que me producía.

Hasta que un día, mi madre me exigió, muy enérgica, que no volviera a insultar a la niña Nelly porque su papá se había quejado. De no haber corrección él me corregiría directamente. Esto disolvió para siempre mi amor por ella.

También con ellos aprendí los nombres de los muchísimos tipos de aves y pájaros en ese maravilloso valle. Las diferentes plantas frutales como arrayanas, pomarrosas, curabas, lulos, moras, granadillas, mamoncillos, piñuelas, mararayes o corozitos, y las diversas clases de guayaba blanca, roja, ácida, dulce, grande, pequeña, verde, pintona o madura, de cuya mezclas, según receta celosamente guardada por cada artesano fabricante, se obtiene el famoso “bocadillo veleño”.

Conocí el sitio exacto donde quedaban los pozos para bañarnos en las quebradas cercanas como el Batán, la Gachita, o Llanoemoras, en los que podíamos nadar desnudos libremente hasta el atardecer y dar increíbles saltos desde los barrancos como si se tratase del más técnico trampolín.

Creo hoy que la fascinación que ejerce sobre mí la consigna eterna de la Revolución Francesa de *Libertad, Igualdad y Fraternidad*, se remonta a aquellos años infantiles cuando, como una realidad bucólica remansada, la pude vivir plenamente, a mi manera, durante aquella pausa en la cual los liberales creían haberlo ganado todo y los conservadores sabían que no habían perdido nada.

Pero, la contradictoria realidad social, que era algo muy distinto del idílico mundo infantil que yo vivía, seguía evolucionando. Así lo informaban las noticias dadas por la emisora nacional, escuchadas por mi padre al anochecer en la sala de la casa, o leídas en los dos periódicos que llegaban al pueblo con varios días de atraso: *El Tiempo* y *El Siglo*. Así, poco a poco, me fui enterando de las noticias sorprendentes sobre la realidad cotidiana del país, la misma en la que estamos sumidos.

Recuerdo las noticias persistentes en esos días de la entrega de varios guerrilleros gaitanistas liberales alzados en armas, acogidos a la amnistía ofrecida por el general Rojas Pinilla.

Mi madre, cuando leyó la noticia de la entrega del primo suyo, Rafael Rangel Gómez, hermano de mi niñera Concepción, alzado en armas en la región del Chucurí y el Opón, en el departamento de Santander, cuando mataron a Gaitán y, nombrado directamente por la muchedumbre como primer alcalde gaitanista de Barrancabermeja; dijo sin más:

—“Pueda ser que dure...”

Después, mi padre debió explicarme, a través de las noticias que leía, la transformación paulatina del general Rojas Pinilla de salvador del país en dictador.

Al año siguiente, los comentarios y fotos de las manifestaciones estudiantiles del 8 y 9 de junio del 54 no dejaron dudas.

Padre, ¿qué es impune?, pregunté al mirar una gran foto del periódico El Tiempo donde estaban unos estudiantes que sostenían una pancarta de tela que decía: “Compañeros. Su muerte no quedará impune”, tirados en el suelo en medio del humo de la fusilería del batallón Colombia, recién llegado de la guerra de Corea.

Lo recuerdo porque aún no he olvidado su respuesta:

—“Sin castigo.”

Casi con un mes de retraso llegó editado el discurso pronunciado por el general Rojas Pinilla en julio de 1954 en la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Mi padre me pidió lo leyera de corrido. Al terminar la lectura, poco comprensible para mí, mi madre con un tinte sombrío comentó: “Volvemos a empezar”. A lo que mi padre añadió en forma de interrogante: “Pero, si los guerrilleros liberales ya se entregaron y los comunistas no pasan de mil en toda Colombia, ¿qué es lo que está pasando?”

Años después, buscando respuestas a aquel diálogo inquietante que me ayudara a configurar la memoria nublada de aquellos años, debí buscar y leer de nuevo el discurso completo del general. Hallé aclaración en el siguiente párrafo:

...Desde su nacimiento, nuestra república se ha caracterizado por su vocación democrática y, como es obvio, la democracia supone la existencia de partidos políticos. Pero, como la lógica y la más reciente historia lo enseña, la democracia tiende al suicidio y facilita la ruina de la Nación misma cuando un vicioso exceso en el empleo de la libertad deja prosperar a las agrupaciones sectarias, cuyo credo y métodos de lucha están definidos y ordenados por potencias extranjeras enemigas de Dios y de la propia patria. La hora actual es la del combate definitivo entre el cristianismo y el comunismo. Nosotros ocupamos en América una posición

de grave responsabilidad por nuestra formación espiritual, por nuestro destino histórico y por nuestros compromisos con las repúblicas amigas. Por otra parte, hemos tenido que sufrir en varias ocasiones los impactos de siniestros atentados de típica inspiración marxista. Se impone, pues, que vosotros adoptéis la fórmula para declarar contrarias a la Constitución las colectividades políticas que como el comunismo obedecen consignas de países que persiguen la destrucción de Colombia...

Fui aprendiendo así, directamente en las noticias, la geografía atormentada de Colombia y muchas palabras nuevas, llenas de zozobra y miedo, explicadas pacientemente por mi padre o mi madre: guerra de Villarrica, campo de concentración de Cunday, Tolima. Base militar de Tolemaida, Melgar, aviones T33, Napalm, Estados Unidos, Corea, Batallón Colombia, Lister, dictadura, Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), plaza de toros Santamaría, TNT en Cali, Movimiento de Acción Nacional, pacto bipartidista, paro patronal, caída del dictador.

Y sin mucha dificultad me llega el recuerdo de aquel 10 de mayo de 1957, cuando en la escuela pública nos dieron asueto y con mis compañeros aprovechamos para hacer una excursión a la Cuevas del Indio, ubicadas en la parte alta de la Peña de Vélez, donde se decía que había un antiguo cementerio indígena.

Visitamos la entrada porque todos tuvimos miedo ir un poco más a la profundidad de la caverna y nos regresamos. Existía un pequeño parque al entrar al pueblo por el Camino de la Peña, en el que por orden del general se había erigido un pedestal no muy alto con el busto suyo. Nuestra sorpresa fue cuando vimos allí una aglomeración, principalmente de jóvenes provenientes del colegio universitario y algunos otros compañeros de la escuela, que trepados sobre el monumento, le daban martillazos a la cabeza del general y gritaban “abajo y muerte al dictador”. El bronce cedió al fin a los martillazos y la cabeza del general cayó del pedestal hecha pedazos. Varios años después, volvería a ver aquel pedestal ruinoso y vacío, carcomido por la maleza surgida de entre sus grietas y, de manera extraña, sin otra estatua en relevo de la del general.

Uno o dos meses después de la caída del general Rojas, pasó por la casa de Vélez el sobrino de mi padre, el coronel Antonio Pinzón Villafradez. Venía de regreso, al concluir su gobierno en la intendencia de la Guajira y quería charlar en largo con mi padre. Discutieron intensamente cerca de una semana y, a partir de esta visita o tal vez como resultado de ella, mi padre decidió trasladar la familia a Bogotá al prever los cambios anunciados.

Bogotá era una ciudad con aproximadamente 600.000 habitantes a comienzos de 1958. Tendida sobre una gran sabana andina que bordea por el oriente una sucesión de cerros, como el de Monserrate, bastante bien cuadrículada entre calles y carreras y alargada de norte a sur. Había crecido vertiginosamente sobre dos ejes: uno, la carrera séptima que llevaba el antiguo camino real del norte hasta la plaza de Bolívar y continuaba hacia al sur; y otro, la avenida Caracas o carrera 14, unida durante el gobierno de Rojas Pinilla, con una vía pavimentada de dos carriles llamada Autopista del norte con la carretera a Tunja, y hacia el sur occidente con la carretera a Girardot. La carrilera del tren proveniente del norte, paralelo a una alcantarilla a cielo abierto llamado Rionegro, bordeaba la ciudad por el occidente como una especie de cincha infranqueable, y continuaba hacia el sur occidente por la vía del ferrocarril del Tolima. La ciudad había crecido por la llegada en masa de migrantes campesinos y aldeanos, provenientes de las fincas y poblaciones del resto del país, expulsados por la violencia sectaria que asolaba sus regiones, con la idea de encontrar algún trabajo para “sacar la familia adelante”, según el decir común.

Los barrios que bordean el cerro de Monserrate hacia el sur oriente, donde a comienzos del siglo se ubicaron algunas fabricas especialmente de cerveza, lozas, ladrillos y manufacturas artesanales, habían aumentado en desorden con la presencia de los desplazados y trabajadores; mientras que, hacia el norte, en la Soledad, Palermo, Chapinero y la calle 72, o más al norte, estaban las urbanizaciones residenciales modernas, estilo europeo, con amplias y bien trazadas calles, parques y bulevares arbolados, y casas de fachada imponente, o exclusivas casaquintas, estilo inglés, en las que residían los dueños de las fábricas, los empresarios, los hombres de negocios, militares, funcionarios del gobierno y sectores de clase media, llamados a sí mismos “pudientes”.

El Centro seguía siendo el área tradicional de control y centralización político administrativo de todo el país, y la antigua Calle Real había sido convertida ya en la famosa carrera séptima. Una calle larga, de por lo menos 20 cuadras, llena de almacenes de todo tipo, era recorrida a diario, de ida y vuelta, por una muchedumbre de paseantes abatidos y apabullados que hacían el ritual cotidiano de buscar allí el porvenir y, cuyo vacío justificaban diciendo que se “daban un septimazo”.

Nuestra casa en Bogotá estaba ubicada en la calle 50 con la carrera 21, a dos cuadras de la recién fundada Clínica Palermo, en un barrio de transición entre Palermo y Chapinero llamado Alfonso López. Su centro era un pequeño parque muy arbolado en cuya cabecera se destacaba una capilla con pretensiones de ser iglesia, llamada Santa Marta. Era una copia en pequeño de la plaza principal de cualquier pueblo colombiano, pero dentro de una gran ciudad.

La casa era cómoda, con cuatro habitaciones, sala y comedor, con los principales servicios ciudadanos. Una habitación la ocupaba mi madre con mis dos hermanas, quienes habían comenzado sus estudios en la universidad. La mayor, de abogacía en la Javeriana y la menor, de filosofía y letras en la Nacional. Otra habitación era ocupada por mi hermano Darío, estudiante de derecho en la Universidad Externado de Colombia, y yo. Miguel, mi hermano mayor, ocupaba otra; pues, como estudiaba medicina, debía leer a la luz de una bombilla hasta tarde de la noche, decía él. En la sala estaba el equipo de sonido de marca alemana y el piano en el que tocaban o practicaban mis hermanos mayores. Al fondo se encontraba el cuarto de la muchacha del servicio cuyo nombre, Carmen Labrador, no he olvidado.

Llegamos en una noche fría, a comienzos del 58, después de un viaje de todo un día en un tren de vapor, lento y pausado, tomado en Barbosa a las cinco de la mañana de aquel enero. Encontramos la casa bogotana arreglada, pues mi padre había enviado una semana antes un camión con el trasteo. Él permaneció en la casa paterna en Vélez durante varios años más, al recorrer las provincias de incidencia leprosa y aferrado a su trabajo de médico leprólogo, visitador del departamento de Santander, repitiéndonos cuando lo visitábamos en las vacaciones de fin de año, con cierta resignación, que posiblemente Bogotá ya no le ofrecía mucho. Sin embargo, en el fondo se dejaba ver su irreductible apego provinciano.

La mayor impresión no fue tanto el frío sabanero como la reducción del espacio. Creo que en esto consistió la primera adaptación que debí hacer en mi vida, que a partir de aquel momento se tornó ciudadina de manera irreversible; atrás había quedado para siempre la amplitud de visión colorida y de movimientos libres que tenía en los valles de Vélez y Puente Nacional. Vinieron luego más adaptaciones a la ciudad. Las direcciones: calles de sur a norte y carreras de oriente a occidente teniendo siempre como punto de reparo el

imperturbable cerro de Monserrate al oriente. Los semáforos, los automóviles y los peatones en permanente movimiento; cada uno en un camino previsto, las rutas de buses, la memorización del número telefónico de la casa y de los puntos de control de ruta más importantes y, por si algún extravío, la ruta de buses azules Sidauto, número 5, Sears –Veinte de Julio, que iba desde los almacenes norteamericanos Sears en la calle 53 con carrera 24, hasta la iglesia del barrio Veinte de Julio en el sur oriente de la ciudad.

En la casa de Bogotá tuve el primer impacto tecnológico con los llamados electro domésticos, inexistentes en la casas de Puente Nacional y Vélez. La cocina a gas, la nevera, la licuadora, la televisión por la noche y los noticieros oficiales, el teléfono fijo y los diversos tipos de música entremezclados con noticias escandalosas transmitidos día y noche por una radio martirizante; la aspiradora, la plancha, los tocadiscos de alta fidelidad para los discos extranjeros de acetato con música de violines y orquestas visibles solo en la carátula de sus empaques; las ollas a presión y demás.

Más tarde pude asimilar otras modernuras amigables como las películas a color en lenguaje original y con subtítulos en castellano, o las superproducciones bíblicas que mostraban una cara de Jesucristo diferente a la vista en las procesiones del pueblito, o las películas francesas e italianas de personajes atolondrados y desaliñados en las grandes ciudades de la posguerra europea, llamados existencialistas; en las que en algunas escenas inolvidables, unas bellas mujeres permitían contemplar un seno desnudo o lucían una atractiva falda a medio muslo que dejaba entrever el liguero con el que sostenía sus medias de nylon; o cualquier otra escena corporal femenina impensada para mí. Todo ello lo podía ver libremente en los diversos teatros cercanos a la casa, como el Nuria ubicado a dos cuadras o el Americano de la calle 49 o el inolvidable teatro Caldas de la 13 con 57, el mejor de todos, el Imperio del parque Chapinero.

También podía ver con facilidad los partidos de fútbol presentados en el Campin de la calle 57 y, sobre todo, pasear y repasar con calma el primer gran almacén de productos norteamericanos, llamado Sears, ubicado a cuatro cuadras de la casa. Exhibían allí “bluyines”, camisas a cuadros, chaquetas y mocasines o botines con suela de goma americana, y toda esa ropa promocionada por la moda *rebelde sin causa* del actor norteamericano James Dean. Para después subir las

escaleras eléctricas rumbo al restaurante *Cream Helado* y allí degustar cremosos batidos y hamburguesas de carne de res chorreante y succulenta, o salchichas calientes con mostaza, cuyo sabor acre desconocía, e iniciar la adicción a las bebidas cola. Aquello era, según la apabullante publicidad: “todo un mundo por ganar con pocas cosas para perder”.

En ese año 58, mi madre buscó un cupo para mí en el Colegio de los Hermanos Maristas, ubicado no muy lejos de la casa, en la calle 39 con carrera 17, a un lado del río Arzobispo convertido entonces en un caño de aguas servidas. Cursé en él un grado y salí expulsado por impío y malhablado. Al año siguiente debí ingresar en el Colegio de Ramírez, situado en el kilómetro 18 de la carretera central del Norte, hoy calle 199 con carrera 7^a, regentado por Santos María Pinzón, un pariente lejano de mi padre, proveniente de la rama de los Pinzón asentada en Moniquirá, sobre la margen opuesta del río Suárez y, concluí ahí mi bachillerato cinco años después en un ambiente de “libre pensamiento” y amplitud totalmente desconocido en un colegio clerical de Bogotá.

Don Santos María Pinzón dictaba la materia “Cátedra Bolivariana” y todavía no sé porqué me nombró monitor de su curso, dándome como guía de la materia el libro *Bolívar* de Indalecio Liévano Aguirre publicado en 1945. No cabía ninguna duda que la lectura cuidadosa sobre Bolívar era infinitamente más grata y cercana para mí que la doctrina social de la Iglesia que tratada de inculcarme de manera obcecada y con remilgos el hermano Adolfo.

En aquel mismo año pude oír también, y sobre todo ver, a ese gran locutor llamado Alberto Lleras Camargo, quien venía de ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en Washington para tomar posesión como presidente de todos los colombianos. En la casa, frente al televisor encendido, guardamos silencio y expectación ante su discurso. No dejaba de ser confusa para mí la factura del texto, su lectura pausada, razonada y el tono remarcado propio de los hombres amanerados de Bogotá.

Al finalizar el discurso mi padre dijo:

—“Definitivamente, este hombre es la negación de Gaitán”.

Hoy después de tantos años entiendo el aserto de mi padre. Lentamente y sin notarlo se fue cimentando en el pensamiento de los colombianos la frase que duraría por decenios: pacto para la reformas.

Su primera reforma, y tal vez la de más largo alcance, la expuso aún sin posesionarse ante el alto mando militar el 9 de mayo de 1958 en el Teatro Patria de Usaquén. Allí, Lleras Camargo pronunció aquel conocido discurso restringido cuyos ecos resuenan aún:

...Las Fuerzas Armadas no pueden deliberar en política porque la acción política se hizo para toda la Nación, porque la Nación sin distinción de grupos raza o afiliación religiosa o política les ha otorgado sus armas, el poder físico, junto a la obligación de defender los intereses comunes, les ha conferido derechos especiales, les ha exonerado de muchas reglas que gobiernan la vida civil, bajo una sola condición: No permitir que todo el peso de su poder recaiga sobre los ciudadanos inocentes.

Esta fue la base política permanente sobre la cual se construyó en Colombia un nuevo y sólido pacto entre el poder militar controlado estrechamente desde comienzos del siglo 20 por la misión militar norteamericana y el llamado poder civil de Colombia: la centralización del mando civil del Presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas a cambio de un sin número de gabelas, llamadas fueros militares, garantes de la impunidad. En adelante, no existirían ya dos fuerzas militares, una obedeciendo a la dirección liberal y la otra a la dirección conservadora, enfrentadas entre sí, sino un solo cuerpo armado unificado y subordinado nominalmente al Presidente y al naciente partido único del Frente Nacional.

Los asuntos del alto gobierno fueron formalmente separados de los asuntos militares bajo la denominación de orden público y enmarcados dentro de la estrategia universal de la guerra fría contra el comunismo, que adoptara públicamente el gobierno del presidente Truman en los Estados Unidos en 1947 y ratificado por Lleras Camargo como director de la OEA.

Así, las Fuerzas Armadas de Colombia se transformaron en un destacamento bajo la tutela, dirección y apertrechamiento estadounidense. Esto es, en un partido anticomunista, armado para la Guerra Fría sobre la base orgánica del Batallón Colombia, que fuera creado en 1950 por el pacto sellado entre el gobierno conservador y dictatorial de Laureano Gómez y el de los Estados Unidos, que se concretó en la participación de un destacamento del Ejército colombiano, bajo el mando de oficiales estadounidenses, en los cruentos combates de la guerra de Corea (entre junio de 1950 y julio de 1953); y cuya lealtad con el poder presidencial fue probada por el general Rojas Pinilla con la masacre de estudiantes en Bogotá en

junio de 1957 y cuya foto publicada en *El Tiempo*, con la pancarta sobre la impunidad, le había leído un año atrás a mi padre.

Las verdaderas reformas que con carácter urgente necesitaba la sociedad colombiana para abrirle paso a su modernización y que eran de toda índole, pasaron a ser mediatizadas por el ejército, bajo control del partido único del Frente Nacional, bajo la premisa consignada por el general Ruiz Novoa, uno de los jefes militares más destacados en la guerra de los Estados Unidos en Corea, expresada así:

La defensa contra el comunismo no reside tan solo en la fuerza de las armas; ella se encuentra siguiendo las normas democráticas y cristianas.

La guerra sectaria y fanática entre liberales y conservadores, azuzada e instigada por los máximos jefes de esos dos partidos y acabada de zanjar con el pacto frente nacionalista y el reconocimiento de más de 300.000 civiles asesinados, había sido ganada plenamente por los conservadores. En lo militar ni una sola de sus estructuras armadas entregó una navaja o se desmovilizó, mientras que la mayoría de los liberales gaitanistas entregaron sus fusiles y se desmovilizaron. Y, en lo político se impuso una extraña mezcla ideológica de ideas anticomunistas y corporativistas del nacional-catolicismo de Laureano Gómez, enriquecidas con el “panamericanismo malthusiano” del linajudo presidente Lleras Camargo; fórmulas previamente probadas en su gestión como organizador y primer secretario de la OEA, poco antes del nueve de abril de 1948.

Cómo también la economía general del país debía adecuarse a la nueva estrategia desarrollista impulsada por el gobierno estadounidense para toda Latinoamérica, planeada como un contrafuerte frente a la influencia y atracción ejercidas en el continente por la revolución cubana; el ejército colombiano dio inicio entonces las conocidas “acciones cívico-militares y planes de rehabilitación” en las zonas de orden público ejecutados por alcaldes militares, mientras los tribunales especiales iban legalizando el despojo de tierras efectuado durante la confrontación. Se estrechaba así a través de la tenencia de la tierra, la vinculación económica de los altos mandos militares con los llamados gremios de la producción que se encontraban empeñados en desarrollar y ampliar el mercado interior colombiano.

Luego vendrían las demás adecuaciones necesarias para desactivar la creciente toma de conciencia clasista que emergía

en sindicatos y organizaciones campesinas y, bajo la coartada de una explosión demográfica insostenible, se organizó la poderosa institución estatal de “Profamilia”, encargada de adelantar por parte del Estado una política malthusiana para el control de la natalidad.

Una vez hubo concluido el proceso de control político nacional sobre las regiones en conflicto y el despojo de tierras en las zonas cafeteras, esmeraldera y llanera, los “bandoleros y pájaros oficiales” dejaron de ser útiles como mecanismos de control social y, pactada ya la reconciliación frente nacionalista, los gamonales de los directorios regionales liberal o conservador que los habían incitado, dotado y mantenido hasta hacía poco, los abandonan a su suerte para que el ejército procediera a eliminarlos.

Los más notorios y sanguinarios fueron dados de baja, mientras otros como ‘Zarpazo’ Buitrago o el ‘Mariachi’ Oviedo se desmovilizaron para servir de guías civiles en la ofensiva militar iniciada por el derrocado dictador Rojas Pinilla contra los reductos guerrilleros gaitanistas y comunistas sobrevivientes de la guerra, en la región de Villarrica y el oriente tolimense, quienes habían aceptado la desmovilización pero no la entrega de armas.

Esta lucha persistente para desarmarlos la continuará el gobierno de Lleras Camargo y con mayor despliegue desde 1962, el mandato del segundo presidente del Frente Nacional, Guillermo León Valencia; un gamonal conservador caucano cuyo mérito consistía en ser heredero del poeta Guillermo Valencia y quien, gracias a la publicidad, puso de moda en Bogotá el burdel de Blanca Barón, ubicado en la calle 22 con carrera 20; lugar en el que pudimos realizar algunos amigos de 6º año de bachillerato del Colegio de Ramírez nuestra despedida de bachilleres.

El presidente Valencia, instigado por el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo dilecto de Laureano Gómez, con la consigna de destruir militarmente las repúblicas comunistas independientes de Marquetalia y Riochiquito y, con la asesoría y orientación directa del gobierno estadounidense, iniciará en 1964 con el Plan LASO una nueva guerra; diferente en calidad y cantidad a la concluida y que tomará el carácter de guerra contrainsurgente anticomunista adelantada por el ejército colombiano, asistido plenamente por el Pentágono norteamericano, y prolongada sin solución hasta la fecha.

EL VÓMITO DE SARAMAGO

A mediados de 2007, el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, durante una estadía en Bogotá, declara —probablemente sin conocer a profundidad la dolorida historia de Colombia—, que si queríamos asimilar nuestra historia “debíamos vomitar todos nuestros muertos”. Saramago en su lucidez de comunista propone mostrar la raíz de nuestra desgracia como nación moderna.

En mi ventana, frente al nogal, con un desarraigo nublado por la nostalgia y tratando de poner al descubierto mis propias raíces, no tuve respuesta a tan perturbadora propuesta. Porque, precisamente, a causa del conflicto, Colombia es el único país de Latinoamérica que a pesar de tantos libros o textos de historia escritos existen dos versiones sobre los hechos históricos: una, la de los dominantes, y otra, la de los dominados; lo que ha impedido una apropiación adecuada de su realidad.

Hasta más o menos 1960 predominaron los retazos interpretativos dispersos o de segunda mano, la mayoría de ellos sesgados cuando no llenos de mentiras y formalidades oficiales (Henaó y Arrubla), o los textos de narradores franceses o anglosajones con intereses en sus respectivas metrópolis. A partir de esa fecha (con algunas excepciones que confirman la regla), hizo eclosión la llamada “nueva historia”, que representa un avance considerable en el conocimiento colectivo de nuestra realidad. Algunos de estos nuevos historiadores se apoyaron en el método del materialismo histórico (Luis Eduardo Nieto Arteta, Ignacio Torres Giraldo, Antonio García, Indalecio Liévano Aguirre, Diego Montaña Cuellar, Jaime Jaramillo Uribe, Álvaro Tirado Mejía, Jorge Orlando Melo, Salomón Kalmanovitz, Gonzalo Sánchez, Jesús Bejarano, Marco Palacios, Hermes Tovar, Medófilo Medina, etcétera), y otros que, impugnando

el método marxista, hicieron también grandes aportes como Fernando Guillén Martínez, Luis Ospina Vásquez y Miguel Urrutia entre los más conocidos.

Pero, para infortunio, con el exterminio físico de los marxistas y del marxismo, emprendido en aquellos años por el poder del Estado, este promisorio avance en el conocimiento histórico de la sociedad colombiana no solo se detuvo sino se desandó.

Algunos de estos autores, la mayoría, murieron, y los demás, aterrorizados, fueron cooptados tanto económica como ideológicamente por aquel 'establecimiento' tan criticado por ellos años atrás. Los que, presurosos, maquillaron burdamente sus obras. Por ejemplo, convirtieron el término 'oligarquía terrateniente y financiera pro yanqui' que con tanto detalle habían descrito, en el ambiguo galicismo 'élite' que significa simplemente minoría, y las clases antagónicas subalternas en lucha se convirtieron en "sectores menos favorecidos de nuestra sociedad".

Pudieron así ser nombrados Embajador en la OEA, codirector del Banco de la República, director de la Biblioteca Nacional, rector de la Universidad Nacional, jefes de institutos burocráticos, etc. Lo que impidió la continuidad de sus investigaciones y la necesaria sustentación en el debate destinado a consolidar el corpus académico conseguido. Por el contrario, se facilitó la contraofensiva ideológica 'estructural-funcionalista y posmodernista' con su visión de colcha de retazos, sin ningún hilo conductor en los análisis, nacida en las metrópolis noratlánticas e impuesta desde los departamentos de historia de universidades privadas.

En busca de una respuesta al reto lanzado por el Nóbel literario portugués, se me fue develando el hilo conductor, paulatinamente ocultado o difuminado, de nuestra historia excepcional; sugerido en alguna de sus obras por el historiador marxista inglés Eric Hobsbawm y, a la inversa de lo planteado para Europa decimonónica por aquel otro gran historiador alemán Von Clausewitz, la política en Colombia ha sido continuada por otros medios: una guerra interrumpida impuesta a los trabajadores desde 1928 por el poder dominante.

La persistencia en la actualidad del conflicto social armado en Colombia impuso en la práctica la necesidad de entender la atadura y articulación entre cada una de nuestras guerras civiles

que nos asolan con todas sus calamidades desde comienzos del siglo XIX, e hizo evidente el grueso hilo histórico que enlaza la guerra contrainsurgente y geoestratégica iniciada en 1964, y que se libra actualmente en Colombia, con la guerra civil que disolvió a la Grancolombia, la patria soñada por el Libertador Bolívar.

Y dejó en claro cómo todos estos estudios de caso estructural funcionalista surgidos como una suerte de tinta de calamar, impresos y lanzados masiva y bellamente, que presentan cada “guerra civil” de las tantas habidas en Colombia como hechos aislados o únicos, llenos de anécdotas y sin vinculación con el siguiente o con el precedente hecho de guerra, no eran sino otra maniobra más para enturbiar la conciencia histórica colectiva de la sociedad colombiana.

Cómo los hacendados esclavistas y exportadores de oro primero, y luego de productos agrícolas hasta llegar al café, enfrentaron sus peonadas sectorizadas y fanatizadas con odios partidistas heredados en guerras que llamaron civiles; cada una resuelta o zanjada mediante un pacto bipartidista en las alturas para cambiar la Constitución de Colombia y acomodarla a sus particulares intereses; pactos rotos luego para recurrir a una nueva guerra civil finalizada con otro pacto bipartidista, liberal-conservador, y así sucesivamente, en un círculo vicioso infernal de guerra–pacto–guerra denominado finalmente conflicto armado colombiano.

Veamos:

1º En 1829 se aliaron los generales caucanos y grandes propietarios de esclavos José Hilario López, José María Obando (ambos del grupo liberal llamado de “los exaltados”) y el general vicepresidente Domingo Caicedo (del grupo de los liberales moderados), contra el general venezolano Rafael Urdaneta, fiel aliado del Libertador Simón Bolívar, con el fin de restaurar por medio de una guerra al general Francisco de Paula Santander en la presidencia, disolver la Grancolombia y establecer la constitución de la Nueva Granada. Número de muertos: 600.

2º Luego, durante la segunda guerra civil llamada de Los Supremos, iniciada en 1839 y concluida en 1842, que duró 27 meses, el gobierno liberal moderado de José Ignacio Márquez, aliado con los también generales hacendados y esclavistas caucanos del partido de los liberales moderados, Tomás Cipriano Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, se

enfrentaron encarnizadamente contra los generales liberales exaltados, Francisco Carmona, antiguo enemigo de Bolívar en la costa Caribe, Salvador Córdoba en Antioquia, Manuel González en el Socorro y Vicente Vanegas en Vélez, quienes se sumaron al alzamiento que hizo el general Obando cuando detenido era conducido a la ciudad de Pasto para ser juzgado por el asesinato del mariscal de Ayacucho Antonio José Sucre, ocurrido el 5 de abril de 1828 en las montañas de Berruecos. El general Obando se levantó en el Cauca con doscientos peones y esclavos suyos y se declaró jefe supremo de la guerra del sur, y restaurador y defensor de la religión del crucificado. Una mediación del ministro plenipotenciario inglés en Colombia, Robert Stewart, en Ocaña, concluyó con el acuerdo de los dos grupos para expedir la Constitución de 1843. Los liberales moderados se llamarán poco después conservadores y los exaltados tomaron el nombre de liberales a secas. Número de muertos: 3.400.

3º Vino luego la tercera guerra civil, en 1851, que duró 10 meses, en la que el hacendado caucano, general José Hilario López, presidente liberal aliado con el general Obando, hicieron frente al alzamiento armado conservador que comandaron en su contra el tratante de esclavos caucano Julio Arboleda y el hacendado de Guasca Mariano Ospina Rodríguez. La confrontación terminó en septiembre de 1851 con un pacto que indultó a los jefes conservadores y sentó las bases para la constitución de 1853. Número de muertos: 1.000.

4º La cuarta guerra civil que duró 8 meses se inició en abril de 1854. Cinco grandes hacendados generales liberales moderados, convocados por el vicepresidente José de Obaldía: Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, Tomás Herrera, Joaquín Posada Gutiérrez y Joaquín París, hicieron una coalición con los grandes hacendados conservadores Julio Arboleda, los hermanos Pastor y Mariano Ospina, y Manuel Briceño, para derrocar al general Melo quien, apoyado por los artesanos bogotanos, se había apoderado de la presidencia de la república que estaba en manos del General Obando. La coalición de hacendados triunfantes conmutó el fusilamiento del general Melo por su exilio y estableció las condiciones de la Constitución federal Granadina de 1858. Número de muertos: 4.000.

5º La quinta guerra civil duró 16 meses. La inició el gobernador del Estado federal del Cauca, el hacendado y exportador general Tomás Cipriano de Mosquera en mayo

de 1860, al frente de una coalición electoral de liberales y conservadores llamada Partido Nacional, que derrotó al gobierno hegemónico del hacendado y comerciante conservador, Mariano Ospina Rodríguez, y sentó las bases de la constitución radical de 1863. Número de muertos: 6.000.

6º La sexta guerra civil que duró diez meses, fue iniciada en 1876 por el Partido Conservador, aliado con el liberalismo de Rafael Núñez, el gamonal de los grandes comerciantes y exportadores cartageneros, en contra del gobierno de los liberales radicales. Finaliza con la derrota de los conservadores y la pérdida del predominio de los radicales dentro del Partido Liberal y del gobierno. Número de muertos: 9.000.

7º La séptima guerra civil duró 13 meses y fue iniciada en 1885 por los gamonales liberales radicales de Santander contra el gobierno de coalición, liberal conservador, presidido por Rafael Núñez, y concluyó con la derrota de los liberales radicales, el triunfo del gobierno y la promulgación de la Constitución regeneradora de 1886. Número de muertos: 3.000.

8º La octava guerra civil duró 2 meses, de marzo a mayo de 1895. Una fracción del liberalismo enfrentó al gobierno conservador de los hacendados exportadores Miguel Antonio Caro, José María Sanclemente y José Manuel Marroquín. Termina con el triunfo de las fuerzas del gobierno dirigidas por el exportador y esclavizador de indígenas, el cauchero Rafael Reyes, convertido en general, y que puso fin al predominio del conservatismo nacional del presidente Núñez, en manos entonces de M. A. Caro y derivó en la incubación de la guerra de los mil días que se inició 4 años después. Número de muertos: 2.000.

9º La novena guerra civil, llamada de los Mil Días, pero que en realidad duró 1.130, enfrentó a los liberales radicales con la coalición de los gamonales exportadores del gobierno conservador de Marroquín. Se inició el 17 de octubre de 1899 con la toma de la vecina ciudad del Socorro, realizada con los peones de su hacienda por el hacendado general Juan Francisco Gómez Pinzón, perteneciente a la fracción radical del liberalismo. Se le unieron de inmediato los demás jefes y gamonales liberales del radicalismo en todo el país: Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Vargas Santos. El gobierno reforzó su ejército con los hacendados—generales Peña Solano, González Valencia y Próspero Pinzón, y la guerra se tornó en una carnicería prolongada que movilizó a más de 500.000

campesinos y aldeanos, en un país de escasos 4 millones de habitantes; causando la muerte de unos 100.000 peones sectarios o fanatizados de ambos partidos. La indefinición militar hizo surgir al final la forma de guerra de guerrillas, experiencia que persistirá largos años en la memoria colectiva de los colombianos. La guerra terminó con mediación del gobierno de los Estados Unidos y, en el buque de guerra Wisconsin anclado en la bahía de Panamá, se presionó la firma de un tratado político que incluyó entre otras cláusulas las negociaciones sobre el canal de Panamá. El 12 de noviembre de 1902 firmaron el general Benjamín Herrera por parte de los liberales radicales y el general conservador Nicolás Perdomo por parte del gobierno. El resultado final, además de la traumática y masiva movilización social, especialmente campesina y aldeana, y que se prolongó durante las décadas siguientes, significó la ruina del país; en especial, en la región comunera y santandereana en donde se libraron los más mortíferos combates; la pérdida de la provincia de Panamá, el asenso fraudulento a la presidencia de la república del cauchero exportador Rafael Reyes, convertido en dictador bipartidista de la Unión Republicana con su reforma constitucional de 1905. Número de muertos: 100.000.

Pero esto no fue todo. La tanta veces probada táctica de los pactos de “convivencia y aclimatación de la paz” entre los dirigentes de uno y otro partido, una vez concluida la guerra de los mil días, se continuó sin modificaciones hasta la actualidad, constituyéndose en una verdadera ideología para gobernar:

1º Alianza bipartidista liberal-conservadora de 1909 para derrocar a Reyes cuando se había agotado ya su arbitraria política de favoritismo para la industrialización subsidiada de los cafeteros y exportadores y para apoyar la presidencia del cafetero antioqueño Carlos E. Restrepo.

2º Coalición pactada por los conservadores moderados para un gobierno bipartidista y de convivencia entre 1914 y 1930, con el fin de continuar sosteniendo el desarrollismo industrial subvencionado y la expansión agrícola y ganadera, junto a la economía de los enclaves norteamericanos en las zonas bananeras y petroleras, y caracterizó a los 4 gobiernos de la llamada hegemonía conservadora (José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nel Ospina y Miguel Abadía Méndez) y en los que se sucedieron las masacres de las bananeras y de Barrancabermeja. Número de muertos 3.000.

3º Concentración Nacional en 1930. Esta vez dirigida por los liberales con apoyo minoritario de los conservadores, pactado para ganar el gobierno y sostener a Enrique Olaya Herrera.

4º Unión Nacional de 1946, dirigida por de Alberto Lleras Camargo, pactada con los conservadores para superar la renuncia del gobierno liberal reformista de Alfonso López Pumarejo, controlar el creciente conflicto en el campo que reflejaba la ley agraria de 1936, la agitación obrera en los enclaves bananero, petrolero y en el transporte por el río Magdalena. Masacre obrera en Barrancabermeja. Número de muertos: 20.

5º 1946. Gobierno conservador del cafetero antioqueño Mariano Ospina Pérez, apoyado por un pacto liberal, con paridad en el gabinete ministerial y gobernaciones departamentales cruzadas. Inicio de la llamada violencia conservadora contra los liberales gaitanistas, socialistas, agrarios y comunistas.

6º 1948. Pacto de gobierno de mayoría conservadora y participación de los liberales para aplastar la insurrección popular desencadenada a partir del asesinato del dirigente liberal de izquierda Jorge Eliécer Gaitán.

7º En 1953, pacto del conservatismo moderado dirigido por Ospina Pérez con los liberales para destituir al presidente conservador doctrinario o falangista Laureano Gómez y apoyar al general Rojas Pinilla como primer mandatario del país. Bombardeos a las regiones campesinas del Sumapaz, Villarrica y oriente del Tolima. Campo de concentración en Cunday.

8º En 1956 es pactado el Frente Civil entre los liberales dirigidos por Alberto Lleras Camargo y la fracción doctrinaria (falangista) del conservatismo dirigida por Laureano Gómez, con el fin de remplazar la dictadura del general Rojas Pinilla.

9º 1957. Gobierno bipartidista de las Fuerzas Armadas. Pacto entre liberales y conservadores para preparar la transición al Frente Nacional.

10º Frente Nacional, iniciado en 1958 con el gobierno de Alberto Lleras Camargo y prolongado sin interrupciones hasta 1974. Se rigió por el artículo 120 de la Constitución Nacional (participación paritaria y equitativa de miembros de los dos partidos en toda la administración pública, alternación presidencial cada cuatro años y escogencia del candidato por acuerdo bipartidista). Y su más importante característica: el

pacto entre el poder militar y el civil para otorgar a los militares los fueros y el control absoluto del ‘orden público’, con la consecuente reestructuración de las Fuerzas Armadas para cumplir una función institucional de carácter contrainsurgente; bajo la orientación y apertrechamiento previstos en los planes de guerra estadounidenses, que se diseñaron y aplicaron en el segundo gobierno frentenacionalista de Guillermo León Valencia.

Con la presidencia del gamonal conservador caucano Guillermo León Valencia, concluye el periodo de violencia liberal-conservadora iniciada en 1946. Número de muertos 300.000 y aún se ignora cuántos millones de desplazados internos se produjeron.

En 1964, con el ataque a Marquetalia, el Estado inicia la guerra contrainsurgente anticomunista planeada y dotada logísticamente por los gobiernos de los Estados Unidos. La que se ha continuado sin interrupción con el nombre correspondiente del plan de guerra de los diferentes gobiernos liberales o conservadores subsiguientes, estableciendo y fundando las bases económicas, políticas y militares para la apropiación total del Estado colombiano por parte del narcotráfico paramilitar que hasta julio 2007 contabilizaba cerca de 200.000 (doscientos mil) muertos de guerra, 40 mil fusilados y desaparecidos, 4 millones de desplazados internos y el despojo de 4 millones de hectáreas.

11^o Durante el gobierno de César Gaviria, el pacto liberal-conservador existente se “amplia” con otro firmado con un grupo de guerrilleros desmovilizados conocido como Alianza Democrática M-19, con el fin de expedir la Constitución de 1991, vigente en la actualidad, lo que permitirá otros acuerdos con el narcotráfico, para su legalización y la continuación del ciclo de “pacto bipartidista ampliado y guerra contrainsurgente”, actualmente en desarrollo.

Pienso que el escritor Saramago se refería a todos estos muertos cuando invitó al pueblo colombiano a vomitarlos para digerir o, si se prefiere, para asimilar su propia historia.



Efraín González y el misionero
redentorista David Suárez

MAYORÍA DE EDAD

Después de la etífica despedida de bachilleres en la casa triste de Blanca Barón, realizamos la tradicional excursión a la costa Caribe y, el día de la graduación como bachilleres, en noviembre de 1962, realizamos el baile de gala en uno de los salones más exclusivos del Club Militar de Bogotá. Todos, convencidos de la culminación de un periodo dorado en nuestras vidas, salíamos a enfrentar la dura realidad del “afuera” del Colegio.

Mi aspiración era estudiar medicina, influido quizás por mi padre y mi hermano mayor, en la Universidad Nacional preferiblemente, en la que ellos estudiaron. Pero dos circunstancias torcieron este destino. Una fue la muerte de mi padre, fulminado por un infarto cardíaco y, la otra, cuando iba a visitar a mi hermana que había sido nombrada juez municipal del Socorro, en la ruta, al llegar a pueblo de Oiba, el bus de Copetrán en el que viajaba se volcó. Murieron allí varias personas y los demás pasajeros sufrimos traumatismos múltiples. Permanece en mí el recuerdo de un ruido atronador de barriles de metal rodando y un golpe intenso en el hombro derecho que me quitó la respiración. Alguien me ayudó a salir

y fui conducido al hospital del Socorro donde me operaron “empíricamente” la clavícula derecha que se encontraba astillada. El post-operatorio fue más espantoso que el accidente y debí permanecer allí en recuperación casi todo el año 63.

Todavía no sé cómo, una niña hermosa de la parentela materna, quien vivía en la ‘villa Comunera’ y amorosamente me socorrió, hizo caer en mis manos una provisión de libros sobre la guerra bipartidista que acababa de concluir, editados en aquel mismo año. Me impresionaron: *Las guerrillas del llano*, de Eduardo Franco Isaza; *La violencia en Colombia*, de Monseñor Germán Guzmán Campos, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda; *Los grandes conflictos económicos y sociales de nuestra historia*, de Indalecio Liévano Aguirre; así como, procedente de Barrancabermeja, una versión mimeografiada de la historia de Colombia, escrita por Diego Montaña Cuellar y editada pocos meses después en Buenos Aires con el nombre de *Colombia: país formal y país real*. Cayó también en mis manos la idea, tal vez demasiado ambiciosa, de estudiar y graduarme como médico en España.

El 9 de abril de 1964 desembarqué en el puerto de Cádiz. Había viajado desde Cartagena durante 16 fatigosos días en el vapor de la Guipuzcoana de Navegación y traía en el bolsillo una esquila de mi madre dirigida al amigo de mi padre, el embajador colombiano en Madrid, Hernando Sorzano González, destacado laureanista del Partido Conservador, gobernador en Santander en 1950, y que se hizo congresista a su regreso a Colombia. No se había hecho público aún el apadrinamiento en Puente Nacional del pájaro Efraín González urdido por Darío Marín Vanegas y la cenicienta Matilde Castañeda.

Después de los trámites de rigor, en esa caricatura colonial del franquismo llamada Instituto de Cultura Hispánica, inicié estudios de medicina en la Universidad de Sevilla; estudios adelantados en el herrumbroso Hospital de La Macarena, convertido hoy en el Parlamento de Andalucía.

En aquel entonces, la España del *porón-pompero* se debatía en la ruina y la miseria de la dictadura del nacional-catolicismo del caudillo Francisco Franco con la resignación impotente de los derrotados. Yo era un cuasi millonario con el giro mensual que mi madre me enviaba a través de Icetex, unos 100 míseros dólares, equivalentes a 1.000 pesos colombianos de la época, con los que podía comprar la enorme cantidad de 6.000 pesetas.

Algunos conocidos latinoamericanos me llevaron pronto al restaurante, en la Alameda de Hércules, de Segundo Marrero, un comunista canario que fue capturado poco después de la guerra civil española y que acababa de salir de prisión después de haber estado preso por sus ideas durante 23 años.

Segundo cerraba la puerta cuidadosamente después de cada cena y con la sencillez de un ex presidiario nos mostraba los recortes de los periódicos comunistas hechos artesanalmente y de manera clandestina por el Partido Comunista de Andalucía, y nos explicaba cuidadosamente, “solo a los sudamericanos”, decía, los horrores de aquel paraíso de tranquilidad y seguridad. “Estaba vencido pero no convencido”, agregaba.

Pude así estudiar tres años de medicina. Pero (siempre hay un “pero”), llegó la feria de abril de 1967. Prometía ser espectacular porque venía Jacqueline Kennedy. Nos encontramos con dos colombianos, estudiantes de fitopatología por cuenta de la Federación de Cafeteros, en el *tablaó* más concurrido de la feria sevillana.

Estábamos allí, saboreando unos “finos” en la barra, cuando, a nuestro lado, un negro enorme y corpulento increpaba airadamente en inglés al mesero. Al final, con nuestro inglés chapuceado, pudimos ayudarlo.

Era un oficial norteamericano, piloto de un avión con bombas atómicas de la base de El Torrejón y, en agradecimiento, nos invitó a continuar el baile en su apartamento del lujoso barrio los Remedios. Una vez allí llamó a cuatro mujeres que conocía de tiempo atrás y el “jaleo” se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

De repente, unos gritos de un compañero en el balcón nos alertaron a todos y alcanzamos a ver cuando el piloto negro se lanzaba al vacío a través de la ventana. Lo único que se pudo escuchar en aquella sala espantada donde nos encontrábamos fueron las palabras de una de aquellas mujeres que gritó:

—“Nadie, nadie se puede apartar de la verdad. Quien diga una mentira está muerto.”

A los pocos minutos llegó la temida “gristapo” y nos llevaron esposados al calabozo de la policía ubicado en la Alameda de Hércules, diagonal al restaurante de Segundo. Hoy día, se encuentra allí un centro comercial.

Aislamiento estricto e incomunicación. Una celda de tres metros cuadrados, un jergón de paja como cama y un agujero

en el piso como sanitario. Pan con agua mañana y tarde. De almuerzo un potaje aguado de alubias. Y durante 40 días que estuvimos desaparecidos, todas las mañanas, invariablemente y por turnos, baño con agua helada mientras un policía nos azotaba durante media hora con una sonda médica de caucho amarillo que decía no dejar heridas ni rastros. Luego, por turnos también, pasábamos a la sala de interrogatorios donde el implacable jefe policial, poniéndonos una luz intensa sobre los ojos, nos golpeaba en los oídos exigiendo la confesión de quien y porqué habíamos matado al piloto norteamericano. Parece ser que en ese trance, todos recordamos lo que nos dijo la mujer y nos aferramos a la verdad.

Finalmente, vino un investigador boricua del US-Army que confirmó los antecedentes suicidas del piloto en Chicago y aceptó nuestra explicación. El jefe de interrogatorios vino con sus anteojos de culo de botella y con una sonrisa cínica enmarcada por un bigotico minúsculo, nos entregó a cada uno el pasaporte (que todavía conservo) con la leyenda “el titular del presente pasaporte tiene 48 horas para salir del Estado español por cualquier frontera”.

Sinsaberquehacer crucé la calle y fui donde Segundo Marrero. Me recibió, cerró la puerta y me aconsejó salir por Portugal. El tiquete costaba 600 pesetas hasta Lisboa. Fue adentro y volvió con 1.000 pesetas que me regaló. Silencioso fui a mi habitación estudiantil hice una maleta con lo indispensable y aquella noche viajé de Sevilla a Lisboa. Todo lo demás se quedó allá. En la frontera, como cosa curiosa, nadie me pidió el pasaporte. Con el resto del dinero pude poner desde Lisboa una carta nocturna a mi madre, respondida con rapidez con el envío de un tiquete aéreo para regresar a Colombia. Era junio de 1967.

El día que regresé a mi país, el Ministro de Educación, Octavio Arismendi Posada, miembro del *Opus Dei*, y el presidente de la mano de hierro, Carlos Lleras Restrepo, ordenaban la ocupación militar de la Universidad Nacional, ubicada sobre la ruta hacia el aeropuerto. Un tumulto de estudiantes enardecidos resistía a la tropa arrojando huevos podridos. Sonreí mientras miraba el tropel. Había aprendido dos cosas que serían imborrables, además de aborrecer intensamente al franquismo con sus diferentes versiones, incluida la colombiana: el valor de la verdad y el de la solidaridad.

MI EXPERIENCIA DEL CAGUÁN

Y aquí estoy, vencido por el frío de la nostalgia, mirando abrumado desde mi ventana la fronda y las raíces del nogal del patio posterior de mi vivienda en Berlín; recapitulando sobre la razón más inmediata por la que estoy aquí. Había sido mi decisión voluntaria y consciente el participar en el proceso de paz del Caguán, en la amplia zona desmilitarizada de la región andino-amazónica del río Caguán, desarrollado entre el gobierno del presidente Pastrana y las guerrillas de las Farc durante 1998 al 2002. Y cuyas múltiples enseñanzas dejadas en mí tuve la suerte de leer en el marco del seminario Haciendo Paz en Colombia, al que fui invitado por Piedad Córdoba y mi entrañable amigo Omar García Alzugarate, realizado en la ciudad de Buenos Aires el 23 de febrero del 2011. Así:

La primera y más importante consideración necesaria consistió en tener en cuenta que el proceso actual de transnacionalización de la economía colombiana y la profundización de la dependencia tanto económica como política y militar del Estado colombiano con respecto al gobierno de los Estados Unidos se había iniciado 25 años atrás.

Otra fue, que la actual guerra contrainsurgente por resolver en esa mesa de diálogos se había iniciado, como se ha dicho reiteradamente, en 1964, durante el gobierno conservador de Guillermo Valencia, con el bombardeo contra 48 campesinos de las regiones agrarias de Marquetalia y el conocido plan de guerra llamado LASO (Latin American Security Operation), diseñado en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Guerra contrainsurgente que se trató de resolver por la vía de los acuerdos con otros dos intentos frustrados: con el presidente Betancur en 1984 y en 1991 con los diálogos del presidente César Gaviria. Era pues un tercer intento por solucionar mediante diálogos y acuerdos lo que se ha dado en denominar el histórico conflicto social y armado de Colombia.

Era forzoso constatar al final cómo los aspectos internacionales o externos hegemonizados por la política estadounidense se sobrepusieron a los aspectos internos o domésticos de Colombia hasta llegar a sobredeterminarlos.

El antecedente más inmediato fue el gobierno liberal de Samper quien pretendió suavizar los excesos neoliberales y aperturistas de su antecesor César Gaviria, adelantando una extraña política macro económica de carácter neoliberal con “rostro humano”. Pero, como desde el inicio la administración Samper se vio envuelta en el conocido escándalo de la financiación de su campaña presidencial por parte del narcotráfico conocido como el proceso 8.000, destapado por su adversario el conservador Pastrana Arango y utilizado hábilmente por el gobierno de los Estados Unidos para obtener todo tipo de concesiones económicas, políticas y militares favorables a su política exterior, los 4 años de este gobierno cursaron en medio de una prolongada crisis de gobernabilidad y debilidad del poder central frente a los poderes regionales, la mayoría dominados ya por los narco paramilitares y sus aliados en ascenso, y frente a los cuales Samper debió darles innumerables prebendas y concesiones para poder concluir su tambaleante y condicionado gobierno.

Pese a todas las concesiones obtenidas, el gobierno de los Estados Unidos catalogó a Colombia como país paria, lo “descertificó”, y retiró la visa al presidente Samper.

El general Harold Bedoya Pizarro, ministro de defensa del gobierno de Samper, comandante del ejército y luego de las fuerzas militares, denunciado ampliamente por sus vinculaciones con la estrategia paramilitar del Estado, en nombre de sus subordinados militares dijo que se sentían “deshonrados” por su presidente y le negó a éste la autoridad moral para darles órdenes. Sin embargo, siguió en su alto puesto ministerial profundizando el plan estratégico contrainsurgente de expansión paramilitar, contando para ello con sus aliados políticos locales y regionales de ambos partidos, conocidos años después como los para-políticos y, a quienes el Presidente Samper, para mantener una precaria gobernabilidad, debió otorgarles todos los auxilios presupuestales posibles con la finalidad de que lo absolvieran en el juicio político iniciado por la Fiscalía colombiana ante el Congreso.

Así mismo, los grandes empresarios colombianos llamados “los cacahos”, condicionaron su apoyo institucional al gobierno Samper a cambio de políticas favorables a sus respectivos negocios agrícolas, ganaderos, bancarios e industriales.

Por su parte, las Farc, después del bombardeo a Casa Verde en 1991 ordenado también, como es sabido, por el presidente César Gaviria, el día de la convocatoria a la asamblea constituyente, se habían reorganizado en la región de los ríos Caguán y Yará, y aprovecharon la situación de precaria gobernabilidad de Samper

para iniciar una serie de ataques exitosos y tomas de bases y puestos militares ubicados en las selvas andino-amazónicas colombianas.

Estos ataques fueron sobredimensionados intencionalmente por los medios de comunicación del régimen, para presentar a las Farc como un monstruoso aparato militar dispuesto a dar un salto “cualitativo y cuantitativo” hacia una inexistente guerra de posiciones que amenazaría seriamente, no sólo al Estado colombiano sino también la seguridad hemisférica. Pero, como se vino a saber después, su objetivo inmediato consistió en aumentar las aprehensiones y escrúpulos dentro de los círculos políticos y militares gobernantes en Estados Unidos, con el fin de ambientar y justificar la preparación de un plan político militar de respuesta adecuada a semejante amenaza. Así, en las oficinas de planeación del complejo militar industrial y financiero estadounidense se inició la configuración del tan mentado Plan Colombia.

Pastrana Arango, asesorado por tres de sus más cercanos amigos, hombres de negocios con formación tecnocrática en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno ligado al BID, el diplomático Guillermo Fernández de Soto y el ingeniero planificador Jaime Ruiz Llano, elaboró una propuesta electoral para superar el narco-escándalo del gobierno Samper llamado proceso 8.000, la violencia y la recesión heredada; superar la inflación reabriendo los canales de financiamiento e inversión extranjera, alterados durante el anterior gobierno, pero sin modificar el neoliberalismo que venía establecido; y centró sus promesas electorales en una paz *express* con las Farc.

En un país así, no era difícil ganarle las elecciones de 1998 a Horacio Serpa, el candidato liberal ligado estrechamente al presidente Samper. Mientras tanto, en los Estados Unidos, los más altos cargos de la segunda presidencia de Bill Clinton (1997-2001), el ex jefe del comando Sur y en la fecha zar antidrogas, general Barry McCaffrey, junto con el jefe del comando sur, general Charles Wilhelm, sostenedores ambos de una línea dura antinarcóticos y contrainsurgente, acordaban con la secretaria de Estado, Madeleine Albright y su subsecretario para asuntos políticos Thomas Pickering, iniciar diálogos de paz con las guerrillas colombianas en combinación con una fuerte presión militar que suponía una reingeniería profunda del ejército colombiano. El financiamiento de este nuevo plan se discutió ampliamente en los altos círculos políticos estadounidenses, hasta ser aprobado finalmente mediante un acuerdo bipartidista entre demócratas y republicanos.

La primera de muchas otras visitas diplomáticas del nuevo presidente Pastrana fue a Washington, para hablar con el presidente Clinton. Así, el plan de desarrollo social prometido a los colombianos por Pastrana durante la campaña electoral y que

fue plasmado en un documento por el jefe de planeación nacional Jaime Ruiz Llano, se llevó a Washington para ser consensuado en inglés directamente con la Sra. Albright. El resultado fue la versión en inglés de 1999, titulada Plan Colombia, que debió ser explicada a los colombianos por el propio presidente Pastrana. Posteriormente, en 2001, cuando las conversaciones del Caguán estaban en su etapa terminal, se agregó al inicial Plan Colombia una tercera estrategia: la “antiterrorista”, ordenada por el nuevo presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. De esta manera, los guerrilleros dejarían ya de ser “narcoguerrilleros” para convertirse simplemente en terroristas.

Los contactos de Pastrana durante la campaña electoral con la dirigencia de las Farc se concretaron en 5 acuerdos principales. Uno: desmilitarizar cinco municipios de la región del Caguán, territorio conocido como “la zona desmilitarizada”, en el que se instalaría oficialmente una mesa de diálogos y negociaciones de paz entre el Estado y las Farc. Dos: desarrollar los diálogos y las negociaciones en medio de la guerra por fuera de la zona desmilitarizada. Tres: definir una agenda común de negociaciones. Cuatro: alcanzar acuerdos mínimos para un nuevo Estado por medio de transformaciones estructurales. Quinto: conformar una comisión internacional facilitadora integrada por delegados de Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela.

Inicialmente, el presidente Pastrana obtuvo en Colombia importantes apoyos de los llamados gremios económicos, los partidos políticos, un sector de los militares y grandes expectativas tanto dentro del país como en la llamada comunidad internacional. Pero pronto con el desarrollo de tan accidentado proceso de paz estos apoyos internos se convierten en franca oposición y hasta en una división dentro del régimen gobernante.

Existen diversas cronologías periodísticas sobre los abundantes hechos acaecidos entre el 7 de enero de 1999, día de la instalación oficial de la mesa en San Vicente, y el 21 de febrero de 2002, fecha de la terminación oficial del llamado proceso de paz del Caguán. Algunas, por no decir la mayoría, francamente sesgadas y viciadas, muy interesadas en favorecer la imagen del gobierno colombiano. El hecho de no existir una cronología objetiva ni confiable de todo el proceso, constituye una dificultad adicional para la valoración de esta experiencia histórica.

Sin embargo, en todas las cronologías consultadas resalta, a primera vista, una serie ininterrumpida de improvisaciones y burdas amenazas de parte y parte, las que desde un principio auguraban el fracaso. Más notorias desde la parte gubernamental que era la encargada de la dirección del proceso. Por ejemplo, en el vicioso juego formalista de prorrogar durante todo el proceso nueve veces el término de vigencia de la zona de distensión. Y, mientras los voceros de las Farc acusaban al gobierno de ser

complaciente con la expansión por todo el país de los paramilitares y sus masacres, el gobierno y los paramilitares acusaban a las Farc de usar la zona de distensión para continuar delinquiendo y fortalecerse.

Era el resultado obvio del grave error bilateral de iniciar formalmente un proceso de paz para solucionar un conflicto social y armado tan complejo y antiguo como el de Colombia, en un escenario llamado técnicamente por el gobierno como de “negociaciones en medio de la guerra”, que dejaba entrever, además de la desconfianza mutua, una agenda oculta de ambas partes para sentarse a negociar con la intención de ganar tiempo y obtener en la mesa las ventajas no obtenidas con las armas. La prueba de ello es que ambas partes, después del fracaso, se acusaron mutuamente aún y se recriminan amargamente el haber sido “engañadas” por la contraparte.

Pero, además de la sobredeterminación de la política exterior estadounidense del Plan Colombia y de la división interna dentro de su clase dirigente colombiana; un observador desapasionado puede encontrar otros desaciertos en la conducción del proceso, tales como:

1º La burda y tradicional asociación entre elecciones presidenciales y procesos de paz.

2º La carencia de un tercero adecuadamente definido.

3º El desfase entre las promesas electorales plasmadas en una agenda de negociación y las posibilidades reales de transformaciones estructurales de la sociedad en un complejo proceso de paz de este tipo. Es decir, el considerar la negociación como un pequeño asunto de poder y no como una negociación integral de un conflicto social armado.

4º Los intereses económicos, políticos y militares de los llamados en Colombia “enemigos de la paz”, quienes alimentan el conflicto o “aceitan” la maquinaria de guerra para continuar lucrándose de ella.

5º La carencia de un escenario de justicia y reparación de víctimas del conflicto.

6º El uso de los medios de comunicación de masas como armas de guerra, en lugar de utilizarlos para generar un clima de distensión y creación de confianza entre las partes.

7º La confusión semántica deliberada hecha del concepto de paz al reemplazarlo en el léxico oficial por el de seguridad.

8º Por último, la inercia de siglos de violencia política desde el Poder, coagulada en la conciencia colectiva de los colombianos y sintetizada en el argumento oficial y militar vigente de “la razón de la fuerza”, en lugar de “la fuerza de la razón”.

Ahora bien, no todo en el Caguán fueron fallas o yerros. Hubo también aciertos y aspectos positivos que deben valorarse adecuada y positivamente, de los cuales se pueden destacar:

1º La firma oficial entre las dos partes de la Agenda Común el 6 de mayo de 1999, firmada 4 meses después de iniciada la negociación, y la visita a la zona de distensión, ese mismo día, de una delegación del congreso de los Estados Unidos.

2º La entrevista del jefe de la bolsa de New York, Richard Grasso con Manuel Marulanda y demás voceros de las Farc en el Caguán, el 26 de junio 1999.

3º La asistencia de 27 representantes de países el mundo a la mesa temática de Los Pozos, el 29-30 de junio de 1999.

4º El ciclo de Audiencias Públicas iniciado el 3 de diciembre de 1999 en las que participaron más de 25.000 colombianos.

5º La tregua unilateral decretada por las Farc en diciembre de 1999.

6º La gira por Europa de los voceros de las Farc y del gobierno en febrero de 2000.

7º La visita de una comisión de compañías multinacionales a Manuel Marulanda y demás voceros de las de las Farc, el 3 marzo de 2000.

8º El acuerdo de Los Pozos, el 8 de febrero 2001, para reorientar el proceso.

9º La entrega de 62 menores de 15 años, militantes de las Farc, el 15 de febrero 2001.

10º El intercambio y liberación de 55 militares retenidos por las Farc y 11 guerrilleros presos el 16 de junio de 2001.

11º La liberación unilateral de 242 policías y militares retenidos por las Farc, el 27 de junio 2001.

12º El informe de la comisión de personalidades o de los notables que presentamos el 27 de septiembre de 2001 y en el que hicimos una serie de recomendaciones para controlar el asenso del paramilitarismo, disminuir la confrontación y reorientar el proceso de la negociación en un escenario de tregua bilateral y con un proceso constituyente final, y que aparece como apéndice de este libro.

13º El acuerdo de San Francisco de la Sombra, firmado el 5 de octubre de 2001, para entrar a estudiar un posible alto el fuego y cese de las hostilidades.

14º El papel jugado por la comisión facilitadora internacional al final del proceso para evitar su inminente ruptura, en especial por el asesor de la ONU, James Lemoyne.

Como consecuencia inmediata de la ruptura del proceso de paz, el conflicto social y armado de Colombia se recrudeció. Las fuerzas militares, una vez reorganizadas y rearmadas bajo los parámetros estadounidenses del Plan Colombia, iniciaron una ofensiva general contra las Farc. Y éstas recrudecieron también sus acciones. La estrategia paramilitar del Estado continuó su expansión de terror por toda la geografía del país completando su total fusión con el narcotráfico y con los poderes políticos locales y regionales, hasta lograr finalmente la captura del aparato estatal.

Y, sobre el hastío del fracasado proceso del Caguán y del malestar de una población castigada con la situación económica y social catastrófica, como la descrita a finales del 2001 por la asociación nacional de instituciones financieras ANIF, Álvaro Uribe Vélez, el más claro partidario de continuar la guerra contrainsurgente del Plan Colombia hasta lograr la derrota militar de la insurgencia, apoyado por Pastrana y todo el Partido Conservador, monta su candidatura presidencial mediática y el golpe electoral en mayo del 2002, en el que obtiene la presidencia de Colombia. En agosto, cuando este toma posesión del cargo de presidente, los conservadores triunfantes forman parte esencial del bloque de gobierno de 8 años de Uribe Vélez.

Dos años antes, el 22 de noviembre de 2000, Pastrana había conformado un frente común por la paz para apoyar el proceso de paz del Caguán y entre sus miembros más destacados estaban los caciques electorales como Mario Uribe, senador antioqueño, primo y mentor del futuro presidente Uribe Vélez, Ciro Ramírez, senador por Boyacá, ambos condenados a prisión 8 años después, en abril de 2008, por la Corte Suprema de Justicia dentro del escándalo de la llamada narco-para-política que involucró a 69 congresistas de todos los partidos políticos de la coalición gobernante. De este frente común formó parte también el político liberal Luis Guillermo Giraldo Hurtado, negociador del gobierno Pastrana en el Caguán y luego promotor del referendo para hacer elegir por segunda vez a Uribe Vélez y quien fue judicializado igualmente en junio del 2010 por corrupción, falsedad ideológica y fraude.

A comienzos de agosto del 2005, Uribe Vélez, para devolverle los favores recibidos, nombra a Pastrana su embajador plenipotenciario ante el Gobierno de los Estados Unidos. Es entonces, cuando el vocero de las Farc en el Caguán, Raúl Reyes, pudo decir en una entrevista concedida al periodista sueco Dick Emanuelsson que “el presidente Pastrana no había desarrollado ni un solo punto de la agenda común pactada en el Caguán para pavimentarle el camino a Uribe Vélez”.

La política en Colombia, desplazada de su ambiente natural a los medios de comunicación, propiedad de los grupos Prisa y Planeta, dos multinacionales españolas-estadounidenses, y usados como

medios de propaganda de un gobierno totalmente sometido a sus intereses; satanizaron la hermosa voz nativa “Caguán”, con la que llamaron en su mito de origen a ese río tormentoso los indígenas de esa región del piedemonte amazónico del sur de Colombia, hasta volverla un sinónimo de engaño guerrillero.

Una pregunta hecha por los siempre asombrados expertos en resolución de conflictos internacionales era: ¿por qué razón, el gobierno de Pastrana desmilitarizaba y entregaba a las Farc una zona tan grande como la del Caguán, cuando Manuel Marulanda, a nombre del secretariado de esa guerrilla, había pedido solamente la cabecera municipal de San Vicente? Nadie sospechaba pues era un secreto diplomático muy bien guardado, salido a flote el 6 de diciembre de 2007, en una trifulca típica entre Uribe Vélez y Pastrana, cuando éste debió declarar públicamente que había sido una imposición del gobierno Clinton como una parte esencial del desarrollo del Plan Colombia.

Quedaba demostrada entonses la táctica bifronte colombo estadounidense encaminada, por un lado, a darle aire político al gobierno de Pastrana para realizar la reingeniería militar urgente a las fuerzas militares colombianas, golpeadas por las sobredimensionadas tomas guerrilleras de las bases militares en el sur del país; relanzando la eterna monserga militarista de “ahora sí los vamos a derrotar”; y, por otro lado, demostrar cómo las Farc no tenían la capacidad para dirigir una zona territorial que victorias militares anunciaban, y menos para gobernar un Estado tan complicado como el colombiano.

Y, para el caso bien previsto de que la guerrilla no aceptara convertirse en una “fuerza erradicadora de matas de coca”, como se había planeado, o que los diálogos de paz desarrollados bajo la extraña condición de dialogar en medio de la guerra fracasaran, como en efecto sucedió, se tenía la justificación política perfecta para iniciar una intensa campaña propagandística encaminada no solo a satanizar a la guerrilla al tratarla como organización narcoterrorista, según la doctrina Bush de la guerra antiterrorista. Así mismo, al transformar el aborrecible delito del secuestro en el peor delito de la humanidad, cubrir con ello peores delitos de lesa humanidad y de terrorismo de Estado cometidos en Colombia para desplazar y despojar a 4 millones de personas, apoderarse a la fuerza de más de 4 millones de hectáreas de la mejor tierra colombiana y desaparecer cerca de 60.000 civiles indefensos mediante el uso de hornos crematorios, charcos de caimanes, fosas comunes y los llamados “falsos positivos”; prácticas utilizadas en Colombia por el militarismo en su inútil guerra contrainsurgente y que hoy, una década después de la experiencia del Caguán, pavoridos contemplamos.

De esta manera, la clara y evidente asociación o vínculo directo existente entre la imposición del Plan Colombia y la geoestrategia imperial de los Estados Unidos para la región andina, ocurrido en

paralelo y mientras se desarrollaban los diálogos y negociaciones del Caguán, desapareció sospechosamente en los análisis serios de la situación colombiana. Los excelentes análisis de todo tipo que desentrañaron y disecaron minuciosamente la mayoría de elementos contradictorios del Plan Colombia y lo caracterizaron adecuadamente como una ley extraterritorial del Congreso de los Estados Unidos, y lograron su repudio masivo e internacional, dejó de relacionarse inexplicablemente de manera objetiva con los dos fenómenos sociales trascendentales acaecidos en Colombia mientras se desarrollaron los diálogos y negociaciones del Caguán: uno, la prolongada crisis económica y política de gobernabilidad de las administraciones de Samper y de Pastrana y, dos, la salida militarista a esta crisis mediante el ascenso definitivo y captura del aparato estatal por parte del narco paramilitarismo, conducido y hegemonizado por Uribe Vélez y su clase social lumpen-burgués en ascenso, enmarcado en el reordenamiento geoestratégico neoliberal y neo colonial de la región andino-amazónica contemplado en el Plan Colombia/Iniciativa Regional Andina.

Hoy, una década después de la experiencia del Caguán, buscando una síntesis legible de tan complejo proceso, viene a mi memoria la imagen de una táctica viciosa encaminada necesariamente al fracaso: la opinión categórica dada personalmente por el delfín hijo de López Michelsen, Alfonso López Caballero, al director de la ONG Indepaz, Camilo González Posso, cuando, nombrado por Pastrana como representante del Estado ante la mesa de negociación del Caguán, sentenció, mejorando a su padre: “Hablar sin negociar y pararse a tiempo, para luego derrotarlos y volver a dialogar con los que queden”.

Y persiguiendo esta quimera, mitad política y mitad militar, durante una larga y perdida década, la clase dirigente del Estado colombiano y sus asesores estadounidenses han debido reconocer oficialmente que los militares colombianos al consumir más del 5% de un PIB tan reducido como el de Colombia, durante el año 2010, han sufrido 2.500 bajas, con 450 muertos entre ellas. Cifra superior a la registrada en 2002 cuando se presentaron 2.236 y a la del año anterior (2009) con 2.320 bajas. Y, durante el mismo año de 2010, un total de 69 estructuras activas de las Farc tuvieron acciones armadas en 184 municipios, con más de 400 combates; entendidos éstos como acciones militares de choque entre dos estructuras enemigas por más de 120 minutos. Lo que expresa, simplemente, que durante 2010 las guerrillas de las Farc ocasionaron a la fuerza pública cada mes 250 bajas, entre muertos y heridos. Más de ocho por día. Una cada tres horas. 1, 5 muertos cada día. Mientras, en el mismo periodo, las fuerzas militares dicen haber abatido positivamente a 453 guerrilleros de las Farc y capturado 1.252 de sus miembros.

Tan desolador panorama nos impone necesariamente el deber de aceptar que después de una trágica y perdida década de sangre y lodo, padecida por el pueblo colombiano, volvemos a concluir

que existe una única posibilidad para solucionar diplomática y civilizadamente el conflicto social y armado de Colombia: regresar a un escenario sistémico de paz como el esbozado por la comisión de personalidades o notables en septiembre de 2001:

1º Una tregua bilateral militar como política para toda la insurgencia colombiana, es decir, tanto para las Farc como para el ELN.

2º Una discusión amplia y democrática sobre la base de la agenda común ya firmada por el Estado y las Farc en la aldea de la Machaca, en mayo de 1999, sin perjuicio de considerar otros temas nuevos surgidos en esta década perdida; como por ejemplo: la verdad, la justicia y la reparación, y

3º Una Asamblea Nacional Constituyente que refrende los acuerdos sociales alcanzados.

Un mes después, desde mi ventana y de nuevo frente al nogal, recibí la dolorosa noticia de la muerte de mi leal y solidario compañero y amigo, Omar García, y supe sobre la confrontación armada en Colombia que arreciaba, con el anuncio de un cerco de fuego sobre el comandante de las Farc, que se cerró el 4 de noviembre de 2011. Luego de varios bombardeos de precisión, en el curso de la operación “Odiseo”, mil soldados de fuerzas especiales del Ejército, teledirigidos por el Comando Sur con el apoyo técnico de satélites estadounidenses, ubicaron y abatieron a Alfonso Cano.



Lazareto colombiano

LA LEPRO

Al comenzar 1980 había sido nombrado médico interno en el hospital Universitario de Bucaramanga y una nueva etapa se abría en mi vida. Los médicos veleños Mario Olarte Peralta y Alonso Olarte Rueda habían conformado, junto con Horacio Serpa, un grupo político-electoral llamado de izquierda liberal para participar en las elecciones regionales de ese año. Las condiciones políticas y sociales en Bucaramanga y el departamento de Santander eran muy distintas a las conventuales de Manizales. Fui invitado a conformar una alianza política amplia con otros sectores de izquierda, bajo una consigna gigantesca que escribió Edgar Ramírez en un muro de contención en la carretera al aeropuerto de Palonegro: “Paz, Democracia y Socialismo”.

Esta fructífera experiencia unitaria se resquebrajó formalmente cuando Serpa Uribe, congresista elegido en 1982, formalizó, sin consultarlo, una estrecha alianza con el conocido político liberal José Manuel Arias Carrizosa, dirigente ligado al gobierno represivo y reaccionario de Turbay Ayala y coautor del Estatuto de la Seguridad Nacional, recién llegado al país procedente de la embajada en Cuba, donde jugó un papel nefasto, debiéndose regresar apresuradamente a Bogotá por haber introducido de contrabando un lujoso automóvil diplomático.

El grupo de Serpa Uribe, con sus amigos personales, integrado ya completamente al Partido Liberal, conservó el nombre de Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA). Los últimos contactos para realizar alianzas electorales con la Izquierda se terminan definitivamente en 1986, cuando muere asesinado mi amigo y compañero de la Universidad Nacional, Leonardo Posada, elegido congresista de la Unión Patriótica (UP), y se inicia la operación militar llamada el “Baile Rojo” que exterminaría 5.000 miembros políticos de este partido.

Los resultados electorales de 1982 en el departamento de Santander habían rebasado ampliamente las expectativas de la alianza unitaria con la llamada izquierda liberal y el gobernador de Santander, el longevo y veterano político liberal Alfonso Gómez Gómez, salvador de la vida a mi padre el nueve de abril de 1948 en Chucurí, me nombró amablemente en la secretaría de salud departamental, dado mi carácter de antropólogo y médico, para dirigir los “programas médicos especiales”; nombre piadoso con el que se designaban las acciones sanitarias oficiales contra las enfermedades de la miseria como la lepra, la tuberculosis, las llamadas enfermedades venéreas como los dos chancros, la gonorrea, los condilomas y, 5 años más tarde, el SIDA. Así iniciaba mi carrera administrativa que me apartaba formalmente de la política abierta y exigía profundizar conocimientos especializados en medicina social que desconocía.

En 1982, dos años después, y siendo Gómez Gómez, ministro de gobierno del Presidente Betancur, fue cuando el ministro de salud, Jorge García Gómez, alumno de mi padre, me alejó definitivamente de Bucaramanga. Fui trasladado a Bogotá para dirigir los mismos programas, pero a nivel nacional, ampliados hacia las “minorías étnicas”, hasta 1988, cuando pasé a dirigir la división de dotaciones medico-hospitalarias del Fondo Nacional Hospitalario y, mediada la interrupción en 1991 para adelantar estudios en el exterior, fui nombrado en 1993 en la Dirección de Calidad de la Atención Médica en la Superintendencia de Salud, hasta 1998, cuando el presidente Pastrana designó como Superintendente a Inés Gómez de Vargas, una activista corrupta del grupo del cacique electoral barranquillero Fuad Char (investigado por paramilitarismo). Al no salir elegida le dieron este cargo como consolución.

Una vez posesionada la señora Gómez de Vargas, quien acababa de sacar a su hijo Mauricio de la cárcel de Barranquilla por atracador y ladrón de apartamentos, me solicitó cambiar un concepto desfavorable sobre la pésima atención médica brindada

en una clínica de Barranquilla, en la que ella tenía intereses. Al no aceptar su solicitud me pidió la renuncia, que no dudé en presentar. Poco después, el escándalo suscitado en diciembre de 1999 por la multimillonaria contratación para el negocio de la lotería Loto, firmado entre la multinacional Gtech Corporation y el Estado colombiano, en el que las arcas oficiales fueron desfalcadas en 1.500 millones de dólares, confirmaría mis aprensiones.

Pero, mi trasegar por todo el llamado sistema de salud colombiano me había dejado también grandes enseñanzas prácticas. Había visitado las instalaciones de salud de todo el departamento de Santander y de la mayor parte del territorio de Colombia y, adrede, me había dejado golpear por la realidad exterior que las circundaba. Así, sin atajos, al tratar de encontrar algo en contra de estas enfermedades de la miseria o “especiales”, llegué al origen de la misma: era producida por flagelos, también especiales, traídos a estas tierras por los invasores españoles y frente a ellos los nativos de América no poseían ninguna memoria inmuno-genética que los defendiera y los librara del exterminio.

—La lepra la trajeron los españoles, me había dicho mi padre cuando niño. Y a Colombia vino, íese era mi hallazgo!, precisamente en las mismas manos que trajeron la cruz en la empuñadura de la espada. El capitán Jiménez de Quesada, junto con dos curas doctrineros y un soldado de apellido Zárate, venidos en la expedición conquistadora que remontó el río Opón y que en marzo de 1537 llegó hasta el valle del río Saravita, en los territorios de los indios Chipatáes y Agátés, padecían lepra.

Y desde este valle, bautizado con el nombre “del río Suárez Rendón”, en honor al caballo de uno de los capitanes que pereció ahogado en sus aguas, y, debido a las condiciones climáticas, al ciclo de lluvias, la acidez y sequedad del suelo y, sobre todo, por las miserables condiciones de vida de los indígenas sometidos, la enfermedad se asentó definitivamente en esta región convirtiéndola en uno de los reservorios naturales más persistentes de Colombia, y desde allí expandió y generalizó su contagio a través de las áridas montañas del río Chicamocha.

Jiménez de Quesada, el conquistador español de la actual Colombia, era un miembro de una antigua familia de judíos conversos asentada en la morisca Córdoba, dedicada desde antaño a la fabricación de paños y textiles; familia que por diversas actividades fraudulentas en los negocios y uso de tintes falsificados, había sido expropiada. Quedó en la ruina al perder el pleito que él, como letrado, adelantó en defensa de su familia y, se embarca entonces, junto con sus dos hermanos, para el

Nuevo Mundo en busca de fortuna. Su madre y sus hermanas, con síntomas objetivos de padecer la enfermedad de Hansen, se quedan en Andalucía.

Sale el 5 de abril de 1536 de donde hoy se encuentra el puerto colombiano de Santa Marta y remonta el río Magdalena rumbo al interior capitaneando una expedición de 600 hombres a pie y 70 a caballo. Tras múltiples azares llega 6 meses después con solo 170 hombres y 70 carramanes o rocinantes, a un sitio cerca de la actual Barrancabermeja que bautiza “la Tora”, en honor a sus ancestros judíos. Descansa allí y tras reconocer el terreno remonta el río Opón en busca de la cordillera en la que, según se ha enterado, hay numerosa población indígena vestida, alimentada con sal y se adorna con figuras de oro y esmeraldas. El 9 de marzo de 1537 está ya en la provincia de Vélez en donde saquea piezas de oro indígena valoradas en 97 pesos más 4 tomines de oro fino.

Un año después, el 21 de abril de 1537, llega a la actual sabana de Bogotá y la bautiza como el Valle de los Alcázares de la Nueva Granada. Ordena construir 12 bohíos en nombre de las doce tribus de Israel y anota en el cuaderno de jornada el ingreso de 4.619 pesos de oro fino y 527 esmeraldas.

Después de varias escaramuzas sangrientas, el cacique de la región llamado Bacatá el viejo o Tizquesusa, trata de esconderse en la pequeña serranía que bordea los campos de Chía. Es encontrado pero, ignorada su jerarquía, es acuchillado y con él se va la información de los “tesoros en oro fino y esmeraldas” que previamente, y mediante un auto legal, Jiménez de Quesada había declarado propiedad del rey de España. Ingresan tan solo 600 pesos oro y 145 esmeraldas a la caja del botín. Hay que buscar y encontrar más. Envía entonces expediciones hacia Tunja, Sogamoso y Duitama y en octubre regresan a los ranchos del Valle de los Alcázares con 185.536 pesos de oro fino, 29.806 pesos de oro bajo y 836 esmeraldas. Su hermano, Hernán Pérez de Quesada, se dirige a los valles del alto Magdalena, a través del territorio de los Panches, y regresa en febrero de 1538 con 4.150 pesos de oro fino, 316 pesos de oro bajo y 28 esmeraldas; lo que ingresa formalmente en “el cuaderno de la jornada”.

Dos años después del inicio de la expedición, el 15 de junio de 1538, se escribe en Bogotá uno de los documentos más patéticos y esclarecedores de la empresa capitalista de la colonización española en la actual Colombia; con el saqueo como su relación de producción básica. Documento rescatado para la historia por Juan Friede en su libro sobre Gonzalo Jiménez de Quesada. (*Gonzalo Jiménez de Quesada a través*

de documentos históricos. Estudio biográfico. Biblioteca de Historia Nacional. Volumen XCV. Bogotá, 1960. Documento n° 12, págs. 136 y ss., titulado, “reparto del botín”.)

Se reparten, según las estrictas leyes dictadas por la Corona, 191.259 pesos de oro fino, 37.288 pesos de oro bajo, 18.390 pesos de 'chafalonía' (oro mezclado) y 1.818 esmeraldas. Descontado el Quinto para el rey quedan 289 partes. A Gonzalo Jiménez de Quesada le corresponden 9 partes y a cada uno de los 179 hombres de a pie o de a caballo les corresponde una parte, que consiste en 510 pesos de oro fino, 57 pesos de oro bajo y 5 esmeraldas. No se reserva 'chafalonía' para repartir.

Pero la ambición continúa corroyendo el alma del converso invasor. En noviembre del mismo año de 1538 le instaura un pleito penal a Sajipa o Sazipa, el indígena sobrino materno del sucesor del cacicazgo de 'Bacatá el viejo' (Tizquesusa) porque adeuda al rey de España la suma de 10 millones de pesos oro y 10.000 esmeraldas, valor del tesoro que su tío no quiso entregar al abogado Jiménez de Quesada, y que debe satisfacer so pena de “tormento recio”. Se secuestra en un rancho al cacique indígena y se utilizan todos los medios de presión para forzar la entrega del tesoro. Sajipa no entrega nada y el colonizador, licenciado en leyes, lo condena entonces en un acto formal escrito “a tormento de cuerda porque por aquí no hay otro”.

Se trataba de un tormento simple aplicado en la Europa medioeval: se amarran las manos del secuestrado por detrás y se lo subía lentamente por una viga, sin producirle la muerte o de lo contrario se perdería la información acerca del tesoro. Tras varios meses de tortura ininterrumpida, Sajipa acepta saber de un sitio donde hay un posible entierro. El leguleyo sabe que su presencia legaliza lo actuado y se cuida de no asistir. Manda comisionados de confianza que van con el cacique, excavan pero no hallan nada. Es febrero de 1539.

Los comisionados, Juan de San Martín y Juan de Céspedes, aplican más torturas: rebanan las plantas de los pies. Tampoco surte efecto. Calientan herraduras al rojo vivo y las aplican en las plantas sangrantes. Sajipa es transportado moribundo al lecho real y muere tras un mes de delirio. Está naciendo la Nueva Granada.

El licenciado Jiménez de Quesada debe viajar a España a enfrentar ante la justicia Real varios pleitos por los cuales incluso estuvo en prisión: estafas a sus compañeros, robo de 12.000 pesos de oro al tesoro de la Corona, en complicidad con su hermano, y el secuestro, tortura y muerte de Sajipa.

Pero Jiménez de Quesada refuta con dinero, gran elocuencia y habilidad procesal los cargo, y el caso sobre el secuestro, tortura y asesinato de Sajipa es declarado como “ficticio” por el Fiscal de la Corona. Legalmente no existió.

Así, con la realidad negada en forma legal, se arraiga nuestro primer gobernante, el abogado regidor de Bogotá, Mariscal y Adelantado de la Nueva Granada; encomendero perpetuo de hecho y por dos vidas, sin linderos ni número de los indios, de las localidades de Fontibón, Sogamoso y Guatavita; repartidor de indios a sus compañeros de armas, fundador de la nación colombiana con el principio leguleyo supremo que impera hoy día como su legado: “pleito que no gana lo enredo”; para continuar intrigando, pleiteando y enmascarando sus ulceras leprosas con ceniza de leña hasta 1579, cuando murió en su encomienda de Mariquita, a los 70 años, de lepra benigna, dejando instaurado y legalmente impunes el secuestro, las torturas y la extorsión “oficiales” en Colombia.

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, integrado ya el imperio español como subsidiario del sistema mundial del colonialismo capitalista, hegemonizado por la industrializada Inglaterra, sufre una gran crisis económico-fiscal que intenta resolver imponiendo en sus colonias onerosos gravámenes y tributos.

En la región del río Saravita o Suárez, pese al flagelo de la lepra implantada, se había logrado desarrollar una combinación adecuada de manufactura urbana y agrícola. En 1781, asfixiados sus pobladores por las innumerables gravámenes y trabas coloniales impuestas por la caduca Corona española, se rebelan masivamente y, al grito de muera el mal gobierno, los 25 mil pobladores Comuneros armados de palos y machetes al mando de José Antonio Galán llegan a las goteras de Bogotá; la que para ese entonces tenía la misma población de los insurrectos.

El virrey de Bogotá, de apellido Caballero, es un arzobispo diestro en la perfidia. Engaña a los rebeldes con misas y maitines, los desarma en la conciencia y las manos y los hace volver mansamente a sus batanes y parcelas. Se inicia la contraofensiva colonial y Galán, junto con cuatro de sus compañeros más esclarecidos y radicales, son descuartizados y desmembrados, y exhibidas las extremidades en diferentes poblaciones del virreinato, como rito ejemplarizante.

Para afianzar y justificar la paz militar colonial alcanzada con los pavorosos descuartizamientos y complementarla con el escarnio social, el poder colonial se inventa la terrible quimera. Dicen que la “región comunera es una pila de

leprosos” que con sus muñones producen, paños y lienzos, sombreros, alpargates, bocadillos y otras manufacturas, y que con ellas propagan por todo el virreinato la “elefancia”, nombre con el que aluden a la lepra.

Es, pues, imperativo evitar el contagio y proteger al resto de la población. Importar entonces aquellas mercancías desde Europa y neutralizar a los elefanciacos 'internándolos' en campos de concentración llamados Lazaretos. Uno de ellos, llamado Contratación, será construido en las cercanías de la villa comunera del Socorro, epicentro de la insurrección. Y José Celestino Mutis, el humanitario sabio español de la expedición botánica, con su autoridad religiosa y científica define a la monstruosa criatura con las palabras: “...la hoguera ha comenzado en las industriosas villas de Socorro y Sanjil” (*sic*).

La quimera sigue creciendo y el elefanciaco es ya un humano con mezcla de león y elefante, originado en el bíblico río Nilo. Tiene los ojos brotados y opacos como vidrio pulido con una pequeña pupila oscura en el centro. No tiene ni cejas ni pestañas sino unas manchas oscuras que resaltan los huesos de la órbita y le dan esa mirada característica intensa y desconcertante. La nariz es chata y aplanada con las fosas nasales como cavidades negras grandes al descubierto. La boca es una gran línea oscura que ha perdido los labios y atraviesa la cara desde una mejilla a la otra y en las encías protuberantes y violáceas se destacan por su blancura los colmillos. El cabello ha sido reemplazado por un pelo espinoso, hirsuto y desordenado con implantación baja, las orejas redondeadas, brillantes y paradas como si estuvieran en atención permanente. Las extremidades, o patas, no tienen dedos sino unos rudimentos de garras planas y gruesas parecidas a pezuñas de elefante. La piel de la cara es gruesa, infiltrada con nódulos o protuberancias acartonadas, brillantes y sebáceas, y cuando se quitan los harapos sobresalta la piel de elefante, paquidérmica, gruesa, escamosa, insensible. La mayoría de las veces veteadas por múltiples manchas blanquecinas, hundidas y sin vellos, alternadas con ulceraciones húmedas y redondeadas como monedas rojizas de carne ajamonada, con un olor penetrante, llamadas chancros. Los órganos genitales en la mujer son descarnados y protuberantes como el de las grandes bestias en celo y, en el hombre, son descomunales y negros; lo que constituye una ofensa a la vista.

La naturaleza los ha dividido en dos grupos: los que tienen tuberculomas blancos benignos y los que tienen chancros malignos de color negro.

La región comunera y oriental de Colombia jamás se recuperará ni económica ni moralmente de este estigma y del exterminio que lo continuó. La batalla por aniquilar la prometedor producción artesanal de la región comunera había sido ganada por los libre-cambistas y comerciantes importadores de mercancías europeas.

Pero ello no fue todo. 110 años después se repite el mismo proceso de estigmatización y exterminio de los artesanos, pero generalizado a todo el territorio de Colombia. Esta vez será liderado por el vicepresidente Miguel Antonio Caro, eximio representante del latifundismo sabanero, y por el comerciante exportador de caucho que devino en dictador civil, Rafael Reyes.

Pasada apenas la guerra civil de 1895, cuyas principales batallas se dieron en la rebelde región comunera, el general Rafael Reyes, montado sobre su triunfo y su rencor, dice que los leprosos internados en el Lazareto de Agua de Dios, al sur occidente de Bogotá, bajo el mando de un tal capitán Urrea, lo habían atacado en su hermosa y extensa finca ganadera de Tocaima, llamada la Andorra.

El padre Evasio Rabagliati, nombrado por el Vaticano capellán de los lazaretos del país y conocido como “apóstol de los leprosos”, dicta una conferencia sobre la necesidad de construir un “gran lazareto nacional”, repartido luego por todo el país. El Arzobispo de Bogotá, en nombre de la Iglesia y la patria, recomienda “encarecidamente tan santa empresa”, y el vicepresidente, Miguel Antonio Caro, aprueba la iniciativa y pide a las autoridades apoyo para “echar las bases de un Gran Lazareto Nacional, con carácter urgente dada la alarmante propagación de la lepra en varias comarcas del territorio”.

El 21 de julio de 1895, respondiendo a una invitación del general Reyes, se reúnen el cura Rabagliati junto con Juan Manuel Restrepo y otras 21 personalidades, entre quienes se encuentran el presbítero Leopoldo Medina, Carlos Cuervo Márquez, Carlos Calderón Reyes, ex ministro del tesoro público, Bernardino Medina Calderón, médico boyacense, y Leo S. Kopp, industrial alemán.

El general Reyes preside la reunión con estas palabras: “Con el fin de decidir si en Colombia hay suficiente caridad, patriotismo e instinto de la propia conservación, para que la salvemos del terrible mal que nos amenaza, e impedir que nuestra Patria se convierta en un inmenso lazareto”. Y continua: “según la última estadística existen en Colombia 27.250 leprosos, mayor número que en el resto de América y de Europa”. En consecuencia,

invita a los asistentes a conformar una Junta en asocio del padre Rabagliati y “con la colaboración decidida y entusiasta del clero y de las sociedades de beneficencia” con el fin de recaudar fondos para la fundación del gran lazareto nacional. La cifra de leproso va en aumento. La mencionada Junta del gran lazareto nacional dirige una circular al país en 1896. Son ya 30.000 los enfermos y los colombianos, conmovidos, deberán ayudar con dinero para solucionar el flagelo.

Realiza a continuación una simple operación matemática: “Si se mantuviere la misma proporción: el número de elefanciacos que había en el país hace cien años, era de 60 individuos; hoy se cuentan 30.000. Es decir por cada diez enfermos en 1796, hay cinco mil en 1895, y si el crecimiento continúa en la misma proporción; resultarían dentro de un siglo, quince millones de elefanciacos”. Colombia no tiene aún cuatro millones de habitantes. Los miembros de la Junta agregan que en el país existen, además de los 30.000 leproso censados y que son enfermos evidentes, numerosos elefanciacos latentes; lo que aumenta la “pavorosa catástrofe, la formidable calamidad de la lepra. ¿Cuántos individuos hay en el país, ya contaminados y en período de incubación? Imposible saberlo.”

Según los cálculos, 27.000 elefanciacos no están aislados ni internados y ponen en peligro a la población sana: “con excepción de unos 3.000 que habrá en Agua de Dios y Contratación, el resto es decir más de 27.000 elefanciacos están diseminados por todo el país constituyendo un peligro gravísimo para los sanos”.

Y continúa,

...no hay nación ninguna en el mundo que esté tan gravemente amenazada, como lo está Colombia, de la universal invasión de la elefancia, y si no se hace un esfuerzo sobrehumano, la lepra dominará muy pronto como soberana, y de esta región por muchos aspectos privilegiada, huirán las naciones y las gentes, como se huye de los focos de infección y de muerte.

Colombia se ha convertido a nivel internacional en “la primera potencia leprosa del mundo”. Por todo lo anterior, la junta directiva del gran lazareto nacional afirma que es necesario que “se les prohíba a los leproso y se les impida el libre comercio y el libre roce con los sanos”.

El académico colombiano Roberto Azuero publica *Lepra griega y lazaretos circunscritos*, en 1898, en Moniquirá, sobre la orilla opuesta del río Suárez, en el que se refiere a las “desconsoladoras proporciones” que ha alcanzado la lepra en los departamentos de Boyacá y Santander, y pide reglamentar la prostitución en Colombia “porque la mujer que se ha entregado

a un leproso es una vacunadora ambulante que está prodigando la lepra a todo aquel que incautamente cae en sus garras”.

El médico noruego A. Hansen, descubridor en 1873 del bacilo de la lepra, impresionado probablemente por estos informes, considera que para inicios del siglo XX el número de leproso en Colombia es “fabuloso” en comparación con los 600 leproso existentes en Noruega, país calificado como el más leproso de Europa. “Me niego a creer que en un país con 4 millones de habitantes haya un número tan extraordinario de leproso”, dice.

La guerra civil de 1895, comandada por el general Reyes, continúa tras una pausa en la de los Mil Días, que concluye en 1903 y deja al país despojado de la provincia de Panamá y sumido en la miseria y la desolación. La imagen de miles de leproso deambulando por los caminos de Colombia se difunde con rapidez y en la exposición de París de 1901 aparece Colombia como el país con más casos de lepra en el continente americano. “La parte correspondiente a Colombia en el mapamundi estaba señalada con una mancha roja”. Y el embajador colombiano en París en su informe dice: “Colombia es catalogado como país paria”.



Combatientes de la Guerra de los Mil Días. Mayo de 1900

En 1904, sobre el triunfo conservador en las guerras de 1895 y 1899 y su participación en el despojo de Panamá por parte de los Estados Unidos, el exportador de caucho y general Rafael Reyes, es elegido presidente mediante fraude. Cinco meses después de su posesión en un acto dictatorial cierra el Congreso elegido, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que lo convierte en dictador durante 5 años. Reyes ya como dueño del Poder escribe: “Este asunto es para mi país más importante que el papel moneda, que los ferrocarriles, que la instrucción

pública o que cualquier otro, y solamente es comparable en su importancia, a la conservación de la paz. El dilema es acometer y coronar esta obra en la forma dicha, para que Colombia no sea dentro de pocos años, una inmensa leprosería de la cual huirá la humanidad como de tierra maldita, en la cual nadie invertirá un dólar”.

Y en septiembre de ese año, Reyes envía al Congreso una circular urgente con el fin de “extirpar la lepra” por medio del aislamiento de los enfermos: “Ha llegado el momento de que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Nación entera se unan, con el objeto de acometer la obra nacional de extirpar la lepra por medio del aislamiento de los enfermos en Lazaretos”.

Finalizando 1906, el doctor Julio Manrique Convers es enviado a Noruega por el ya declarado dictador Reyes a estudiar la organización de los hospitales de leprosos, durante su viaje se percata de la imagen que de Colombia tiene el mundo Noratlántico y le escribe a su mentor: “El país está sufriendo real y verdaderos problemas causados por los datos exagerados en demasía, suministrados por indoctos en la materia y que a diario se publican en libros y periódicos extranjeros. En los mapas que indican la distribución de la lepra en el mundo y que figuran en todas las obras clásicas, nuestro país está todo teñido con rojo, color escogido para marcar la abundancia de la enfermedad. Ni en la India, que cuenta con miles de leprosos, ni en las Islas Sandwich, ni en Hawai; la mancha que estigmatiza es tan grande ni de color tan subido, como la que marca nuestro país.” El estigma creado se ha volteado ahora contra sus creadores.

Colombia es un país agroexportador por excelencia y la posibilidad de estar contaminados con el bacilo los productos que exporta a los mercados europeos o norteamericanos “empieza a causar pánico en los mercados europeos con relación a nuestros frutos, mirándose con recelo lo que procede de Colombia ¡El nombre de colombiano es sinónimo de elefancíaco!”, agrega alarmado el médico Manrique.

Comienza entonces la marcha hacia atrás. “Rafael Reyes, Presidente de la República, acompaña a ustedes un ejemplar de la rectificación que el señor doctor Julio Manrique, médico jefe de los lazaretos de Colombia, hace a la aseveración de *Le Courrier des Etats Unis* de Nueva York, respecto de que en Colombia hay más de sesenta mil elefancíacos. El presidente encarga hacer publicar dicha rectificación en los diarios locales”. Y le ordena al cónsul en Nueva York “...dirigir una nota a la dirección del periódico con la rectificación del doctor Manrique exigiéndole

que la publique y si no quiere hacerlo gratuitamente, debe pagársele la inserción”, como dice la circular oficial.

El dictador Reyes, preocupado, pide a sus embajadores y cónsules publicar en el mayor número de periódicos europeos la rectificación que demuestra que no somos “...el país del mundo en donde hay más leproso”, pues estas exageraciones causan problemas al país y detienen la inmigración”, y les exige “...enviar al Presidente en Bogotá las publicaciones para elaborar un folleto de ellas y hacerlo circular abundantemente a fin de corregir por este medio el error que se ha cometido, causa de inmensos males, y que podría detener la inmigración que viniera al país.”

En el documento anexo, el médico jefe de los lazaretos nacionales, Dr. Manrique, asevera que no hay más de 4.000 leproso en Colombia, la mayor parte aislados. Que la lepra ataca a los pobres y que no hay casos de lepra en las familias de los ministros colombianos: la lepra aquí como en todas partes, ataca de preferencia la clase desvalida y son raros los casos en la clase rica. Existe en Colombia como en todos los países tropicales y se puede asegurar que en muchos de aquellos, el número de leproso con relación a la masa de población, es muy superior al uno por mil, que es el porcentaje de enfermos en Colombia.”

Sin embargo, las cifras de leproso colombiano en los escenarios internacionales siguen creciendo hasta llegar a cien mil. El médico cubano, Manuel Alfonso, afirma en la sexta conferencia de beneficencia y corrección, realizada en 1907 en Cuba, que “...Colombia bien pudiera llamarse la tierra de los leproso, pues con una población de 4'000.000 de habitantes cuenta con cerca de cien mil”.

El general conservador Reyes, cauchero exportador de caucho a los Estados Unidos, devenido en dictador civil, en un último gesto para atraer los capitales extranjeros y la emigración blanco-europea, muestra enérgicamente que los frutos de la tierra están totalmente aislados del germen de la elefancia y presiona a la asamblea constituyente de bolsillo, convocada por él en febrero de 1905 para que expida la Ley 14 de 1907, así: “...Considérase como calamidad pública la presencia y propagación de la lepra en el país y corresponde al gobierno Nacional la obligación de impedir su propagación, reduciendo a colonias o lazaretos a los individuos atacados de ella”.

Había llegado, sin proponérmelo, a través del desarrollo histórico de la lepra en el país, a una de las raíces del autoritario poder político en Colombia.

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

En 1970, al hervidero del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Bogotá, nos llegó el libro recién publicado del etnólogo francés Robert Jaulin, *La Paz Blanca*, con su concepto de “etnocidio”, es decir, la destrucción de la cultura de un pueblo. Sustentado en un extenso y prolongado trabajo etnológico sobre el exterminio de la comunidad Barí, una de las etnias indígenas de la geografía colombiana, que hasta entonces había sido bautizada por los frailes capuchinos con el despectivo nombre de los “Motilones”. Resuena todavía el eco de aquella batalla de ideas. Discutíamos en sesiones, con más calor que luz, si la destrucción metódica de las formas de vida y del pensamiento de pueblos diferentes a los europeos para dominarlos y apoderarse de su fuerza de trabajo y sus riquezas se denominaba etnocidio, ¿cuál sería entonces el nombre para caracterizar la destrucción física de sus cuerpos?

La etnología francesa, tan avanzada por las obvias razones del colonialismo francés (África negra, Magreb, Indochina, Haití, Antillas francesas, Cayena, etc.), que con Jaulin había planteado el interesante problema teórico, daría la respuesta un poco después con otra de sus luminarias cartesianas: Pierre Clastres, quien disecó y separó formalmente los conceptos así: “Si el genocidio considera a los otros como absolutamente malos, el etnocidio considera a los otros relativamente malos y cree que puede mejorarlos, al transformarlos de manera que se parezcan al modelo propio; el etnocidio se ejerce por el bien del salvaje. Si el genocidio liquida los cuerpos, el etnocidio mata el espíritu”.

Pero, en Colombia, las cosas no transcurren como se las piensa en los libros. Los llamados Motilones o indígenas Barí, concluida la guerra de liberación contra el colonialismo español conducida por Simón Bolívar, repudiaron la centenaria

dominación espiritual y física de los frailes capuchinos y se esparcieron por sus antiguos territorios, conocidos hoy como las selvas del Catatumbo, tanto venezolano como colombiano, en donde vivieron en una aparente calma con los latifundistas hasta 1885, cuando las tierras empezaron a agotarse y se cerró el cerco sobre sus territorios selváticos ancestrales.

En 1905, el gobierno del referido dictador conservador general Rafael Reyes, otorgó al general Virgilio Barco una concesión para explotar el petróleo, la hulla y el asfalto, encontrados recientemente en el territorio Barí o Motilonia. Así mismo su gobierno dispuso el regreso de los Capuchinos a esta región, incrementándose los conflictos sociales debido a la expansión de las haciendas, la trata de indios hacia los fundos colombianos y venezolanos y, sobre todo, por las exploraciones petroleras y mineras, percibidas por los indígenas como la muerte de su territorio. A finales de la década del veinte, los Barí estaban en plena resistencia.

La Concesión Barco fue cedida por su familia a la empresa estadounidense Gulf Oil y, en 1931, el “contrato” Chau-Folson entre el gobierno colombiano y la compañía estipulaba en una de sus cláusulas que el gobierno prestaría toda la seguridad a la petrolera cuando la necesitase a través de su fuerza pública, en contra de “los salvajes que moran estas regiones”.

El gran dirigente indígena caucano, Quintín Lame, a nombre de los consejos indígenas de la época, lo denunció en una carta enviada a la “honorable cámara de representantes” y protestó ante semejante arrodillamiento en el que el gobierno colombiano se comprometía a atacar por la fuerza, con el ejército y la policía, a sus “hermanos motilonos que tienen sus labranzas en la región del Catatumbo”. Sin embargo, 20 años después, los Barí debieron ceder casi todo su territorio a las compañías petroleras y a la colonización latifundista.

Sometidos los Barí, fueron las misiones católicas, en especial las misioneras de la antioqueña Madre Laura, los capuchinos dirigidos por Adolfo Villamarín y el padre García Herreros, en concordancia con el pastor protestante Bruce Olson (tal y como lo describió en el capítulo 8^a Jaulin en su *Paz Banca*), quienes continuaron la labor “aculturativa”, hasta la extinción prácticamente de la comunidad Barí. Hoy, reducida a unas cuantas docenas de “especímenes resguardados”, quienes sobreviven, impotentes ante la presión, no solo de las compañías multinacionales petroleras sino también de las mineras agregadas y de los latifundistas colombianos

en la riquísima región llamada el Catatumbo. Los etnólogos franceses nos habían planteado el problema en todo su tamaño.

Pero el hervidero de ideas, como un coletazo tal vez tardío del mayo francés del 68, se expandía por universidades y colegios de las principales ciudades colombianas. Se había generado un gran movimiento estudiantil por la democratización y popularización de la educación superior en Colombia y la Universidad Nacional de Bogotá era su epicentro. Marchas estudiantiles, agitación social en solidaridad con los estudiantes, protestas y, ante la imposibilidad para resolver la crisis planteada por los estudiantes, vino la respuesta, temida pero esperada, por parte del gobierno de Pastrana Borrero: la toma militar de la Universidad Nacional por parte del Ejército y el cierre de la mayoría de universidades públicas del país.

Sin pensarlo dos veces, con un compañero de curso, quien hoy goza de su pensión de profesor de antropología, compramos sendos morrales en una tienda de la calle 19, donde vendían los sobrantes de la película *Quemada* que Marlon Brando filmaba en Colombia por la época. Empacamos unos cuantos chiros, cuadernos para escribir “el diario de campo”, que aprendimos hacer de nuestra profesora, Blanca Ochoa, esposa de Gerardo Molina. Y sonrientes nos dispusimos a conocer, “en terreno”, lo que quedaba de las comunidades indígenas Guahibas del río Meta y de los inmensos pajonales de Planas.

Después de un viaje de tres días seguidos, en medio de una nube de polvo rojo, que se hacía más densa cuando nos cruzábamos con las veloces camionetas de la compañía multinacional GSI, exploradora sísmica de petróleo, filial de la OXY, llegamos en un bus amarillo de la Flota Macarena al caserío (en aquel entonces) de Puerto Gaitán, a un rancho pajizo, donde debimos esperar un día más al trasbordador del Ministerio de Obras Públicas para cruzar el río Manacacías.

Una vez al otro lado, en el extenso fundo de la hacienda Santafé, propiedad de la familia Riobueno, comenzó una aventura de tres meses y medio que todavía no me explico cómo pudimos superar con vida. Navegamos por el río Meta en una barcaza transportadora de cerveza y cemento hasta Orocué. Continuamos luego en el camión repartidor de la cerveza hasta la granja experimental del gobierno en las sabanas de Carimagua, llamada Gaviotas (convertida en 1986, poco después de la quema del Palacio de Justicia, en la base militar de Marandúa por Belisario Betancur). Acompañamos después al director de la granja, Paolo

Lugari, en su campero, hasta el llamado bajo de La Culebra, para comprar un lote de 300 reses llaneras, para pastorear en la granja experimental bajo la fórmula latifundista probada de una res por cada cinco hectáreas. Finalmente, recorrimos varias semanas a caballo hasta Puerto Carreño; allí permanecimos varios días conociendo las dos orillas del río Orinoco, incluida una corta visita a Puerto Ayacucho, en el lado venezolano. Y después de tres meses de viaje, no sé cómo pudimos tomar en Puerto Carreño un avión DC3 de la flota Urraca para regresar a Bogotá.

Escribía y pintaba (no tenía más tecnología) según el método probado por los cronistas de la conquista española en el siglo XVI y presenté a Doña Blanca los dibujos con algunas explicaciones como un “trabajo de campo” que, de no haber sido destruido, debe reposar en la biblioteca de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional. Reflexionando sobre lo que acababa de ver no tuve grandes sorpresas teóricas. La realidad que se me impuso había seguido el mismo patrón sangriento impuesto desde hacía 3 décadas en toda la geografía del país. Despojo oficial de tierras y recursos naturales, entregados a compañías multinacionales con el fin de impulsar el desarrollo y ampliación del llamado mercado interior, y empujar el desarrollo capitalista del agro mediante el despojo de tierras ancestrales a las comunidades indígenas y desplazamiento de los campesinos hacia las grandes ciudades para dinamizar la economía del país sobre la base de la llamada industria de la construcción.

Estas inmensas llanuras orientales habían sido escenario de las acciones guerrilleras de Guadalupe Salcedo, entre 1951 y 1953, durante la llamada Violencia. Diez años después, en 1961, le sirvieron de refugio al alzamiento armado del médico farmacólogo, profesor de la universidad de Caldas en Manizales, Tulio Bayer. Y, veinte años más tarde, en el 71, fueron el teatro de la rebelión armada de las comunidades indígenas Guahibas de Planas, encabezada por Rafael Jaramillo Ulloa, que fue exterminada a sangre y fuego por el ejército colombiano; como lo denunció oportunamente el poeta nadaísta Gonzalo Arango, y lo dejó bien documentado para la historia el sacerdote católico Gustavo Pérez Ramírez en su libro *Planas: las contradicciones del capitalismo*.

Después, mucho después, se supo que los hermanos Riobueno, dueños del extenso fundo de Santafé, fueron asesinados por los paramilitares de Víctor Carranza llamados “carranceros” y sus tierras pasaron a otras manos. Y el desarrollo llegó efectivamente

a toda la región. Se construyeron carreteras y puentes. Puerto Gaitán, Orocué, San Pedro de Arimena y demás caseríos, se convirtieron en pequeñas ciudades con burdeles. Llegaron las cercas de alambre, partición de fundos, ganadería intensiva de cebú rojo, abonos, tractores, ensayos de cultivos industriales y narcotráfico. Las exploraciones petroleras de la GSI y la OXY se convirtieron en el actual campo petrolero de Campo Rubiales y, finalmente, no supe diferenciar en todo este proceso lo establecido con rigor cartesiano por los etnólogos franceses: si se trataba de un etnocidio o de un genocidio, o de una mezcla particularmente muy colombiana de ambos, difícil de cuadrar en el plano cartesiano.





El Davis, 1953

LA METAMORFOSIS

En una exposición fotográfica sobre La Violencia en Colombia, realizada en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá, en 1967, vi por vez primera este emblemático e inquietante retrato, colocado en medio de otras muchas fotos más explícitas de los movimientos armados de todo el país surgidos a la luz pública dos años antes. No tenía fecha ni lugar. Era simplemente como si la imagen coagulada, sin color, se explicara por sí sola. No era fácil darle aclaración.

Debió haber sido tomada en noviembre de 1953 (*circa*), por alguien desconocido. Es el campamento guerrillero llamado El Davis, en el municipio tolimense de Rioblanco, ubicado en una pequeña planicie cálida en el cañón del río Cambrín. Establecido unitariamente con el nombre de Frente Democrático, a comienzos de 1951, por las guerrillas liberales y gaitanistas de los Loaiza (a la cual pertenecía su pariente Pedro Antonio Marín), junto con las tres “columnas de marcha” (una de ellas llamada Luis Carlos Prestes) formadas por más de 300 trabajadores campesinos comunistas. Venían marchado desde las veredas de Chaparral y armados defendían sus vidas y resistían la espantosa ofensiva militar y chulavita del gobierno conservador de Laureano Gómez contra los “nueveabrileños” y gaitanistas del sur del Tolima iniciada en 1949.

Atrás, de pie y de cuerpo entero, está Isauro Yossa, el dirigente comunista indígena de Chaparral. Tiene 53 años de edad y tal como lo describe Arturo Alape en su libro *Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez-Tirofijo*, publicado en 1989:

...bajo de estatura, fornido, ojos rasgados, rostro ovalado y más bien lampiño.

Tiene una ruana delgada que cae sobre unos pantalones de dril con bota angosta, casi hasta la rodilla de su pierna derecha que sobresale un poco hacia delante en posición de descanso. Sus pies están protegidos por unos zapatos de lona gruesa y caucho. Tiene un sombrero alón de fieltro, un tanto deformado por el uso, y la mirada perdida hacia la distancia; como si estuviera recordando a sus dos maestros, ambos fundadores del Partido Comunista Colombiano: el indígena páez, José Gonzalo Sánchez, quien durante 10 años viviera en el sur del Tolima, y al maestro de escuela, Fidedigno Cuéllar, enviado por el Comité Central del Partido a la vereda de El Limón en Chaparral para que enseñara a leer y escribir a niños y adultos. Uno de ellos fue Isauro.

Parece estar pensando también en sus duras experiencias como obrero raso en el ferrocarril del Tolima o como ayudante de camión luego o su paso por el servicio militar “obligatorio”. Vendría después la larga lucha, desde 1932 hasta mediados de 1949, cuando comenzó la ofensiva chulavita en Chaparral, y su labor como cosechero o recolector de café y organizador de sindicatos agrícolas también llamados Ligas Campesinas. Debe recordar a Lister, el comandante comunista del V Regimiento en la Guerra Civil Española, de quien ha tomado el nombre con el que se dará a conocer. Y también debe tener en mente el libro *El caballero de la esperanza* del gran escritor Jorge Amado, que con tanta dificultad pudo leer con sus camaradas en el sindicato y que le ha servido de inspiración y ejemplo para bautizar a su “columna de marcha” con el nombre del dirigente comunista brasileño.

Desde el inicio del campamento de El Davis, Isauro conoce a Pedro Antonio Marín, a Jacobo Prías Alape, a Ciro Trujillo y a muchos otros guerrilleros liberales gaitanistas, y ha construido con ellos unos lazos de franca camaradería y amistad. Ha discutido e intercambiado sobre su larga experiencia, tanto política como militar, y todos han reconocido su autoridad. Su influencia y organización comunitaria fueron decisivas para que Pedro Antonio Marín, con su grupo, no hubiera

aceptado la orden de iniciar la guerra contra los “comunes” que su pariente, el viejo guerrillero liberal Gerardo Loaiza, había impartido a sus hijos y demás guerrilleros liberales que lo seguían, presionado por los gamonales cafeteros y jefes liberales del sur del Tolima y de la dirección nacional liberal y con el argumento de que los liberales son limpios y libres y los comunistas ateos, sucios, tiranos y enemigos de la democracia. Marín lo enfrentó, pistola en mano, en la reunión de la vereda La Ocasión.

—“De mi fusil no saldrá nunca una bala para matar un comunista”, le gritó, “y lo que usted dice no es de liberales. Eso mismo es lo que dice el gobierno que nos está matando a todos”. Y así se separaron para siempre.

A fines de 1951, la guerra entre liberales llamados *limpios* y comunista llamados *comunes* es ya abierta, estimulada y aprovechada soterradamente por el gobierno. La táctica militar de “la guerra dentro de la guerra” ha acabado con la fructífera experiencia unitaria del Frente Democrático, que no duró más que un año; no obstante, El Davis sobrevive gracias a la experiencia organizativa y disciplina propias de los comunistas.

Insostenible la situación a nivel nacional, en junio de 1953 el general Rojas Pinilla da el golpe militar al gobierno conservador falangista de Laureano Gómez. Ofrece indulto a todos los guerrilleros colombianos y la dirección nacional liberal saluda este acto como un gran paso para salvar las instituciones. Comienza entonces la entrega liberal de armas y hombres al gobierno militar. La lucha de los liberales limpios contra los comunes sucios recrudece en el campamento.

En Chaparral, en octubre de 1953, la dirección regional del Partido Comunista realiza con la dirección político-militar de El Davis una conferencia en la que se acuerda no entregar ni hombres ni armas y evacuar el campamento en tres comisiones. Pedro Antonio Marín ha tomado en esa reunión el nombre honorífico y simbólico del obrero y dirigente sindical Manuel Marulanda Vélez, el “otro”, torturado hasta morir reventado por los esbirros laureanistas en los espantosos calabozos del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) de Bogotá. “No sé si seré capaz de honrar ese nombre” les dice sonriendo.

Acaba de recibir un “papelito” que le han hecho llegar sus parientes liberales limpios, los Loaiza, en el que le anuncian que al otro día van a entrar a sangre y fuego con 300 guerrilleros liberales al campamento de El Davis, para fusilar

a todos los comunistas. Ahora Marulanda con ese “papelito” se ha sentado en un tronco con Isauro, Ciro y otros a discutir el qué hacer. Es el momento en que alguien no conocido toma la foto. Marulanda tiene 23 años, lleva camisa y pantalón de dril de bota angosta, tenis de lona y no se le ve arma. Porta una “cachucha” (gorra) militar con la visera hacia arriba, un tanto ladeada y calada hasta las orejas. Su cabello está peluqueado y una patilla larga y cuidada le enmarca la cara. Mira de frente y parece esperar con atención la opinión de Ciro Trujillo, quien también lleva la gorra ladeada y carga terciada en el hombro derecho una ametralladora y un revólver que con su funda tachonada con clavos metálicos sobresale por debajo de la chompa de tela.

Atrás, un guerrillero joven de claros rasgos indígenas, pensativo se apoya en una escopeta rudimentaria o de “fisto” mientras otro guerrillero delgado, de bigote y sombrero alón, mete preocupado sus manos a los bolsillos del pantalón. La vegetación y el clima, para quien conoce la franja cafetera colombiana, resulta conmovedora en el fondo claro oscuro del retrato. Después de mucho buscar, encontré finalmente esta imagen en la página 59 del libro de Luis Alberto Matta Aldana *Colombia y las FARC-EP. Origen de la lucha guerrillera. Testimonio del comandante Jaime Guaracas*, editado en el país vasco en 1999.

En aquel atardecer, Marulanda reúne a sus 30 hombres de confianza y abandona el campamento de El Davis, forzando con las armas a los guardianes de los puestos de salida, con el plan de cruzar el pontón del río Saldaña y llegar a la loma de la cordillera en el alto de la Pereza para enrumbarse al Cauca y seguir resistiendo. Un grupo pequeño cruza el río Saldaña a nado y desarma por detrás a los guardias del puente y así los demás pueden cruzar. Una vez ha llegado a la cima exclama:

—Nos salvamos. En adelante, si se dan combates no tendremos ya problemas, combatiremos en nuestro terreno.

La experiencia social y político-militar de El Davis, centro de una cadena de guerrillas y “comisiones rodadas”, y que en sus mejores días alcanzara a albergar 5.000 personas, ha quedado atrás con las ilusiones sembradas. El Davis queda bajo la dirección de Andrés Bermúdez, apodado el *Llanero*, quien había sido convencido por los liberales hasta que una comisión conjunta de liberales limpios y el ejército toma el campamento y lo fusila junto con sus hombres.

Marulanda, unido luego con Prías Alape y sus 30 hombres, marcha hacia Riochiquito, en el Cauca, transformado ya en un experimentado combatiente comunista, diferente por completo al “nueveabrileño” liberal que llegó a El Davis. Ha dejado de ser Pedro Antonio Marín para ser Manuel Marulanda Vélez. Mientras que Isauro, satisfecho con la metamorfosis que acaba de presenciar, y tal como se había acordado, dirige la marcha con los delegados de la dirección enviada por el Partido hacia Villarrica, para tomar contacto con la resistencia del Sumapaz orientada por Juan de la Cruz Varela.

Poco después, durante la guerra de Villarrica, Isauro es capturado por unidades militares y llevado al campo de concentración de Cunday donde es salvajemente torturado; pero, debido a la solidaridad nacional e internacional es trasladado a la cárcel la Picota de Bogotá donde permanece tres años. Al quedar en libertad regresa al sur del Tolima, junto a sus compañeros de lucha, y muere a los 88 años de edad, en su cama, como moriría muchos años después, su aventajado y transformado alumno, Manuel Marulanda Vélez.



LA RAÍZ FRANCESA

El 23 de abril de 1954, Jhon Foster Dulles, Secretario de Estado Norteamericano, se encontraba en París para asistir a la conferencia de Ginebra que había sido convocada con el fin de intentar resolver el asunto de la guerra en Indochina. Después de escuchar sobre la difícil situación de los defensores de la asediada base militar de Dien Bien Phu, por boca del ministro de asuntos exteriores francés, Georges Bidault, y una vez leído el telegrama enviado por el general Henry Navarre, jefe de las fuerzas francesas en Indochina, pidiendo la puesta en marcha inmediata de la "Operación Buitre", organizada un mes antes por los jefes de los estados mayores norteamericano y francés para enviar 60 bombarderos B-29 y 200 cazas norteamericanos contra los patriotas vietnamitas comandados por el legendario general Giap que asediaban dicha base, Foster Dulles le preguntó tajantemente al ministro Bidault:

—¿Y si les damos dos bombas atómicas?

Según sus propias palabras, Bidaut, tras unos segundos de estupefacción, rechazó el ofrecimiento porque pensó que si las bombas se utilizaban cerca de Dien Bien Phu serían eliminados tanto los atacantes como los defensores, y si se utilizaban sobre las rutas de suministros cerca de China, se podría correr el riesgo de una conflagración mundial. La "Operación Buitre" se suspendió pero no así el apoyo político militar norteamericano a los franceses.

Un año antes, el general Henri Navarre había tomado el mando de las fuerzas coloniales francesas en Vietnam adelantaba un plan para atraer a los guerrilleros del general Giap a una batalla abierta, en la que pensaba, que con la inmensa capacidad de fuego francesa y norteamericana podía aniquilar a los patriotas vietnamitas. Había lanzado sobre el pueblo de Dien Bien Phu, situado en un pequeño valle a 300 kilómetros al oeste de Hanoi donde los franceses tenían

una gran base defensiva, una operación aerotransportada de 15.000 paracaidistas boinas verdes, además de cañones, tanques ligeros y aviones cargados con bombas de Napalm. Pero, para sorpresa de los franceses, el ejército guerrillero del general Giap había avanzado en experiencia y sobre todo en conciencia política. Los vietnamitas, maestros en el arte del camuflaje y en los trabajos de zapa, llenaron de túneles y trincheras ocultas las colinas desde donde se dominaban las defensas francesas en el oriente de la base e instalaron 200 cañones rudimentarios de tal forma que sólo la boca salía de la tierra.

En marzo comenzaron con un bombardeo persistente, desconcertando a los colonialistas franceses, que terminó por destruir la pista de aterrizaje en el centro de Dien Bien Phu. Durante 56 días duró el asedio a la base francesa, con artillería ligera y en medio de las torrenciales lluvias monzónicas que convirtieron el campo en un barrizal. El general Giap lanzó desde las trincheras y túneles a sus tropas guerrilleras al asalto, alternativamente, bajo el intenso bombardeo francés, sobre la fortificación defensiva, en la que se llegaron a instalar 25.000 soldados franceses, vietnamitas y asesores norteamericanos. Tras caer una tras otros los bastiones satélites de la base francesa, las últimas defensas terminaron dominadas el 7 de mayo de 1954.

En la tarde del 7 de mayo, un último ataque permitió a los patriotas vietnamitas capturar todo el estado mayor de la base. El general De Castries izó finalmente la bandera blanca. Nadie pudo escapar. Los franceses habían perdido en Dien Bien Phu sus mejores unidades. En total, 16.200 hombres. Entre ellos, un general, 16 coroneles y 1.749 oficiales y suboficiales.

Durante toda la campaña de invierno-primavera de 1953-1954 se luchó encarnizadamente en todos los frentes. En los altiplanos de Tay Nguyen, los patriotas vietnamitas habían destruido enteramente el grupo móvil 100, venido de Corea, y las guerrillas en los deltas del Mekong, el río Rojo y en Binh-Tri-Thien, habían tomado una amplitud semejante a las operaciones regulares. Las pérdidas del ejército colonial francés y sus aliados en la base de Dien Bien Phu y los éxitos de la campaña de invierno-primavera de 1953-1954, obligaron al gobierno francés a aceptar la paz. El 8 de mayo de 1954, 24 horas después de la caída de Dien Bien Phu, la conferencia de Ginebra sobre Indochina se iniciaba. Y en la noche del 20 al 21 de julio se firmaron los acuerdos poniendo fin a la guerra en el norte de Vietnam.

Al día siguiente de la espectacular victoria, el brillante general Giap recibió un telegrama de felicitaciones de Ho Chi Minh que le decía: "Es en verdad una gran victoria, pero no es más que el comienzo".

Efectivamente, tras la retirada francesa, la intervención de consejeros norteamericanos, llamados técnicamente agentes de guerra especial en Vietnam, iniciada al concluir la guerra de Corea, comienza una escalada intervencionista hasta comprometer en 1965 a todo el ejército norteamericano en Indochina, con el desembarco en Vietnam del Sur de 550.000 hombres provistos de todos los medios de guerra disponibles y conocidos hasta entonces por la humanidad.

Los gigantescos bombarderos B-52 lanzaron ataques concentrados sobre Vietnam del Norte, dejando caer más bombas que todas las que se habían lanzado por ambos bandos durante la segunda guerra mundial. Sin embargo, 21 años después, el 1º de mayo de 1975, en la batalla y toma de Saigón, será el mismo vencedor de Dien Bien Phu, el legendario general Giap, el artífice de la primera derrota militar de los Estados Unidos en su historia como potencia hegemónica universal.

Como la experiencia es una gran maestra, los militares franceses también sacaron sus propias lecciones de la guerra y las denominaron con frialdad cartesiana "guerra moderna sin reglas", dejándola plasmada para la posteridad en 4 libros: El del general Charles Lecheroy, el del célebre general Paúl Aussaresses, el del coronel Marcel Bigeard y el del coronel Roger Tinquier, entre los más conocidos: *Guerra sin reglas* que unos meses más tarde, autorizados ya legalmente por el gobierno Socialista de la cuarta república francesa del presidente Guy Mollet, del ministro del interior Francois Mitterrand y del ministerio de defensa Jacques Chabas-Delmas, desarrollarán a plenitud los 40.000 soldados del ejército francés en la guerra colonial de Argelia. Esta vez contra el Frente de Liberación Nacional (FNL) Argelino, y cuya máxima expresión fue la llamada batalla de Argel de 1957, en la que se torturaron y desaparecieron 3.024 prisioneros patriotas argelinos y que sirvió como tema para la realización de la película *La batalla de Argel*, de Guillo Pontecorvo.

Se había dado un paso más en el terrorismo de Estado y la deshumanización de los torturadores. En adelante, la tortura no sería solo una fuente de información, como la usaron oficialmente los nazis, sino un arma oculta de combate.

La guerra sin reglas, llamada ya guerra sucia, hizo mermar posiblemente la actividad de los patriotas argelinos pero no logró quebrar su moral patriótica y anticolonialista y, en cambio, sí aumentó el repudio universal; lo que sumado al desgaste y fricción producidos entre los militares, por toda guerra y a la crisis internacional desatada por la invasión militar francesa y británica al canal de Suez en 1956, posibilitaron el acceso al poder del general Charles De Gaulle quien, inesperadamente, asumió una posición contraria a la de los militaristas franceses y reconoció finalmente la independencia de Argelia.

Muy conocida es la anécdota en la que el comandante francés de Argel, general Paúl Aussaresses, le dice al también general De Gaulle: "Hay que meter la mano en la mierda con tal de no dejarnos derrotar". A lo cual el presidente, también ex general, le responde: —"Todo lo contrario; hay que sacarla de allí y lavárnosla cuanto antes".

El gran historiador inglés Eric Hobsbawm, en su libro *La Historia del Siglo XX* (Editorial Critica, página 224), lo anota así:

La guerra de Argelia fue un conflicto sangriento que contribuyó a institucionalizar la tortura en el Ejército, la Policía y las Fuerzas de Seguridad de un país que se declaraba civilizado. Popularizó la utilización de la tortura mediante descargas eléctricas que se aplicaban en distintas zonas del cuerpo como la lengua, los pezones, los genitales, y provocó la caída de la cuarta república (1958) y casi de la quinta (1961), antes de que Argelia consiguiera la independencia, que el general De Gaulle había considerado inevitable hacía mucho tiempo.

Pero, la lavada de manos del general de Gaulle no significó el abandono de la tecnología adquirida: el propio ex ministro de Defensa de Charles De Gaulle entre 1959 y 1960, Pierre Messmer, debió reconocer un poco después el haber enviado a varios veteranos del conflicto en Argelia, en especial al experto general Aussaresses como agregado militar en la embajada francesa en los Estados Unidos, para instruir en la academia de Fort Bragg a oficiales del ejército norteamericano en esas prácticas, aplicadas de inmediato por el Pentágono en la Guerra de Vietnam con el nombre de plan Fénix, que ocasionó, entre 1965 y 1975, el asesinato de 20.000 civiles vietnamitas acusados de ser comunistas.

Dos ex discípulos del general Paúl Aussaresses en Fort Bragg, el general estadounidense John Jons y el coronel Carl Bernard, corroboraron todo posteriormente. Estos oficiales, quienes manifestaron posteriormente su rechazo a la tortura, detallaron cómo fueron entrenados y cómo, junto con muchos

de los oficiales norteamericanos allí instruidos, implementaron lo aprendido; especialmente en la guerra de Vietnam, como parte del mencionado plan Fénix.

El general en Argel, Paúl Aussaresses, continuó prestando sus servicios al gobierno francés en 1973 como agregado militar de la embajada de su país ante la dictadura que gobernaba el Brasil. Destacado en la base militar de Manaus donde entrenó a varios oficiales argentinos, y especialmente chilenos enviados por Manuel Contreras, el jefe de la pavorosa DINA chilena y mano derecha de Pinochet, y quien, según información aparecida el 3 de septiembre de 2003 en *Página 12*, diario de Argentina, ha reconocido su participación en la tortura y desaparición más de 500 prisioneros de la Unidad Popular de Chile durante la dictadura de Pinochet.

EL terrorismo de Estado (guerra sin reglas o sucia) bien patrocinado, hizo metástasis temprana en toda Latinoamérica. De Fort Bragg pasó a la Escuela de las Américas en Panamá y, para finales de los 60 estaba ya generalizada como una práctica corriente en todo el continente, como componente básico de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y de la guerra contrainsurgente imperial; especialmente en la guerra sucia de las dictaduras del cono sur, cuyas secuelas de oprobio no se han podido resolver aún.

En Colombia, el militarismo oligárquico descrito arriba, que durante los siglos XIX y XX ha sumido Colombia en una guerra civil interminable, fue uno de sus más entusiastas impulsores y adoptadores.

En 1960, el general Yaranborough, comandante de la misión del ejército norteamericano llegada a Bogotá para evaluar la situación política y militar del país después del cataclismo social de la violencia bipartidista que acabada de transar, la sugirió como la esencia estratégica de los escuadrones de muerte llamados paramilitares colombianos; que medio siglo después de haberse puesto en ejecución, trataron inútilmente de lavar sus creadores y patrocinadores.

Fue tal el grado de sofisticación de esta política en Colombia que, durante el gobierno del binomio Turbay-Camacho Leyva, en el marco del Estatuto de la Seguridad Nacional promulgado, se llegó a reemplazar la picana eléctrica, recomendada por los expertos franco-norteamericanos, por los mordiscos de caballos amaestrados en las caballerizas de Usaquén, en contra de aquellos catalogados, previamente, como enemigos internos

del régimen bipartidista. O la barbarie de la frase del general Plazas Vega: “ la defensa de la democracia, maestro”, cuando en el gobierno Betancur en 1985 se recuperó a sangre y fuego el Palacio de Justicia.

Al comienzo de su célebre libro sobre la guerra, el general Von Clausewitz trae un pensamiento que vale aportar en el debate sobre la no aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el histórico conflicto social y armado que se desarrolla en la actual Colombia, ya que, oficialmente y desde la Presidencia de la República, se decretó metafísicamente su inexistencia:

...Extrema aplicación de la violencia: las almas filantrópicas podrían fácilmente pensar que hay una manera artificial de desarmar o derrotar al adversario sin causar demasiadas heridas, y que esa es la verdadera tendencia del arte de la guerra. Por bien que suene esto, hay que destruir semejante error, porque en cosas tan peligrosas como la guerra aquellos errores que surgen de la bondad son justamente los peores. Dado que el uso de la violencia física en todo su alcance no excluye en modo alguno el de la inteligencia, aquel que se sirve de esa violencia sin reparar en sangre tendrá que tener ventaja si el adversario no lo hace. Con eso marca la ley para el otro, y así ambos ascienden hasta el extremo sin que haya más barrera que la correlación de fuerzas inherente...

A los casos aquí narrados, sucedidos un siglo y medio después de la muerte del general prusiano, en los que los Estados metieron la mano en la letrina para no ser derrotados, terminaron generando fuerzas inherentes opuestas que los llevaron (contrariamente a lo pensado) a la derrota no deseada. Saigón, Argel, como sur latinoamericano o Centroamérica, para mencionar solo algunos de ellos, han sido derrotas históricas anticipatorias de Abu Ghraib en Bagdad o Guantánamo, y sin lugar a duda, del paramilitarismo oficial de Colombia; no importa las tantas masacres, torturas, fusilamientos y desapariciones realizadas en más de medio siglo de actividad impune.



César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper

TRES DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES NEOLIBERALES

Mi buen amigo Omar García, a quien no había visto desde mi salida de Bogotá en el 2002, me llevó muchas nuevas al seminario de Buenos Aires, y entre ellas el libro *Derechos del capital. Dispositivos de protección e incentivos a la acumulación en Colombia*, publicado por el profesor de la Universidad Nacional, Jairo Estrada Álvarez, en junio de 2010.

Desde el primer capítulo, debe decirse, el libro de profesor Estrada Álvarez me cautivó por su análisis riguroso y la manera cómo va desentrañando el desarrollo dinámico y uniendo en categorías superiores y sintéticas los elementos esenciales, económicos y políticos, impuestos por el proyecto dominante durante los últimos treinta años de la historia de la sociedad colombiana. Los siete rasgos que él presenta en las páginas 16 a 20 de su libro, y que desarrollará minuciosamente con datos empíricos a lo largo del ensayo, sobrepasa en mucho los folletines ideologizados sobre la “dependencia imperialista”, para constituirse en una obra seria, militante y práctica. En un invaluable manifiesto de acción sobre el oscuro futuro de Colombia.

El profesor Estrada Álvarez presenta así su experiencia, que no puedo soslayar:

Primero, se presenció la crisis terminal del régimen de acumulación basado en la industrialización dirigida por el Estado, se inició la transición y, posteriormente se asistió a la consolidación del régimen de acumulación (de capital) flexible y de financiarización. En la instauración de dicho régimen, las políticas de reforma estructural del llamado Consenso de Washington, inspiradas en la teoría e ideología del neoliberalismo, han ocupado un lugar central. El nuevo régimen ha venido produciendo una nueva espacialidad capitalista y una transformación del paisaje social, sustentado en el despliegue de nuevas y múltiples formas de acumulación y en la activación inusitada de la violencia capitalista. Su rasgo esencial ha sido la acumulación por desposesión.

Segundo, se han acentuado las formas depredadoras de la reproducción capitalista, afectando en forma creciente las condiciones generales socio-ambientales de la reproducción de la formación socioeconómica. El capitalismo neoliberal ha impuesto su desenfrenado afán de lucro y sus demandas por una mayor rentabilidad capitalista a través de una relación destructiva con la naturaleza y con el conjunto de relaciones sociales constituidas en torno a ella. Estas configuraciones depredadoras se han acentuado durante el último periodo si se consideran las tendencias recientes de la acumulación capitalista en minería, hidrocarburos, agro combustibles, megaproyectos infraestructurales y en general, el alistamiento del territorio nacional para este propósito.

Tercero, se concurrió a la crisis del régimen político de “democracia restringida del Frente Nacional” y a una reconducción del proyecto hegemónico con base en el diseño institucional a través del proceso constituyente de 1991 de un régimen de “democracia participativa sellado sobre los acuerdos de paz y desmovilización de sectores derrotados de la guerrilla y el exterminio de la oposición política y social, y el tratamiento pendular —entre dialogo y confrontación abierta— al conflicto social armado. Durante la última década se ha asistido a la consolidación de un régimen autoritario en la forma de un Estado Policivo, expresivo de una militarización generalizada e incremental del proyecto peggemónico. Todo ello acompañado de la entronización de configuraciones criminales y mafiosas en la estructuración del régimen político.

Cuarto, se ha asistido al desarrollo de nuevas formas de inserción de la formación socioeconómica en el capitalismo transnacional que acentúan la relación de dependencia económica, política, militar y sociocultural frente al imperialismo. Tales formas se sustentan en la imposición, por parte del bloque dominante de poder, de una política de abandono total del principio de soberanía, que propicia y estimula procesos de transnacionalización y desnacionalización por diversas vías y mediante variados mecanismos. La expresión extrema de tal política se encuentra por un lado, en la producción de gradual y no concluida de un régimen jurídico económico que bien puede definirse como “orden de los derechos del capital transnacional”. Y por otro, en la disposición del territorio nacional para la estrategia de control, injerencia y eventual directa del imperialismo estadounidense en Latinoamérica mediante la instalación de bases militares estadounidenses.

Quinto, se ha acudido a la imposición de una lógica sociocultural basada en valores genuinamente capitalistas, que se han incorporado en las prácticas cotidianas y en las subjetividades: egoísmo, competencia, productivismo, meritocracia, han devenido en principios “éticos” de la nueva clase capitalista, que se unen a las tradicionales del clientelismo y la corrupción y a las nuevas generadas por la “cultura del narcotráfico”, todas ellas reproducidas ahora socialmente. El proyecto hegemónico descansa sobre la pretensión de quebrar toda expresión de cooperación y solidaridad. También sobre el ensanchamiento de una suerte de “fascismo social” expresivo precisamente en la militarización generalizada de la estrategia política-económica y sociocultural en curso y del desarrollo de nuevas formas de control social.

Sexto, se ha producido un cambio en el balance de poder de clase. El bloque dominante, que también ha sufrido modificaciones en su conformación y en la correlación interna de sus fuerzas ha logrado consolidar y afianzar su proyecto, conjugando el ejercicio de la democracia procedimental y de la legalidad burguesa con el consentimiento y promoción de la “para institucionalidad y de la violencia paramilitar”. El producto histórico de esa conjugación ha sido la desestructuración de la clase obrera, del movimiento social y popular, así como de las diversas expresiones organizativas políticas y sociales. Así mismo la fragmentación de la resistencia y la desarticulación en la difícil construcción de alternativas políticas. Pese a que se ha logrado una relativa cohesión en el bloque de poder, la posibilidad de un proyecto hegemónico y de dominación de largo plazo no parece

suficientemente estable. Sus flancos débiles se encuentran en la persistencia del conflicto social armado, en los reiterados y valientes esfuerzos de reconstrucción de la resistencia y en la alternativa, y en la fragilidad implícita de un proyecto que combina el discurso democrático con la ilegalidad y el crimen.

Séptimo, las transformaciones capitalistas de las últimas décadas han traído como consecuencia un cambio en la naturaleza del conflicto social y armado. Contrario a estudios especializados u opiniones de analistas que concentran sus miradas en una perspectiva meramente militar o en expresiones de deseo y que son concluyentes en la no historicidad y obsolescencia de ese conflicto; puede afirmarse que las dinámicas de la acumulación capitalista, especialmente su lógica territorial, así como las preocupaciones de un proyecto de hegemonía imperialista en América Latina de largo plazo, han determinado —sin proponérselo— modificando y reasignando los alcances de esa expresión de lucha. De una cierta marginalidad en la fase capitalista anterior, la cuestión armada se encuentra en la actualidad en el corazón de las nuevas conflictividades. Trasciende el espacio local y adquiere dimensiones transnacionales.

Todas estas transformaciones, vistas en su conjunto, se han acompañado de la puesta en escena de lo que bien pudiera considerarse como la gran transformación de las últimas dos décadas: una profunda reorganización de las relaciones de propiedad. Durante este periodo se desató un nuevo ciclo de concentración y centralización de la riqueza y de la propiedad, se acentuó la naturaleza capitalista privada y transnacional al tiempo que se produjo la más grande expropiación de nuestra historia. A los trabajadores se les despojó de gran parte de su ingreso, a los campesinos, a los indígenas, y los negros de la tierra y del territorio y a la sociedad en su conjunto de bienes públicos y comunales. El capitalismo se ha exhibido en forma descarnada, violenta, tal y como es, chorreando sangre, depredador y profundamente inhumano...La historia reciente del país se condensa en una santísima trinidad expresiva de un único proceso: “acumulación por desposesión, nueva espacialidad capitalista y neo liberalización...”.

VAUPÉS

Cuando en 1966 se organiza en la Universidad Nacional de Bogotá el Departamento de Antropología, esta palabra agrupaba disciplinas diversas como la arqueología, la etnología, la antropología física, médica y forense y la llamada antropología social y de la familia, que irrumpían con fuerza. En Colombia era escasa la tradición en estas disciplinas y los profesores llamados a conformar el núcleo de estudios universitarios habían sido formados la mayoría en el Instituto Etnológico fundado por el etnólogo francés Paúl Rivet en 1942.

La improvisación era la regla, agravada por la carencia de financiación oficial o privada. La expansión del mercado interno, la colonización de territorios baldíos y la llamada “integración nacional”, estaban obligando a mirar hacia la selva y sus pobladores colonos, y hacia las comunidades indígenas y afro colombianas abandonadas tradicionalmente por el Estado. Y la curia católica, tan celosa de sus prerrogativas administrativas y educativas obtenidas en el concordato del siglo XIX, aprovechando el hervor social, se empeñaba en promover la expulsión de sus “territorios nacionales” de la agencia evangelizadora protestante, Instituto Lingüístico de Verano (ILV) patrocinada por el gobierno estadounidense y traída una década antes por el Presidente Lleras Camargo para que aparentemente realizara estudios lingüísticos científicos de los idiomas indígenas selváticos hasta aquel entonces desconocidos prácticamente.

En 1971 concluí los 4 años de estudios de antropología y debí realizar la tesis de grado. Escogí la comisaría del Vaupés, que en aquel entonces incluía los actuales departamentos de Guaviare y Vaupés. Viajé a tan alejados territorios selváticos sin ayuda oficial o universitaria, y en ellos viví otra experiencia personal abrumadora, escrita después como monografía para presentar en la universidad como tesis de grado. Poco después,

mi amigo Arturo Alape consideró esa monografía como publicable y la editó con el título de *Monopolios, Misioneros y destrucción de Indígenas*, en la Editorial Armadillo.

Al combinar mis conocimientos de medicina con la metodología antropológica de “campo” que acababa de aprender, logré realmente que los indígenas de esta región, Tukanos, Wananos, Sirianos y Piratapuyos, me llevaran a sitios insospechados y hasta entonces desconocidos o tal vez vedados a otros ojos. La realidad era que al ciclo de la esclavitud y exterminio indígena venido desde los siglos XVIII y XIX, exacerbado por la fiebre del caucho y de la cual participó en sus inicios el general Rafael Reyes con sus hermanos, y que fue descrita literariamente en *La Vorágine* por José Eustasio Rivera o en *Toá*, por el médico Uribe Piedrahita, seguía igual o peor. Ahora, a todo esto se le sobreimponía la explotación y dominación religiosa (católica y protestante en pugna). El otro ciclo siniestro, el de la coca, impuesto desde las grandes ciudades del interior a fines de los setenta, no se conocía aún.

Guardo dos recuerdos imborrables de todo lo vivido en aquél año: la fiesta del Yuruparí a la que asistí a mi llegada a Yavareté, y la visita a la hacienda de Tiobarbas, al lado del bramido ensordecedor de las cataratas del río Vaupés, en Yuruparí.

Recuerdo aún la impresión al llegar a la pista de aterrizaje abandonada que la Rubber Corporation había establecido en 1942, cerca del trueno de aquella gigantesca cascada. Era (al momento de mi arribo) un baldío selvático o finca sin límites de quien fuera el chofer particular del embajador de los Estados Unidos en Bogotá y se hacía llamar por los indígenas, a quienes esclavizaba, como “Tiobarbas” simplemente. Hundida su cabeza entre un sombrero descolorido y sudado, del que sobresalía una mirada oscura y penetrante. Fumaba cunchos de café en una pipa de barro y, acariciando su rala barba, me dijo con un acento boyacense inconfundible después de conocer mi procedencia y trabajo:

—Doctor, camine, le muestro otra maravilla.

Caminamos por un difícil y tortuoso sendero hasta llegar a la explanada de lo que había sido el aterrizadero de la Rubber. Era un inmenso plantío de palma aceitera. Le pregunté cómo sacaba los frutos al mercado si no había transporte por tierra o aire y me respondió:

—No necesito sacarlos.— Respodió mientras señalaba una gran piara de cerdos domésticos, peludos y negruzcos, regresados a un estado semisalvaje, que subidos por los cortos troncos de las palmas, devoraban, sin descansar, las bellotas aceiteras de la plantación.

—Una vez están gordos, los indios los cazan. Salamos la carne y hacemos cecina, y con el tocino hacemos manteca. Eso sí que tiene mercado. Aquí llega todo el mundo a comprar.— Dijo, carcajeándose.

Nunca hubiera podido imaginar que esas bellotas aceiteras afanosamente buscadas por los cerdos trepadores de Tiobarbas llegaran a constituir para el capitalismo desarrollado, 40 años después, una de las fuentes de energía alterna al petróleo; y que, en Colombia, se trasformara en un megaproyecto para convertir gran parte de aquellas exuberantes y hermosas selvas en un árido y espantoso desierto verde de palma africana; en el que seguramente podrán sobrevivir solo, sin esclavitud, aquellos cerdos semisalvajes, trepadores, desarrollados por Tiobarbas.

Repaso también con nitidez aquella mañana brumosa de 1971 cuando inicié el viaje a las selvas del Vaupés. Soplaba una brisa fría en el aeropuerto de Bogotá cuando caminaba hacia el vetusto y destartado avión DC-3, construido en Chicago como bombardero, durante la Segunda Guerra Mundial, y convertido ahora en un carguero anacrónico y oxidado.

Los viajeros éramos cuatro: el piloto y el copiloto, el ayudante, un hombre de mediana edad con marcados rasgos de indígena, y yo. El piloto me indicó a señas el sitio que debía ocupar, frente al ayudante, sobre unos bidones llenos con gasolina que constituían la carga. Anudó luego con un lazo la portezuela del avión y el motor retumbó a continuación expulsando densas nubes blancas. Las hélices describieron un círculo transparente y un crujido móvil inició el viaje.

Recuerdo haber pensado que aquello era como una bomba aérea, mientras por la claraboya empezaron a desfilar los grandes edificios del centro de la ciudad y luego las casas rojizas. Los automóviles se fueron tornando puntos movedizos y las colinas erosionadas que bordean la gran ciudad bogotana por el oriente se convirtieron en profundas gargantas y vertientes montañosas surcadas por arroyos de aguas espumosas y veloces. Pasado un tiempo, la trepidación monótona e interminable del motor y el olor penetrante de la gasolina de los bidones, hicieron

pesados mis parpados y sensibles a ensoñaciones. Abajo, un tapete de árboles selváticos, inmenso y sin fin, cortado por innumerables corrientes de aguas barrosas, orilladas por playones amarillentos que confluían en un inmenso río sobre cuyo curso el avión empezó a sobrevolar.

El sacudón de llantas del avión sobre la tierra rojiza y fangosa de un claro selvático habilitado como aeropuerto, a un extremo del poblado indígena de Yavaraté, aligeró mis parpados, y el verde brillante e intenso de la fronda selvática que copaba la ventanilla del avión golpeó con su luminosidad mis ojos.

Un grupo de jóvenes indígenas vestidos con pantalonetas nos saludaron y de inmediato comenzaron a descargar las canecas del combustible y los demás bultos. Era el avión que la Prefectura Apostólica del Vaupés enviaba con provisiones cada mes, principalmente gasolina para los motores fuera de borda de las embarcaciones oficiales, y que toda la aldea esperaba con impaciencia durante una semana.

La aldea, llamada en idioma indígena tucano Yaí-Vi (maloca del jaguar) o Yavaraté, estaba situada en un barranco rojizo cortado a tajo en la orilla del gran río Vaupés, cerca de la desembocadura del río Papurí. En aquellos años, una decena de casas hechas con gruesos troncos y grandes techos de hojas de palma seca conformaban un callejón polvoriento que terminaba en un rústico atracadero de madera, en el que permanecían amarradas varias canoas musgosas que resistían con rítmico vaivén el embate eterno del espumoso torrente fluvial. La luz solar se filtraba por entre la fronda de los árboles que rodeaban el aterrizadero, dándole una tonalidad verde nubosa y un vaho cálido y pegajoso que salía del suelo oloroso a agua oxigenada que me reemplazó bruscamente el recuerdo del aire irrespirable a gasolina de la gran ciudad.

La expectativa y cautela de los indígenas ante nuestra llegada fue cediendo a medida que el jefe familiar del poblado, o quien en aquel momento hacía las veces de autoridad en la aldea, nos presentó en un castellano —sonoro a portugués— ante las demás cabezas de familia. Y añadió luego:

—Ustedes me llaman Manuel pero mi verdadero nombre es Mandú-Yaí, que quiere decir Hijo-Tigre.

Y a continuación solicitó que explicáramos nuestra identidad y procedencia. Finalmente, para regocijo de todos, dijo que en la noche el poblado haría la celebración de bienvenida que venían preparando desde hacía varios días.

Aquella noche, cuando la luna iniciaba su brillo por entre las nubes rojizas del atardecer, Mandú-Yaí vino a la casa en la que tendidos en unas hamacas descansábamos los recién llegados, y nos condujo a la maloca de las ceremonias. Era más amplia que las demás y estaba barrida y desocupada. Un grupo de hombres pintaban sus cuerpos con dibujos cuadrados rojos y negros, en la entrada principal. Utilizaban pigmentos preparados con una pasta de colores de achote y cenizas. A un lado, las mujeres se pintaban también el cuerpo y la cara, pero con figuras redondas.

Una vez dentro de la maloca ceremonial, Mandú-Yaí sacó de entre un canasto de fibras varios adornos con plumas rojas y amarillas de guacamaya, atadas a una banda tejida que servía de corona y se la colocó en la cabeza. Extrajo luego varias flautas de caña y las entregó a los jefes de cada familia. Se amarró en los tobillos unas cintas con cascabeles de nueces y se colgó un collar con protuberantes colmillos de jaguar. Invitó enseguida a los demás asistentes a vestir sus adornos.

Cuando todos estuvieron tatuados y ataviados, a la luz de una pequeña antorcha de luz rojiza hecha de la corteza de un árbol llamado turí, avanzó hacia el centro de la habitación con una vara delgada que terminaba en un sonajero y la manoteó fuerte haciéndola chasquear. Con pasos cortos fue hacia el rincón opuesto de la maloca y descolgó una vasija de barro que pendía de una de las vigas y que contenía un líquido lechoso amarillento llamado *yagé*. La tomó y fue a cada uno de los costados de la maloca y en ellos hizo una corta recitación. Ofreció enseguida a cada asistente una pequeña totuma con una porción del alucinante licor.

El ambiente de la maloca ceremonial se fue impregnando lentamente con el olor intenso del humo de tabaco silvestre que los hombres fumaban y del sonido triste de las flautas de caña o zampoñas que empezaron a sonar. Las mujeres esperaban a que se iniciara la danza ritual, acurrucadas en el lado opuesto de la casa. Y, cuando la luna estuvo a la altura de los ojos, Mandú Yaí volvió a aparecer con una mortecina luz rojiza salida de una pequeña antorcha de cáscara de turí en una mano y, en la otra, un extraño cuerno como de dos metros de largo, elaborado con madera y arcilla llamado Yuruparí. Emitió un ronco y cascado bramido que produjo un silencio total, seguido de una larga y gangosa recitación y del ofrecimiento a cada hombre de una nueva toma de *yagé*.

La danza era un caminar continuo de hombres y mujeres descalzos alrededor de la maloca, pateando con fuerza a cada paso la tierra y produciendo un ruido mezcla del sonido cascado de los cascabeles atados a los pies con las exhalaciones roncadas y profundas de los danzantes. La monotonía se apoderó pronto del recinto. La ruidosa danza sin pausa, las exhalaciones y quejidos, el humo espeso del tabaco silvestre, los tonos graves de las flautas de zampona, la toma de *yagé* y las recitaciones gongosas, empezaron a perturbar mis sentidos.

Hacía un calor selvático y en un instante, un sudor frío recorrió mi frente. El tun-tun externo me indujo una sensación de vértigo y náusea. El ruido monótono de la maloca se convirtió en el quemante retumbo de un fuerte aguacero tropical, y un destello de gotas candentes y mi visión fue ocupada por pequeñas luces como de fuegos artificiales o luciérnagas que aumentaban y disminuían de tamaño. Pensé que estaba entrando en un calidoscopio gigantesco y sin salida, y el vértigo aumentó la náusea y el torbellino de la embriaguez. El tiempo y el espacio empezaron confundirse en el torrente rojo de un inmenso río tropical sin desembocadura ni final. Fue entonces cuando escuché a Mandú-Yaí cerca, balbuceándome algo sobre el color rojo de la antorcha de turí:

—Todo es sangre, ¿cierto?—, me dijo.

Cuarenta años después, no sé por qué razón, sigo pensando que Mandú-Yaí se refería al destino de Colombia.



General del Ejército Carlos Cortés Vargas

LA RAÍZ DEL BANANO

La planta del banano o *mussa sapientium*, no posee raíces profundas; por ello, cualquier viento fuerte la derriba. Pero, en periodos de calma produce un exquisito fruto llamado sugestivamente banana paradisíaca. En cambio, la historia de sangre, sudor y lágrimas, de su explotación, sí tiene raíces profundas en nuestra América.

La banana, como fruta de consumo masivo, era prácticamente desconocida en Estados Unidos antes de 1870. No obstante, 30 años más tarde, la población estadounidense consumía ya más de 18 millones de racimos.

En 1781, Minor Keith, empresario norteamericano casado con la hija del presidente de Costa Rica, inicia en este país la construcción del ferrocarril del Atlántico. Mientras Keith construía el ferrocarril a Puerto Limón, ejecutaba también un mega proyecto paralelo: la compra de extensos latifundios para el cultivo masivo de bananos en una zona franca o enclave norteamericano. Las inmensas plataneras cultivadas sobre latifundios costarricenses, abonadas con sangre, sudor y lágrimas de sus hijos, crecieron y fructificaron; y con el ferrocarril terminado se hizo posible transportar masivamente

los plátanos al puerto y a los mercados de Estados Unidos y luego a Europa. Diez años más tarde, Keith poseía tres compañías bananeras. Un poco después se asoció con el marinero Lorenzo Baker y el financista de Boston Andrew Preston, para fundar la Boston Fruit Company.

En 1899, la Boston Fruit Company y la United Fruit Company (la Frutera), se fusionaron conformando la compañía bananera más grande en el mundo, dueña de grandes zonas bananeras en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Colombia, Cuba, Panamá, Ecuador, Jamaica, y Santo Domingo. Poseía once barcos a vapor conocidos como la Great White Fleet, más otros 30 buques subarrendados. La Frutera poseía ya, asimismo, más de 300 kilómetros de ferrocarril propio que vinculaban sus enclaves bananeros con los puertos de exportación.

El dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera otorgó en 1901, a la Frutera, el derecho exclusivo para transportar el correo entre Guatemala y Estados Unidos. Pero, entre tanto, el empresario Keith creó la compañía guatemalteca de ferrocarril como una empresa filial de la Frutera y capitalizó en su país cerca de 40 millones de dólares de la época para contratar con Estrada la construcción de un ferrocarril y una línea de telégrafos entre la ciudad de Guatemala y Puerto Barrios, donde adquirió a precio nominal el muelle del puerto.

Así, míster Keith, sonriente, pudo decir:

—Guatemala tiene un clima ideal para las inversiones.

La Frutera amplió sus inversiones económicas en casi todos los países de Centroamérica y algunos del Caribe y Suramérica. Pero, Guatemala, donde se generaba más del 25% del total de la producción de la compañía, constituyó el centro de operaciones. Allí, convertida en el más grande latifundista guatemalteco, obtuvo el monopolio de todos los medios de transporte y comunicaciones, cobrando un arancel sobre cada artículo de flete, dentro y fuera del país, a través de Puerto Barrios. Y durante muchos años, los tradicionales cultivadores de café de Guatemala y Centroamérica debieron pagar a la Frutera tarifas muy altas para mantener el precio de su café en el mercado mundial. Esta compañía llegó al extremo de auto eximirse de pagar cualquier impuesto al Estado de Guatemala durante 99 años. Su monopolio real alcanzó prácticamente casi toda la vida económica y social de Guatemala. Esta vez, no sonriente sino despectivamente, míster Keith dijo:

—Guatemala es una Banana Republic.

Desde su centro privilegiado en Guatemala, la United Fruit Company, continuó por largos años su actividad monopólica, corrompiendo gobiernos y políticos, no solo en Guatemala sino en el vecindario latinoamericano, contando para ello con el apoyo incondicional de los sucesivos dictadores guatemaltecos; el más conocido por haber sido materia literaria de Miguel Ángel Asturias, fue el Presidente Jorge Ubico.

Los guatemaltecos derrocaron a Jorge Ubico en 1944 y tuvieron sus primeras elecciones en la historia; resultando elegido Juan José Arévalo, un educador de tendencias progresistas que trató de realizar una reforma a la escandalosa tenencia de la tierra. En 1950, para sucederlo, es elegido Jacobo Arbenz, quien profundiza el proceso de reforma agraria. La Frutera, al ver amenazados sus grandes intereses latifundistas, recurrió a uno de sus prestigiosos abogados, John Foster Dulles, que para ese momento era el director de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Lo que vino a continuación es ampliamente conocido. El Gobierno del general Eisenhower declaró a Arbenz comunista y, en 1954, con una ejemplar y sangrienta invasión de Marines, lo derrocó para colocar en su lugar a Castillo Armas, que puso nuevamente todo el país bajo los intereses de la Frutera.

A Colombia, lugar ideal para este tipo de inversiones agrícolas exportables, la Frutera había llegado a finales del siglo XIX. En 1881 absorbió la Colombian Land Company, dueña del ferrocarril de Santa Marta, y estableció en la región un enclave productivo típico con sus características de sobre-explotación, el que estaba ya en plena producción demostrativa en 1915, gestando una transformación profunda en las relaciones de trabajo y un ambiente de intensa y permanente agitación laboral que hizo explosión en la huelga de 1928, durante el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez.

El inolvidable gerente de la frutera, míster Thomas Bradshaw, solicita directamente al presidente Abadía el reestablecimiento del orden público alterado. Éste envía al general del ejército Carlos Cortés Vargas quien, sin dudarle mucho, ordena abrir fuego contra los huelguistas reunidos con sus familias en una demostración. Se había producido militarmente una gran matanza y habrían fusilado oficialmente, según García Márquez, más de 3.000 obreros. Registrada para la historia como la masacre de 1928 en la zona bananera de Santa Marta. Las condiciones sociales y políticas del gobierno arrodillado de Abadía, como lo demostró Jorge Eliécer Gaitán en sus debates, eran muy otras a las de Guatemala de Arbenz y por eso no

hubo necesidad de enviar Marines. El ejército colombiano, reestructurado por misiones militares europeas durante el gobierno del general Rafael Reyes, tenía la tecnología para ejecutar la acción y así procedió.

Como la acumulación de capital es imposible de detener, la Frutera diversifica negocios y amplia inversiones, apareciendo en Latinoamérica otros grandes cultivos aledaños a las plataneras, como el de piña y palma aceitera. Y dado que es muy grande el desprestigio sufrido por la empresa debido a tanta denuncia que ha desnudado completamente su cobertura y sus procedimientos, cambia entonces de ropaje para limpiar su nombre de sangre obrera y se convierte en United Brands. Absorbida en 1970 por la Corporación del Monte, se llamará ahora Chiquita Brands y podrá así reeditar sus viejas e impunes hazañas.

Para aquella época las inversiones en Colombia se dirigían a otra zona costera ideal para el cultivo extenso del banano y de los otros frutales aledaños. Había surgido la zona bananera de Urabá, con excelentes ventajas comparativas: selva extensa, palma aceitera, grandes ríos, fronteras no controladas, puertos profundos, golfo de Urabá, mano de obra barata, plantaciones de coca, colonización acelerada con latifundios fértiles y fáciles. Gremios empresariales bien organizados y activos, bananeros en Augura, ganaderos en Fedegan, agricultores en la SAC, palmicultores en Fedepalma y la perspectiva de un canal transoceánico por el Chocó. Hacía falta solo el control político-militar y su integración al mercado nacional en expansión.

Un poco más tarde empiezan a circular, en panfletos clandestinos editados en la brigada militar de Carepa, noticias anunciando el plan retorno a Urabá. Las fichas del rompecabezas se ubican lentamente: José Manuel Arias Carrizosa, aquel abogado liberal de Bucaramanga mencionado arriba por su acuerdo con Serpa Uribe, tan ligado a la promulgación del estatuto militar de la seguridad nacional del gobierno Turbay Ayala, es ahora el gerente del gremio bananero Augura, con sede en Urabá. Rito Alejo del Río, famoso por colaborar con masacres, coordinando incluso el transporte aéreo desde Urabá del grupo de paramilitares que perpetró la masacre de Mapiripán, en los llanos orientales de Colombia, es ascendido a general de la república y asignado a la brigada militar de Urabá, y Carlos Castaño, apoyado desde esta guarnición y financiado ampliamente por la Frutera, inicia su impune recorrido genocida para poner toda la región bajo su control.

Simultáneamente, Álvaro Uribe Vélez, un joven y pequeño político liberal, ganadero de la región de Urabá, quien había iniciado su carrera en 1980 como director de Aerocivil en el gobierno de Turbay Ayala, llega a la gobernación de Antioquia tras una campaña financiada (según los libros de esa campaña) con dineros de la Chiquita Brand.

Lo que vino posteriormente con la ejecución plena del plan retorno a Urabá, es lo mostrado discretamente por los medios de comunicación norteamericanos dentro del llamado escándalo de la Chiquita Brand, con sus verdades clasificadas y ocultas en la Corte Judicial de los Estados Unidos en la que se adelanta el juicio, pues los directos ejecutores del plan, muchos de ellos extraditados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, están en cárceles norteamericanas con la intención de evitar que rindan cuentas ante la justicia colombiana.

Sin embargo, el dolor del pavoroso genocidio total de la Unión Patriótica y de los comunistas, en esa zona geoestratégica, permanece en la memoria popular. Lo mismo que la cooptación del sindicato bananero y el exterminio físico de sus mejores cuadros sindicales. El dominio paramilitar de la región y su salto definitivo a la captura total del Estado con la elección presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, garantiza la continuación de la guerra sucia sin conclusión. Todo esto se traducirá en ganancias inusitadas en Medellín y Washington y megaproyectos estratégicos en marcha imparables (bananero-biocombustibles-canal chocoano-carretera-Puebla-Quibdó, etc.).

El costarricense Luis Carlos Fallas, como testigo presencial, nos dejó en su obra *Mamita Yunai* una relación literaria de la huelga de los trabajadores bananeros en 1934. Pablo Neruda, en su inmortal *Canto General*, recrea la explotación, la sangre y el lodo que ha costado la extraña afición de los hombres del Norte por el banano. Miguel Ángel Asturias escribe la ficción real del *Papa Verde*. García Márquez recordará en *La hojarasca* y en *Cien años de soledad* la espantosa masacre perpetrada en 1928 por el Ejército colombiano en la plaza principal de Ciénaga, Magdalena. *La casa grande*, de Álvaro Cepeda Samudio, será un testimonio insuperable de aquella orden criminal impartida por el general Cortés Vargas. Y el verbo enardecido de la denuncia en el Congreso de Jorge Eliécer Gaitán espoleará la conciencia de los indiferentes. Estas obras perdurarán como recreaciones nítidas del fatídico suceso.



MANIZALES DEL ALMA

Con un puesto como profesor de antropología que Jaime Quijano Caballero, rector la universidad INCCA de Bogotá, me dio al regreso del Vaupés, pude estabilizar mi hogar y atender a mi hija recién nacida. Dos años tratando de convencer a unos jóvenes de clase media, preocupados en autofinanciar sus carreras técnicas y no en problemas sociales colombianos, constituyeron un reto. Fue cuando de secretaria de la Universidad de Caldas en Manizales me anunció que mi solicitud para continuar los estudios de medicina iniciados en España había sido aceptada. Me dispuse entonces, con mi pequeña familia, ampliada ahora con mi hijo, mi hija y su indulgente y abnegada madre, a viajar a aquella ciudad.

Cuando llegué, en 1974, la ciudad me pareció telúrica. Al mirar hacia arriba, impactaba la reluciente cumbre helada del volcán apagado del Ruiz y, hacia abajo, la mirada se fugaba hacia el infinito con las ondulaciones montañosas, cada vez más azules, que atraviesan el río Cauca, hasta desaparecer en la maravillosa tonalidad terracota del sol de los venados, al caer en el mar Pacífico.

Había leído el libro de José Fernando Ocampo sobre la renta estratificada del suelo, producida por aquellos exóticos faldones montañosos, convertidos en un pujante centro comercial por la tenacidad dominante de los latifundistas exportadores cafeteros, y sabía del severo control que la curia católica ejercía sin contemplaciones sobre sus 300 mil habitantes, mediante impresos parroquiales diarios, iglesias, conventos, órdenes religiosas, escuelas, colegios y universidades.

De repente, su geología afloró en el ambiente social. Un cambio había ocurrido en la rectoría de la universidad estatal y un médico rico y librepensador, seguidor de Freud,

inducía ahora tímidas reformas en los claustros. Mientras tanto, el comandante del batallón de la ciudad, general Faruk Yanine, y el arzobispo, reunidos con los cafeteros, maniobran intensamente para sacarlo de la Rectoría y poner en su lugar a alguien del gremio cafetero, conservador, represor y piadoso.

Se iniciaban así grandes y combativas demostraciones de masas estudiantiles y profesoriales, apoyadas por trabajadores y clases medias en favor de continuar y ampliar las reformas, y que sonaban como un eco tardío de las luchas de la década anterior por la democratización real del país desarrolladas por obreros, artesanos, campesinos, estudiantes y otras clases medias. Se discutía con ardor en toda la constelación ideológica llamada izquierda. Desde los restos de la Juventud del Movimiento Revolucionaria Liberal (MRL) del presidente de aquel momento, Alfonso López Michelsen y los “nadaístas” del luego vicepresidente Humberto de la Calle, hasta marxistas - leninistas - pensamiento Mao Tse Tung - línea Enver Hoxa - tendencia proletaria no-revisionista del sindicato de Tejidos Única. Recordaba la trágico-cómica versión peruana relatada por Vargas Llosa. En Manizales, contrariamente a lo que él dice, la realidad superó la ficción, sin que hasta el momento nadie lo haya escrito.

El conflicto ideológico chino-ruso marcaba las pequeñas discusiones locales, mientras dejaba heridas internacionales profundas. Los admiradores de los rusos hacían malabares para defender con cualquier argumento las invasiones armadas, en tanto los *dazibaos*, o carteles manuscritos usados en la Revolución Cultural China, con todo tipo de injurias que las condenaban, empapelaban los desteñidos muros de la universidad; y los auto nombrados trotskistas, comandados por su representante, el estudiante de veterinaria llamado “Plasta”, se desgañitaban atacando a todos los demás al grito de que “esto era una caricatura de revolución, porque no se había declarado socialista”. Resultó muy fácil cambiar de rector e iniciar la recuperación institucional y la revancha sangrienta contra los llamados perturbadores del beatífico orden público de Manizales.

En aquel magma hirviente de masas democráticas conocí personas realmente valiosas, que poco después morirían ejecutadas por el Estado en la operación Baile Rojo que exterminó 5.000 cuadros políticos de la Unión Patriótica (UP). Uno de ellos, el joven estudiante de derecho Bernardo Jaramillo Ossa quien, en su naciente liderazgo contagioso

de alegría, nunca se cansó de hacer llamados públicos a la cordura; su conducción democrática y comprometida con los trabajadores fue abortada en marzo de 1990, cuando fue ejecutado por el Estado.

Otro, Avelino Castro, el indefinible secretario regional del Partido Comunista, desaparecido poco después de la ruptura del proceso de paz del Caguán. El paciente y leal presidente de la Federación de Trabajadores de Caldas, Rubén Castaño, asesinado por sicarios del batallón de Manizales en noviembre de 1985; su hijo, Luis Carlos, en 1988, y el humilde indígena Virginio Guapacha, destacado por los resguardos de Cañamomo y Lomapieta de Riosucio para fundar el sindicato agrario de Fensuagro, muerto luego en un extraño accidente cuando viajaba para su rancho.

Recuerdo también, como contradictor irreconciliable en las asambleas conjuntas que se realizaban, al profesor Jorge Enrique Robledo. Su cabello era negro aún y su chaqueta de paño roja a cuadros negros era inconfundible. Defendía entre tanta estridencia y caos, con estudiados argumentos y sinceridad, los puntos de vista esbozado por su partido MOIR para las transformaciones revolucionarias en Colombia. Como uno de sus contradictores decía, resaltando su firme consecuencia: “con él sabía uno a qué atenerse.”

Fueron cuatro años de una inmensa zozobra. Era el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen, caracterizado por el MOIR de Robledo como el “mandato de hambre, demagogia y represión”. Fue un periodo de persistente movilización social, con la realización de los llamados Paros Cívicos, cuyo culmen fue el paro de 1977, aplastado con ferocidad en Bogotá y las grandes ciudades colombianas.

En respuesta a la movilización social se había puesto en marcha la primera etapa del plan de exterminio militar impune contra la oposición marxista, en especial los comunistas de la amplia región del Magdalena Medio, Cimitarra. Barrancabermeja, Yacopí, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Puerto Berrío y La Dorada. La mayoría de todos estos incontables fusilamientos fue denunciada valientemente por el periódico comunista *Voz* y está actualmente documentada en sus detalles en informes de diversas ONG de derechos humanos, tanto colombianas como internacionales. No hay equivocación si se dice que constituyó el antecedente para la siguiente operación de exterminio comunista denominada el “Baile Rojo”, con la que se exterminó a la Unión Patriótica, una década después.





Bill Clinton, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez

GEO-ESTRATEGIA

Invitado por el círculo América Latina del partido de la izquierda alemana Die Linke, como participante del seminario sobre globalización e integración regional en América Latina, realizado en Karl Liebknecht Haus de la Kleine Alexanderstrasse, de Berlín, dicté una conferencia el sábado 10 de mayo de 2003, publicada 10 días después en el portal Argenpress. info con el nombre de “Operación geoestratégica global de los Estados Unidos para anexarse América Latina”, donde expuse lo siguiente:

La operación geoestratégica global que el Imperio adelanta para recolonizar la América Latina y en especial la región andino-amazónica, lleva más de una década de implementación y por lo tanto no es una consecuencia del fatídico 11 de septiembre. En cambio, se acelerará después de que el Asia central y la región árabe estén aseguradas y controladas definitivamente.

Para comprenderla en todo su tamaño, es indispensable concatenar y conocer en detalle tres documentos estratégicos esenciales que ha producido la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, y que se encuentran en plena ejecución: uno, es el documento conocido como 'Santa Fe IV'; el segundo, es el proyecto para la creación de un Área de Libre Comercio en las Américas, conocido por sus siglas ALCA; y el tercero, es el conocido como Plan Colombia, ampliado a la región andina para abarcar los países de la antigua república de la Gran Colombia, creada por Simón Bolívar.

I. SANTA FE IV

El documento Santa Fe IV, cuya primera versión apareció en la década de los 80, fue producido para la campaña presidencial del presidente de los Estados Unidos, George Bush, por el staff del Partido Republicano, dirigido por el diplomático Lewis Tambs y otros miembros del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales y del Consejo para la Seguridad Interamericana, como Roger Fontaine, Francis Lynn y Gordon Summer, constituye un verdadero plan (DOFA) de debilidades y fortalezas para la seguridad de los Estados Unidos, que enumera y explica las siguientes amenazas:

- 1º La República de Cuba y su dirigente Fidel Castro.
- 2º La presencia de la República Popular China en América Latina.
- 3º Las drogas narcóticas como arma de destrucción masiva y su producción en Latinoamérica.
- 4º Las guerrillas narco-terroristas de Colombia.
- 5º El surgimiento del bolivarismo como ideología latino-americana y anti-hegemónica.
- 6º El riesgo que representa en los ejércitos de América Latina, el surgimiento de militares nacionalistas.
- 7º El retiro de Panamá del ejército de Estados Unidos y de sus bases.
- 8º La demografía en el continente que, junto con las migraciones incontroladas, pone en riesgo la supremacía de los anglo-sajones en Estados Unidos.
- 9º La deuda externa de los Estados Unidos (en junio del 2000) igual a 6.000 mil millones de dólares y la de Latinoamérica que se ha tornado impagable, amenazando el sistema financiero transnacional.
- 10º El desempleo en Estados Unidos. Ocasionado por la transferencia de fábricas a otros países, en busca de santuarios o zonas francas donde los salarios sean reducidos y no existan impuestos.
- 11º La creciente oleada de rechazo popular al neoliberalismo que arrasó social y económicamente el continente en los últimos 20 años.
- 12º La ingobernabilidad y las crisis económicas y sociales como las de Méjico, Brasil y Argentina, que debieron ser pagadas por el Tesoro de los Estados Unidos.
- 13º La acelerada destrucción de la Amazonía como fuente de la vida (oxígeno, agua y genes) y el uso irracional que se hace de sus recursos estratégicos como petróleo, gas y minerales.

14º La declinación de Estados Unidos y la necesidad de mostrar el poderío militar: “Para que la mundialización funcione, Estados Unidos no debe tener miedo de actuar como la superpotencia invencible que es en realidad. La mano invisible del mercado no funcionará jamás sin un puño invisible. McDonald’s no puede expandirse sin Mc. Douglas, el fabricante de los aviones F-15. El puño invisible que garantiza la seguridad mundial de las tecnologías del Silicón Valley, se llama ejército de los Estados Unidos” (Palabras de Madeleine Albright, Secretaria de Estado de los Estados Unidos. 1999)

En cuanto a las oportunidades, Santa Fe IV destaca las siguientes:

1º La vigencia y actualidad de la doctrina Monroe: “América para los Americanos” (léase estadounidenses).

2º Los mecanismos para la defensa del continente que están vigentes y se deben emplear a necesidad:

- TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) firmado en Río de Janeiro, 1947.

- Junta Interamericana de Defensa.

- South-Com (comando sur del ejército de Estados Unidos) que, trasladado desde Panamá a Miami, fue reestructurado totalmente.

3º La “doctrina Powell” de las guerras asimétricas humanitarias, cuyas mejores y más didácticas explicaciones se han hecho a través del canal noticioso de CNN en Irak y Afganistán.

4º La tendencia irreversible a la transnacionalización. Primero, del capital financiero; segundo, de la ideología neoliberal; tercero, de la justicia estadounidense; y cuarto, de los ejércitos del hemisferio.

5º La ubicación estratégica fundamental de Colombia como esquina entre los mares Caribe y Pacífico y puente hacia la amazonía, los Andes y Venezuela y, por lo tanto, con mayor valor global que el mismo Panamá.

II. ALCA

El segundo documento es el “Área de Libre Comercio de las Américas para el año 2005”, más conocido como ALCA, presentado en mayo del 2002 durante la cumbre hemisférica y de la cual fue excluida Cuba, cuyos diseño y conceptualización vienen desde principios de la década de los 90, durante la presidencia de Bush padre, y fue continuado por la administración Clinton después de haber sido presentado en la cumbre de las Américas (Miami, 1994).

Es un proyecto que en su origen plantea la integración del continente americano mediante un aparente e inofensivo tratado de libre comercio, que en realidad es un tratado de “desregulación

y flexibilización” entre la mayor potencia económica, financiera, cultural, mediática, científica, tecnológica y militar, del mundo, y sus vecinos que, con excepción de Canadá, aparecen a su lado como unos limosneros desarraigados; y cuya agenda oculta es construir una “superestructura jurídico política e ideológica transnacional”, dirigida por el monarca electo de la república imperial de los Estados Unidos, que le permita hacer frente a la competencia europea y asiática, y que cumpla con los siguientes objetivos generales:

- Consolidar la hegemonía político militar del hemisferio trasladando los mecanismos de control alcanzados durante la guerra fría a una guerra contra el narco-terrorismo.

- Lograr un reordenamiento, o “ajuste” institucional y del aparato de producción del hemisferio, que garantice altas tasas de ganancia al capital financiero transnacional de origen estadounidense.

- Controlar las crisis y estallidos económicos y sociales del Continente para que no se desborden en migraciones descontroladas de hispanos a los Estados Unidos.

- Garantizar el acceso preferencial de los inversionistas estadounidenses a los recursos estratégicos del hemisferio, especialmente en la región andino amazónica (petróleo, gas, minerales y maderas) y a los recursos de la vida (biodiversidad genética, agua, oxígeno) convertidos en una mercancía más.

- Aprovechar las “oportunidades de negocios” que tienen los megaproyectos estratégicos de integración del Continente, como la gran red intermodal de transporte, el sistema de telecomunicaciones por satélite y cableados y la producción de energía.

Y para la región andino-amazónica desarrollar los siguientes objetivos específicos:

- El canal alterno a Panamá en el Chocó colombiano (Atrato-Truandó).

- La red fluvial suramericana (SARS-IFSA) que unirá el río Orinoco con los ríos Negro, Amazonas, Madeira, Mamoré-Guaporé, Paraguay, Tiete, Paraná y de la Plata; y permitirá el transporte desde Venezuela hasta Buenos Aires.

- La comunicación desde el delta del Amazonas con el Océano Pacífico, a través del río Putumayo y atravesando los Andes en su punto más angosto y bajo, para llegar por autopistas al puerto de Tumaco (Nariño), en Colombia, y a San Lorenzo (Esmeraldas), en Ecuador.

- El dominio de la zona llamada de las 5 fronteras: (Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela), en donde se halla una gigantesca bolsa de petróleo compartida y explotada por estos países en la actualidad, que envían el producto por oleoductos transandinos a los puertos de Tumaco, Colombia y Esmeraldas, Ecuador.

- La carretera marginal de la selva que desde el Perú llegue a Surinam.

- Y por último, el control de la región en donde nacen los grandes ríos que dan origen a la reserva de agua más importante del planeta, en el gran Amazonas: ríos Caquetá, Putumayo, Apaporis y Vaupés en Colombia, Napo en Ecuador y Marañón y Ucayali en Perú.

III. PLAN COLOMBIA

El tercer documento lo constituye el llamado Plan Colombia, ampliado con la Iniciativa Regional Andina, y que, como todo plan, tiene su esquema de antecedentes y justificación, objetivos, ejecución y control.

Andrés Pastrana, una vez elegido como Presidente en 1998, presenta ante el Congreso de Colombia el Plan de Desarrollo que por mandato de la Constitución debe hacer aprobar. Este Plan, elaborado en inglés por el gobierno de Estados Unidos y titulado "Plan for Peace, Prosperity and the Strengthening of the State", reemplaza sutilmente la formulación que antes se venía haciendo de "lucha" contra las drogas por la fórmula más acorde con lo expuesto anteriormente de "guerra" contra las drogas. Su versión definitiva existe ya para principios del año 2000, varios meses antes del 11 de septiembre.

Se planeó financiar los siete mil millones de dólares que originariamente costaba, mediante un aporte del gobierno de los Estados Unidos de 3 mil millones, y los 4 mil millones de dólares restantes, por el de Colombia (80% mediante endeudamiento externo y 20% por el ajuste fiscal y los impuestos en un proceso controlado por el Fondo Monetario Internacional).

La financiación proveniente de lo que se llamó la comunidad internacional, o mesa de aportantes, no se pudo realizar al no haber sido aprobado este plan por la mayoría de países europeos. Su condición más onerosa consiste en que, de cada dólar invertido, 0,70 centavos, irían para el gasto militar, lo que desde su inicio demuestra era un plan de guerra, justificado con la propaganda de combatir el terrorismo y las drogas narcóticas, fusionando arbitrariamente dos conceptos diferentes en el término de narcoguerrilla por el redactor de los documentos del Grupo Santa Fe, Lewis Tambs, en 1981, cuando era embajador estadounidense en Colombia, y dejando ver que su verdadera razón es la de derrotar a la insurgencia colombiana que se encuentra precisamente en el área en donde se inicia el plan.

Para cumplir este objetivo, se propuso también reestructurar radicalmente el ejército colombiano mediante una operación llamada de "reingeniería", con el fin de ponerlo bajo órdenes

directas del comando sur del ejército de Estados Unidos, a la par de asegurar el dominio y el control militar de la zona mediante un gran dispositivo anular de bases militares continentales.

La primera fase de su ejecución se realizaría en el departamento colombiano del Putumayo, para luego irlo ampliando en una segunda etapa al sureste y al centro, finalizando en tres años con el control militar de todo el país, habiendo “erradicado totalmente de Colombia” el tráfico de drogas (y por definición a la Insurgencia).

El dispositivo mayor de bases militares de Estados Unidos que entraron a remplazar a las del Canal de Panamá, tiene su centro en la importante base aero-naval de Manta en Ecuador, ubicada a orillas del océano Pacífico, a la espalda de la ya descrita bolsa petrolera de las cinco fronteras, y que es asistida por la base holandesa de Curazao y las bases de Liberia en Costa Rica y Sotocano en Honduras, las que a su vez están protegidas y apoyadas por las siguientes bases que amplían el anillo de la cadena militar: Tres Esquinas, Larandía y Puerto Leguízamo, en el Putumayo colombiano, coordinadas por los gigantescos y sofisticados radares del Guaviare y Leticia en el río Amazonas. En Perú se proyecta usar la Base de Iquitos, y en el Brasil, la de Alcántara, cerca de Manaus, que cuenta con las bases satélites de Tabatinga, frente a Leticia y Yavaraté, en el río Negro.

La “guerra contra las drogas” se adelanta en varios frentes:

—Primero, una combinación de guerra química, mediante fumigaciones masivas del veneno llamado glifosato (los colombianos lo llaman glifosfacho) sobre cultivos de coca, y de guerra biológica, mediante la aspersión indiscriminada del “hongo mata-coca”, que es una manipulación genética del *fusarium oxysporum*, descubierto en una intoxicación masiva en la antigua Unión Soviética.

—Segundo, mediante la guerra psicológica y mediática adelantada por las cadenas televisivas y periódicos controlados por la CNN, tendiente a polarizar a la sociedad colombiana a favor de la guerra y en contra de una salida política, y a desprestigiar hasta más no poder a la insurgencia colombiana, en el entendido erróneo de que desprestigio es igual a derrota política. Y decimos erróneo, pues una supuesta derrota política de la insurgencia vendría cuando se realicen los cambios estructurales en la sociedad que ella tiene como programa.

—Tercero, mediante el incremento de las operaciones militares abiertas, y de las acciones encubiertas realizadas por los paramilitares y los mercenarios de corporaciones privadas de Estados Unidos (por ejemplo: DynCorp), contratados por el departamento de Estado y constituidos en verdaderas puntas de lanza del plan. Lo que aumenta las secuelas económicas, políticas y sociales, que el escalamiento de este tipo de conflictos de baja intensidad conlleva, tal y como lo estamos presenciando.

Después de los tres años de la implementación del Plan Colombia, con las evaluaciones hechas por organizaciones no gubernamentales y hasta por agencias oficiales de los Estados Unidos y Colombia, se puede decir que el primer objetivo de transnacionalizar el ejército colombiano, convirtiéndolo en un ejército “cipayo” y desplegándolo por todo el país, está cumplido; no así el segundo, el objetivo de acabar con la producción de plantas de coca ni con el tráfico internacional de narcóticos y, mucho menos, el objetivo de resolver el histórico conflicto social y armado de Colombia que viene desde hace muchísimos años, antes que el narcotráfico con la complicidad de la clase dirigente de Colombia se convirtiera en el problema transnacional que es hoy día.

Recordemos que de los incalculables negocios generados en la industria química mundial que produce el comercio de los precursores químicos para la extracción del alcaloide cocaína, de los 500 mil millones de dólares que deja su comercialización en las calles de las grandes ciudades estadounidenses en las que se calcula que existen cerca de 23 millones de adictos a los narcóticos, y en las otras ciudades del llamado primer mundo, llega tan solo un miserable 2% a las manos de los colonos y campesinos productores y pequeños transportadores; un 13% llega a las mafias colombianas que financian las operaciones de los grupos paramilitares y las campañas presidenciales, y el restante 85% de los beneficios, es lavado en los bancos transnacionales que tienen sus sedes en Miami, Las Vegas y demás paraísos fiscales del globo.

Mientras tanto, en el sufrido territorio del Putumayo, según Indepaz, 46 personas abandonan sus hogares cada día a causa de la “guerra contra las drogas”, con un promedio mensual de 604 personas y, que para el año 2001 17.143 personas, llegaron expulsadas a los cinturones de miseria de las grandes ciudades colombianas a unirse a los dos millones de desplazados que ya deja el conflicto en el país.

El silencio prolongado que guardaron los asistentes al Seminario, me hizo pensar de momento que posiblemente había cometido algún acto impertinente para no decir impolítico, pero la salva de aplausos a continuación, volvió a poner aire en mis pulmones, y una ligera sonrisa de comprensión y agradecimiento en mi cara.

Sin embargo, las cosas se mueven. El 18 de septiembre de 2009, seis años después de leer y publicar esta ponencia, el gobierno de los Estados Unidos debió devolver al gobierno ecuatoriano, presidido por Rafael Correa, la tan cuestionada base aero-naval de Manta; cuya soberanía había sido cedida por el presidente ecuatoriano Jamil Mahuad mediante convenio de cooperación militar en 1998 y, para poder continuar con el Plan Colombia debió presionar un convenio de cooperación militar semejante con el

fin de colocar bajo jurisdicción estadounidense un amplio anillo de siete bases militares en territorio de Colombia, cuyo centro es la base geo-estratégica de Palanquero ubicada en el Magdalena Medio, asistida por las bases de Malambo en el departamento del Atlántico, la base militar de Apiay en el departamento del Meta, las bases navales de Cartagena en el Caribe y Bahía Málaga en el Pacífico, el fuerte militar de Tolemaida en el Tolima y el fuerte militar Larandia en el departamento de Caquetá; convenio firmado en Bogotá en la inolvidable fecha de 30 de octubre de 2009, por el embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Brownfield y los representantes del segundo gobierno de Uribe Vélez: el Canciller Jaime Bermúdez, el Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio y su embajador en Washington, Gabriel Silva.



El 17 de agosto de 2010, tras una intensa polémica en Colombia y una fuerte reacción en contra por parte del gobierno venezolano, apoyado por la mayoría de países latinoamericanos, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional este acuerdo. Por lo que, en adelante, y para continuar desarrollando el Plan Colombia, el ejército colombiano deberá seguir rigiendo formalmente su estrecha y simbiótica cooperación militar con el ejército de los Estados Unidos, según los convenios militares suscritos en 1952. Poco después de esta sentencia de inconstitucionalidad, el gobierno del presidente Obama trasladaría al Embajador de Estados Unidos en Colombia, Mr. Brownfield, a quien asignó el manejo de los asuntos hemisféricos del Departamento de Estado.

ROJO

A mí llegada a Colombia a mediados de 1967, encontré varios cambios apenas leídos en las cartas familiares. El presidente Guillermo Valencia había iniciado el tantas veces mencionado plan LASO, en el sur del Tolima. El entonces teniente del ejército, Harold Bedoya, con una división militar había dado de baja en el sur de Bogotá al pájaro conservador Efraín González, tan recordado en Puente Nacional y Vélez. Tres nuevos grupos guerrilleros reclamados marxistas habían surgido formalmente, demostrando que el rescoldo de la violencia política en Colombia estaba muy lejos de extinguirse. Y Lleras Restrepo, el tercer presidente del Frente Nacional, había puesto como Ministro de Educación a Octavio Arismendi Posada, un reconocido político conservador, miembro del *Opus Dei*, para implementar el plan básico para la educación superior de míster Atcon, generando una sorprendente inquietud y movilización de los estudiantes universitarios en todo el país.

En la familia, todos mis hermanos habían terminado estudios superiores y tenían sus vidas familiares independientes y la casa paterna de Vélez ya no existía, pues mi padre, poco antes de morir, la había vendido al gerente de la Caja Agraria de Vélez para que se construyera su nueva sede. Sentado en un andén, con la cabeza entre las manos, frente a una delgada pared de ladrillo musgoso que reemplazaba toda aquella vida de recuerdos. El pueblo de Vélez se había convertido simplemente en un gran recuerdo. Nada más.

Desde Bogotá, busqué sin éxito en todas las facultades de medicina públicas y privadas del país la convalidación de los tres años de estudios realizados en Sevilla. No existía ninguna convalidación de estudios con España. Todos exigían partir de cero e iniciar desde el examen de admisión. Viendo mi incertidumbre, un cuñado me aconsejó un plan sencillo y plausible para ingresar a medicina en la Universidad Nacional.

Ingresar al recién creado departamento de antropología donde cursaría las materias generales, válidas también para medicina, y al siguiente semestre pediría la reclasificación. Pero el plan, como suele suceder, me llevó inexplicablemente a otra-parte.

La Universidad Nacional vivía un acelerado proceso de encuentro e integración regional entre estudiantes provenientes de todos los rincones del país y se daba un descubrimiento de la realidad colombiana, tan deformada en las regiones. Era una especie de caldero en el que se mezclaba aceleradamente la abigarrada variedad social y cultural de Colombia y se intentaba teorizar, en medio de intensas y apasionadas discusiones, sobre las experiencias guerrilleras surgidas dos años atrás:

La experiencia costeña del Ejército Popular de Liberación (EPL), surgido sobre los pasados núcleos guerrilleros de la resistencia gaitanista del alto Sinú y San Jorge, profundamente influenciado por la concepción maoísta de la guerra popular y la revolución cultural de Mao Tse Tung.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgido también sobre los núcleos de resistencia liberal gaitanista del mencionado pariente de mi madre Rafael Rangel en la región de los ríos Chucurí y el Opón, influenciado intensamente por la revolución cubana. Y la teorización de la práctica guerrillera de las FARC, influenciada por la experiencia histórica persistente del Partido Comunista Colombiano, y surgidas tras el siempre presente ataque de 1964 al sur del Tolima. No hubo autor influido por el pensamiento marxista, incluyendo obviamente la autoridad de Marx y Engels, que no fuese citado por los partidarios o adversarios de uno u otro grupo para apoyar su práctica real.

Los cursos de sociología general, antropología general, historia general, geografía general, biología general, estadística general, economía general, etc., y las apasionadas discusiones colectivas surgidas en el campus universitario, pronto me generaron una irresistible ansiedad por conocer más; al extremo de posponer mi traslado a la Facultad de Medicina. Tuve necesidad de pasar de las generalidades al siguiente curso específico y así conocí profesores como Darío Mesa, Antonio García, Ernesto Guhl, Virginia Gutiérrez, Gerardo Molina, Blanca Ochoa, Ramón Pérez Mantilla, Patiño Roselli, y tantos otros intelectuales integrales, quienes nos dieron en aquellos años sus invaluable conocimientos a los estudiantes matriculados en sus cursos.

El primer día de clase, a la primera hora del primer curso, llegaron dos estudiantes a saludar a los “primíparos de antropología”. Uno, un poco desaliñado y, tal vez para resaltar su procedencia, llevaba una ruana y unas botas de trabajo; el otro, más robusto y con aspecto ciudadano, de bluyín y chaqueta, portaba una libreta de cuero donde anotaba cuidadosamente lo sucedido. Pidieron encarecidamente les hiciéramos preguntas, discutimos unas cuantas trivialidades y al final nos repartieron una hoja mimeografiada donde nos invitaban a ingresar a la Juventud Comunista (JUCO).

Una semana después, Boris Zapata, un inolvidable compañero de curso procedente de Montería, donde murió fusilado por Carlos Castaño 30 años después, me presentó al estudiante con aspecto ciudadano. Me estrechó la mano con energía y me dijo llamarse “compañero Sáenz”. Me anotó en su libreta como simpatizante. Nos sugirió que para entender un poco mejor el asunto en discusión en la antropología, deberíamos leer y estudiar seriamente tres textos: *El origen de la propiedad privada y el Estado*, de Engels; *El manifiesto comunista*, y *Las formaciones económicas pre capitalistas*, de Marx, texto recién descubierto por entonces y publicado en castellano. Con Boris leíamos, pero tuvimos obviamente la necesidad de aclarar conceptos en un grupo de estudios más amplio y numeroso, en el que las personas con más conocimientos nos explicaban los conceptos de tan complejo *corpus*. Al final de cada cursillo de profundización, al que acudían entusiastas compañeras, hacíamos un breve esparcimiento para entonar cantos revolucionarios, degustar empanadas, chistes y disfrutar del baile.

Más pronto de lo esperado, era ya militante y estaba colaborándole al “compañero Sáenz” en la escritura, picada de los estenciles, impresión artesanal y la venta por el valor de 10 centavos de peso colombiano, de un periodiquito de tres hojas mimeografiadas llamado *Rojo*, que aspirábamos sacar semanalmente como el vocero de los estudiantes comunistas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Bogotá. Estudio o lecturas, reuniones, fiestas de compañeros, hechura del *Rojo*, discusiones sobre el plan básico para la educación superior implementado por el gobierno, elección mía al comité de discusión del pensum de antropología, democratización y popularización de la educación universitaria estatal, la vía particular de la revolución colombiana, agresiones de la policía y el ejército al *campus* universitario, solidaridad con los campesinos

del sur del Tolima, asambleas estudiantiles, riñas con los maoístas, foquistas y trotskistas, cada uno tratando de convencer al otro con argumentos o con los puños, cierres de la universidad y despedidas de compañeros. Manifestaciones masivas y demostraciones por la democratización del país, reapertura y reingreso a la universidad purificada con rectores policías, activismo político y más reuniones de todo tipo. Así, postergando la conclusión de los estudios de medicina hasta nueva oportunidad (que llegaría tres años después procedente de la Universidad de Caldas), pasaron los cuatro años del *pénsum* de antropología y la consolidación de amistades indelebles. Cuando concluí los estudios me casé con la indulgente y amorosa madre de mis dos extraordinarios hijos, a quien había conocido un año antes en una reunión estudiantil.

La última vez que me encontré con el “compañero Sáenz”, y nos volvimos a despedir, fue durante los diálogos del Caguán, casi al finalizar el proceso de paz con el presidente Pastrana. Añoramos viejos tiempos, hablamos con intensidad sobre Simón Bolívar, la democracia directa y avanzada que necesita Colombia y la vía *indicada* para alcanzar los cambios estructurales que reclama la sociedad colombiana. Se paró y, al despedirse para siempre me estrechó con energía la mano como en el día cuando lo conocí y mirándome con certidumbre y sin revelarme dónde, sonriente me dijo con su inmodificable acento chapineruno:

– Ala, tengo guardada toda la colección de *Rojo*.

En el ocaso de las selvas del Caguán, la brisa a la vez suave y tórrida, acariciaba con ternura la copa de los árboles a nuestro alrededor...



ESTE LIBRO SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL
9 DE ABRIL DE 2012, DÍA DEL MAGNICIDIO
OLIGÁRQUICO DE JORGE ELIÉCER GAITÁN,
EN LOS TALLERES DE X²PRESS ESTUDIO
GRÁFICO Y DIGITAL S. A. BOGOTÁ,
COLOMBIA.